

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS
“ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE INTERNAMIENTO COMO
MEDIDA DE ULTIMA RATIO EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA
DE PIURA DURANTE EL AÑO 2016-2017”

PRESENTADO POR:

DANIELA ESTEFANI VEGAS HERRERA

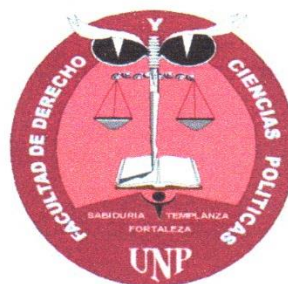
TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Derecho Penal: nuevas Tendencias

PIURA-PERÚ
2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**“ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE INTERNAMIENTO COMO
MEDIDA DE ULTIMA RATIO EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA
DE PIURA DURANTE EL AÑO 2016-2017”**

**TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL
TÍTULO DE ABOGADO**

DRA. JACQUELINE SARMIENTO ROJAS

ASESOR

BACH. DANIELA ESTEFANI VEGAS HERRERA

TESISTA

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Derecho Penal: nuevas Tendencias

PIURA-PERÚ

DECLARACION JURADADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE LA TESIS

DANIELA ESTEFANI VEGAS HERRERA, identificada con DNI N° **47258964**, Bachiller de Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, y domiciliado en **Calle los Jazmines Mz- D Lote 04 A.H 31 de Enero** del Distrito **PIURA** Provincia **PIURA** Departamento **PIURA** Celular **975248752**.Email: **dvegas_12@outlook.com**

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que la tesis que presento es original e inédita, no siendo copia parcial ni total de una tesis desarrollada, y/o realizada en el Perú o en el Extranjero; en caso contrario de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor.

En fe de lo cual firmo la presente.



Piura, Enero del 2019.



DNI N° 47258964

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años

Art. 4 Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**“ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE INTERNAMIENTO COMO MEDIDA
DE ULTIMA RATIO EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA
DURANTE EL AÑO 2016-2017”**


TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO



Doctor PEDRO GERMAN LIZANA BOBADILLA
PRESIDENTE



Magister GUILLERMO CEVALLOS LOPEZ
SECRETARIO



Magister ANDRES ERNESTO VILLALTA PULACHE
VOCAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
026-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: **"ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE INTERNAMIENTO COMO MEDIDA DE ULTIMA RATIO EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DURANTE EL AÑO 2016 Y 2017"**, presentada por la Bachiller **DANIELA ESTEFANI VEGAS HERRERA** con el asesoramiento del Dra. **JACQUELINE SARMIENTO ROSAS**; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA (X)

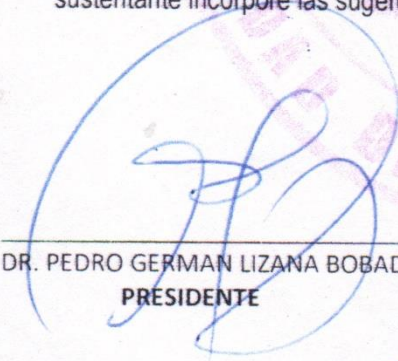
DESAPROBADA ()

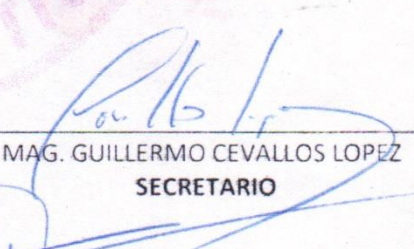
Con la mención de:


SOBRESALIENTE

- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 24 de enero de 2019


DR. PEDRO GERMAN LIZANA BOBADILLA
PRESIDENTE


MAG. GUILLERMO CEVALLOS LOPEZ
SECRETARIO


MAG. ANDRES VILLALTA PULACHE
VOCAL

DEDICATORIA

A mi abuela y mi madre, por motivarme todos los días de mi vida a seguir cumpliendo cada una de mis metas, porque con su apoyo y el de mi familia han forjado una sólida base en mí.

A su vez, a las personas valiosas que conocí dentro de la etapa de estudios entre ellos a mis mejores amigas (o). Ellos fueron esa cuota de competitividad que exigía a uno mismo colocarse a su altura.

AGRADECIMIENTO

AGRADEZCO A NUESTRO DIVINO CREADOR, quien siempre me dio las señales precisas para no desistir en el camino, colocando a personas inigualables que contribuyeron mis pasos con su experiencia, consejos y enseñanzas.

A la **DRA. JACQUELINE SARMIENTO ROJAS**, por inspirar los más sublimes sueños de justicia y Protección de los Adolescentes, a la **ABOG. ESTHELY BAYONA CASTRO**, maestra, amiga siempre.

A **ALMENDRA, ELIZABETH, GRECIA, KARITO, ERIKA, EXMIR, JAIRO**, por contagiar su perseverancia de que todo en esta vida se puede; A **JAVIER** que siempre me motiva a seguir mis sueños; y a mi **LUCIA** que desde Cielo ve con alegría mis logros y espera que tarde en llegar a su entrevista.

A mi **MADRE, ABUELA, TIA LALY**, y mi familia quienes son el motor de mi vida.

GLOSARIO

1.- DESARROLLO INTEGRAL: Proceso de cambio evolutivo determinado por múltiples factores, que se expresa en manifestaciones corporales, psicológicas y sociales que varían a lo largo del tiempo posibilitando la integración y diferenciación del ser humano. Las transformaciones ocurren desde la concepción y están determinadas tanto por aspectos individuales como por el entorno, que cuando es el apropiado brinda la oportunidad de expresar las potencialidades del patrimonio genético.

2.- SISTEMA PENAL JUVENIL: Es un sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. La característica principal de estos sistemas es que la pena es al mismo tiempo educativa y sancionadora, permite la reparación del daño causado y consecuentemente el archivo de la causa con la menor restricción de derechos posible para privilegiar la integración social del joven. El mandato de la justicia penal adolescente es contribuir a que los adolescentes se responsabilicen de sus actos asegurando siempre su bienestar. La privación de libertad debe ser el último recurso y sólo para infracciones muy graves, siempre se dan prioridad a las medidas socioeducativas.

3.- SANCIONES: Según el artículo 231° Código de los Niños y Adolescentes prescribe que el adolescente que cometiera un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo a la legislación penal, solo puede ser sometido a las siguientes sanciones: a) Socioeducativas, b) Mandatos y Prohibiciones y c) Privativas de libertad.

4.- LA AMONESTACIÓN: Según el artículo 231°-A del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la sanción de amonestación consiste en la llamada de atención que hace el Juez, oralmente, al adolescente, exhortándolo a cumplir con las normas de convivencia social.

5.- LA LIBERTAD ASISTIDA: Según el artículo 231°-B del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la libertad asistida consiste en otorgar la libertad al adolescente, obligándose éste a cumplir programas educativos y recibir orientación, con

la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el tratamiento del (la) adolescente. Esta medida se aplica por un plazo mínimo de seis y máximo de doce meses, siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no mayor de dos años y no haya sido cometido mediante violencia o amenaza, ni puesto en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas.

6.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Según el artículo 231°-C del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas gratuitas, de interés social, en entidades asistenciales, de salud, educación que desarrollen programas educativos o de orientación u otras instituciones similares, ya sean públicas o privadas. Esta sanción se aplica siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

7.- REPARACIÓN DIRECTA A LA VÍCTIMA: Según el artículo 231°-D del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la reparación consiste en la prestación directa de un servicio por parte del (la) adolescente en favor de la víctima, con el fin de resarcir el daño causado con la infracción. Esta sanción se aplica, siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no mayor de tres años, requiriéndose el acuerdo de la víctima con el adolescente, que deberá ser aprobado por el Juez.

8.- MANDATOS Y PROHIBICIONES: Según el artículo 232° del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que los mandatos y prohibiciones consisten en reglas de conducta impuestas por el Juez con el objeto de regular el desarrollo social del (la) adolescente, así como promover su formación. Tienen una duración máxima de dos años.

9.- INTERNACIÓN DOMICILIARIA: Según el artículo 233° del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la internación domiciliaria es la sanción privativa de libertad del (la) adolescente en su domicilio habitual, donde se encuentre su familia, cuya duración no es mayor de un año, siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena

privativa de libertad no menor de tres o no mayor de cuatro años, según el tipo penal. De no poder cumplirse en su domicilio habitual, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practica en el domicilio de cualquier familiar que coadyuve a que se cumplan los fines de la sanción.

10.- LIBERTAD RESTRINGIDA: Según el artículo 234° del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la libertad restringida es una sanción privativa de libertad en medio libre, a través de la asistencia y participación diaria y obligatoria del (la) adolescente a programas de intervención diferenciados, sin discriminación de género, de enfoque formativo - educativo, que orientan y controlan sus actividades, cuya duración es no menor de seis meses ni mayor de un año.

11.- INTERNACIÓN: Según el artículo 235° del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que la internación es una sanción privativa de libertad de carácter excepcional y se aplica como último recurso, siempre que se cumpla cualquiera de los siguientes presupuestos: a) Cuando se traten de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor de seis años, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas; b) Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y reiteradamente las sanciones de mandatos y prohibiciones o las privativas de libertad impuestas distintas a la de internación c) La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos graves en un lapso que no exceda de dos años y d) Cuando según el informe preliminar del equipo multidisciplinario, el adolescente infractor sea considerado de alta peligrosidad, en atención a sus características, personalidad, perfil y demás circunstancias y rasgos particulares.

LISTA DE ABREVIATURAS

CDN	: Convención sobre los Derechos del niño
CNA	: Comité de los Derechos del Niño
C.N.U.D.N	: Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
TC	: Tribunal Constitucional
CP	: Código Penal
ONU	: Organización de las Naciones Unidas.
JFP	: Juzgado de Familia de Piura

RESUMEN

El presente trabajo de investigación resulta sustancial pues su indagación permitirá conocer que el actual Código de los Niños y Adolescentes promulgado el día 21 de julio de 2000 y publicado el 07.08.2000 – Ley 27337; a dividido a éstos en niños y adolescentes pasibles de medidas de protección y medidas socioeducativas respectivamente, propugnando de esta manera que los adolescentes no son ya objeto de compasión y represión sino sujetos derechos en proceso de desarrollo.

En ese sentido, nuestra investigación basada en el marco de la justicia penal juvenil, busca identificar por medio del análisis de los legajos de los cuatro juzgados de Familia de Piura si la regulación normativa de la aplicación del internamiento como medida preventiva y sanción, se viene cumpliendo con los principios y estándares que establecen las normas que integran el corpus iuris internacional en materia de adolescente y la política criminal que asume nuestro país con respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, específicamente en cuanto a la aplicación del internamiento ordenada como medida ordinaria o excepcional, tema actual y de trascendental importancia debido al aumento de la delincuencia juvenil que hoy día presenta nuestra sociedad.

Finalmente, advertiremos si las sentencias y autos de apertura ordenadas por los juzgados de familia de Piura habrían vulnerado los principios que regulan el sistema de justicia penal juvenil, entre los cuales está el principio de excepcionalidad que regula la aplicación del internamiento como medida ultima ratio.

PALABRAS CLAVES: Adolescente, Internamiento, Tratados Internacionales, Jueces de familia.

ABSTRACT

The present investigation work is substantial because its search will allow to know that the current Code of Children and Adolescents promulgated on July 21, 2000 and published on August 7, 2000 - Law 27337; divided into children and adolescents able to measures of protection and measures of socio-educational respectively, proposing in this way that adolescents are no longer the object of compassion and repression but subjects of duty in the development process.

In that sense, our research based on the context of juvenile criminal justice, looks for identify through the analysis of the files from the four Piura's family courts if the normative regulation of internment application as a preventive measure and sanction, has been complying with the principles and standards established by the regulations integrated in the international corpus iuris on adolescents and the criminal policy that our country assumes with respect to adolescents in conflict with the criminal law, specifically with regard to the application of internment ordered as Ordinary or exceptional measure, current issue and of transcendental importance due to the increase of juvenile delinquency that presents our society nowadays.

Finally, we will advise if the judgments and opening orders ordered by the family courts of Piura would have infringed the principles that regulate the juvenile criminal justice system, such as the exceptionality principle that regulates the application of internment as a ultima ratio.

KEY WORDS: Adolescent, Internment, International Treaties, Family Judges.

INDICE

DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTO	V
GLOSARIO	VI
LISTA DE ABREVIATURAS	IX
RESUMEN.....	X
ABSTRACT.....	XI
INDICE	XII
INTRODUCCIÓN	17

CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO

1.1 LOS MODELOS QUE DIERON ORIGEN A LOS SISTEMAS DE JUSTICIA JUVENIL	17
1.1.1 Modelo Penal o Penal Indiferenciado	17
1.1.2 Modelo Tutelar y Control Social.....	17
1.1.3 Modelo de Justicia o Garantista	18
1.2 EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL.....	19
1.2.1 Evolución Histórica.....	19
1.2.2 Características en un proceso penal de menores	23
1.2.3 Objetivos del Sistema de Justicia Juvenil	24
1.2.4 El Corpus Iuris de los Derechos Humanos de los adolescentes	27
1.2.5 El interés superior del niño y el Sistema de Justicia Juvenil.....	29
1.2.6 La Doctrina de la Protección Integral en el Sistema de Justicia Penal Juvenil Peruano	32
1.3 PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL SISTEMA PENAL JUVENIL	36
1.3.1 Principio de Interés Superior del Niño, Niñas y de los Adolescentes	36
1.3.2. Principio de Inmediación	38
1.3.3. Principio de Contradictorio	38
1.3.4. Principio al Debido Proceso.....	39
1.3.5 Principio de Legalidad	40
1.3.6. Principio de Igualdad y No Discriminación	41
1.3.7 Principio de Intervención Mínima	41
1.3.8 Principio de Presunción de Inocencia	44
1.3.9. Principio de Respeto a la Opinión del Niño y del Adolescente	45
1.3.10 El Derecho a la Vida, la Supervivencia y el Desarrollo.....	46
1.3.11 Principio de Doble Garantía.....	46
1.3.12 Principio de Dignidad del Niño y adolescente.....	46

1.3.13 Principio de Confidencialidad y Reserva del Proceso.....	48
1.3.14 Principio de Impugnación	49
1.3.15 Principio sobre la Presunción de Minoridad	50
1.3.16. Principio de Especialización	51
1.3.17 Principio de la inviolabilidad de la defensa	53
1.3.18. Principio de Humanidad de las Medidas y Orientación a la Rehabilitación	55
1.3.19. Principio de Jurisdiccionalidad y Prohibición de Condena en Ausencia	56
1.3.20. Principio de Progresividad y No Regresividad de los Derechos Humanos	57
1.3.21 Principio de Proporcionalidad.....	58
1.3.22 Principio de excepcionalidad	58
1.4 LAS SANCIONES HA APLICARSE EN LA LEY PENAL CONTRA ADOLESCENTES	
INFRACTORES.....	59
1.4.1. Introducción	59
1.4.2. Naturaleza jurídica de las sanciones	61
1.4.3 Criterios para la Determinación de la Sanción.....	64
1.4.4. Sanciones susceptibles de ser Impuestas a los Adolescentes Infractores.....	70
1.5 MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES ACUSADOS	
DE INFRINGIR LEYES PENALES.....	87
1.5.1 Medidas Cautelares No Privativas de la Libertad	87
1.5.2 Medidas Cautelares Privativas de la Libertad	88
1.6 LOS ADOLESCENTES QUE SON DECLARADOS RESPONSABLES DE INFRINGIR	
LEYES PENALES Y LAS MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LA	
LIBERTAD.....	96
1.6.1 Límites a la privación de libertad.....	96
1.7. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPECTO A LA JUSTICIA	
PENAL JUVENIL	103
1.7.1 Constitución Política del Perú 1993	103
1.7.2 Código de los Niños y Adolescentes.....	104
1.7.3 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (REGLAS DEBEIJING)	107
1.7.4 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIRECTRICES DE RIAD)	108
1.7.5 Convención de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño	109
1.7.6 Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad.	110

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

2.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	111
2.2.	FORMULACION DEL PROBLEMA	112
2.3	OBJETIVOS	112
2.3.1.	Objetivo General	112
2.3.2.	Objetivo Especifico	112
2.4.	HIPÓTESIS GENERAL	113
2.5	VARIABLES.....	113
2.5.1	Variable Independiente	113
2.5.2	Variable Dependiente.....	113
2.5.3.	Conceptualización De Variables	113
2.6.	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	116
2.7.	DISEÑO O CRITERIO METODOLÓGICO A EMPLEAR PARA LA PROBANZA DE LA HIPÓTESIS	118
2.7.1.	Tipo De Investigación	118
2.7.2.	Método de Investigación para la Probanza Jurídico Social.....	118
2.7.3	TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN	119
2.7.4	FUENTES DE INVESTIGACIÓN.....	120

CAPÍTULO III:

PROBANZA DE LA HIPOTESIS, RESULTADOS Y DISCUSION

3.1.	PROBANZA JURÍDICO SOCIAL- DOCTRINARIA	121
3.1.1	MUESTREO Y ESTADISTICA QUE SE APLICO	121
3.1.2	VALIDACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LAS VARIABLES	146
3.2	PROBANZA DE LA HIPÓTESIS	151
CONCLUSIONES.....		160
RECOMENDACIONES.....		162
APÉNDICE.....		166
ANEXOS		199

ÍNDICE DE TABLAS

Cuadro N°1: INGRESOS TOTAL POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DEL AÑO 2017.....	117
Cuadro N°2: PRODUCCION GENERAL POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DEL AÑO 2017.....	118
CuadroN°3: PRODUCCION RESPECTO DE SENTENCIAS Y AUTOS EN MATERIA FAMILIA INFRACCION- PERIODO 2017.....	121
Cuadro N°4: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 1° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	122
Cuadro N° 5: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 2° JUZGADO DE FAMILIA– PERIODO 2017.....	123
Cuadro N° 6: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 3° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	124
Cuadro N° 7: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 4° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	125
Cuadro N° 8: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EN EL 1° JUZGADO DE FAMILIA-PERIODO 2017.....	127
Cuadro N° 9: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 2° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	128
Cuadro N° 10: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 3° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	129
Cuadro N° 11: INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 4° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	130
Cuadro N° 12 CRITERIOS PARA EMITIR INTERNAMIENTO PREVENTIVO -PERIODO 2017.....	134
Cuadro N°13: CRITERIOS PARA EMITIR INTERNAMIENTO COMO SANCION-PERIODO 2017.....	135
Cuadro N° 14 APLICACIÓN DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA CON MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAMIENTO.....	137

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: NGRESOS TOTAL POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DEL AÑO 2017.....	117
Ilustración 2:PRODUCCION GENERAL POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DEL AÑO 2017.....	118
Ilustración 3 PRODUCCION RESPECTO DE SENTENCIAS Y AUTOS EN MATERIA FAMILIA INFRACCION- PERIODO 2017.....	121
Ilustración 4INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 1° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	122
Ilustración 5 INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 2° JUZGADO DE FAMILIA– PERIODO 2017.....	123
Ilustración 6INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 3° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	124
Ilustración 7INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 4° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	125
Ilustración 8 INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EN EL 1° JUZGADO DE FAMILIA-PERIODO 2017.....	127
Ilustración 9 INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 2° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	128
Ilustración 10 INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 3° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	129.
Ilustración 11 INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 4° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017.....	130
Ilustración 12 CRITERIOS PARA EMITIR INTERNAMIENTO PREVENTIVO -PERIODO 2017.....	134
Ilustración 13 CRITERIOS PARA EMITIR INTERNAMIENTO COMO SANCIONPERIODO 2017.....	135
Ilustración 14 APLICACIÓN DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA CON MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAMIENTO.....	137

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación versa sobre la aplicación del internamiento como medida socio educativa o medida coercitiva personal, la misma que está regulada en el Código de los Niños y Adolescentes y en los diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, los mismos que consideran dicha medida como una de carácter excepcional y aplicada como último recurso; en virtud, de ello, consideramos importante analizar, si durante el periodo del año 2016 y 2017 los Juzgados de Familia del Distrito Judicial de Piura han vulnerado los principios mínimos a considerar al momento de ordenar el internamiento como medida socio educativa o como medida coercitiva personal a los adolescentes infractores de la ley penal.

De este modo, para ser legítima, toda medida cautelar privativa de la libertad que se aplique a un adolescente acusado de infringir leyes penales debe cumplir con el principio de excepcionalidad, es decir, debe ser aplicada cuando el adolescente represente un peligro inmediato y real para los demás; y como último recurso cuando no exista otra alternativa, por lo que se deberá aplicarse sanciones distintas al internamiento para casos de mínima gravedad; de esta forma, la privación de la libertad deberá ser entendida de forma excepcional cuya aplicación deberá evitarse al máximo; es más, todo el Sistema Penal debe ser de mínima intervención (sólo frente a las infracciones graves) y también de ultima ratio (cuando no se pueda resolver el problema fuera del sistema).

Desde esta perspectiva, la presente tesis busca analizar y comprobar si durante el periodo del año 2016 y 2017 los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Piura han vulnerado los principios que regulan la aplicación del internamiento como medida socio educativa o medida coercitiva personal, desnaturalizando así su carácter de medida de ultima ratio.

Visto de esta forma, la presente investigación se divide en tres Capítulos: En el primer capítulo de la investigación se desarrollará lo concerniente al marco teórico iniciando con los antecedentes y la descripción de las diversas instituciones y los pronunciamientos sobre el tema que forman parte del título de la presente tesis.

En el segundo capítulo se desarrollará el Diseño Metodológico el cual contiene la descripción del problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, las variables y el diseño metodológico a utilizar.

Por último, en el tercer capítulo se tendrá la probanza de la hipótesis y resultados y finalmente las conclusiones, recomendaciones, anexos y bibliografía.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1 LOS MODELOS QUE DIERON ORIGEN A LOS SISTEMAS DE JUSTICIA JUVENIL

1.1.1 Modelo Penal o Penal Indiferenciado

Según lo señalado por Ana María Solar Villalta en el tema principios que inspira el sistema penal juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de justicia Penal juvenil en el Perú, 2016, págs. 23-24) refiere que este modelo, como su nombre lo sugiere, se traduce en la aplicación a la conducta infractora de un adolescente de pena y procedimientos penales pensados para los adultos con algunas atenuaciones, según el caso en particular.

Este modelo posee las siguientes características(Gomez Cervantes, 2007):

- No se diferencia ni se reconocen la especialidad de la Justicia Penal Juvenil.
- La sanción tiene un carácter preventivo general.
- Se privilegia la sanción privativa de libertad.
- La sanción se aplica en establecimientos para adultos, con o sin poca diferenciación.
- Se busca solucionar la criminalidad por medio de la ley penal.

1.1.2 Modelo Tutelar y Control Social

Asimismo, Ana María Solar Villalta en el tema principios que inspira el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de justicia Penal juvenil en el Perú, 2016, pág. 24), respecto a este modelo sostiene que es también llamado modelo tutelar, asistencialista o paternalista, el mismo que está centrado en la “Doctrina de la Situación Irregular”, de acuerdo a la cual el menor de edad es considerado objeto de derecho e inimputable; toda vez que los niños son vistos como seres y/o agentes carentes de racionalidad, por ende, no puede atribuírseles responsabilidad penal ni tampoco se le reconocen las garantías procesales como se hace cuando se trata de un adulto. A consecuencia de ello, cualquier acción penal que éstos cometan se atribuirá a los elementos disfuncionales de su entorno o medio social;

debiendo limitarse a identificar las causas sociales de su comportamiento para tratarlas y posteriormente lograr que éstas superen.

El juez especialista es el que determina que se entiende por “Situación Irregular de un menor”. Por ejemplo, según Juan Carlos Cervantes Gómez, serían situaciones irregulares las siguientes(Cervantes Gomez, 2007):

- Si el menor se encuentra en estado de abandono.
- Si hay falta de atención a sus necesidades.
- Si el menor fue autor o participe del delito.
- Si el menor carece de representación legal.
- Si es adicto a las drogas.
- Si el menor es dependiente o incapaz, etc.

1.1.3 Modelo de Justicia o Garantista

Respecto de este modelo Ana María Solar Villalta en el tema Principios que Inspira el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de justicia Penal juvenil en el Perú, 2016, pág. 25), sostiene que el Modelo de Justicia o Garantista es también llamado “Responsabilidad Penal de los Adolescentes” y surge con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, pasando de la doctrina de la situación irregular a la protección integral del niño o niña, otorgándoles carácter de sujetos de derecho y obligando a los estados partes a reconocer todos los derechos y garantías procesales que como tal les corresponden, imponiéndoles la obligación de adecuar sus legislaciones internas. Aquí se puede observar que se refuerza la idea que los jóvenes si pueden ser sujetos de responsabilidad penal por sus actos.

Las características de este modelo son las siguientes(Tiffer Sotomayor, 2017, pág. 257):

- Garantiza una descripción detallada de los derechos de los menores en un proceso limpio y transparente, limitándose al mínimo posible la intervención de la justicia penal.

- El derecho penal juvenil es autónomo respecto al Derecho Penal de adultos, particularmente en cuanto al sistema sancionatorio, por lo que contempla una jurisdicción especializada para el juzgamiento de delitos cometidos por menores de edad.
- Se establece una amplia gama de sanciones, privilegiando las sanciones no privativas de libertad, basadas en principios educativos.
- Sin embargo, la sanción mantiene una connotación negativa, pues el menor tiene que cargar con las consecuencias de su comportamiento.

1.2 EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL

1.2.1 Evolución Histórica

Respecto a la evolución histórica del Sistema de Justicia Juvenil es importante mencionar que la idea de establecer una Justicia Penal diferente para los menores surge en Chicago, en 1899, donde el movimiento “los salvadores del niño” impulsó la creación de un tribunal para niños, lo cual constituyó el primer intento que se conoce de tratarles de forma distinta a los adultos que tenían que someterse a un procedimiento penal, y pronto estos tribunales se extendieron al resto del país; es por ello, que la Ley de Chicago de 1899 dio al Tribunal jurisdicción en materia de niños “dependientes, abandonados y delincuentes”. La competencia de ese Tribunal no se limitaba a la posibilidad de intervenir cuando el menor realizaba una infracción penal, sino que su misión era igualmente la prevención y la actuación respecto de los menores en todas las cuestiones familiares o de protección que fuesen necesarias, sin que existiese unos procedimientos formales y agravados de su intervención el juez tenía amplios poderes de actuación y decisión.

De forma paralela, en Europa se fueron creando en Gran Bretaña (1912), España (1920), los Países Bajos (1921), Alemania (1922) y Austria (1922), de tal forma que en 1931 se podían contabilizar 30 países con tribunales específicos para menores o jóvenes.

En razón a ello, ninguna norma internacional ha llegado a imponer la obligación a los estados de tener tribunales o juzgados específicos de menores, lo cierto es que hay una

tendencia generalizada, al menos, tener un sistema jurídico diferenciado de los adultos que al mismo tiempo establezca sus derechos y garantías; tal como lo establece el artículo 40.3¹ de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es así que nuestro país, a consecuencia del movimiento filantrópico que se crearon para proteger a los niños frente a los excesos y condiciones de miseria que sucedieron en la rápida industrialización de principios de siglo vio nacer en Cataluña y el país Vasco los primeros tribunales de niños en Bilbao (1920), Tarragona (1920) y Barcelona (1921).

Es así que la primera ley que reguló su funcionamiento fue la ley de bases sobre organización y atribuciones de tribunales para niños publicados el 15 de agosto de 1918, objeto de sucesivas reformas hasta llegar al texto refundido de la legislación sobre tribunales tutelares de menores y el reglamento para su aplicación del 11 de junio de 1948. Este texto ha estado vigente hasta 1992 en que se publicó la ley 4/1992, del 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento en los juzgados de menores. Si se tiene en cuenta que desde 1978 existe una constitución que establece un sistema de garantías y derechos de las personas que deben someterse al procedimiento judicial sin distinto de edades y sobre la base del principio de igualdad contenido en su artículo 14° aun resultara más llamativo y penoso comprobar como hasta ese año 1992 se aplicaron a los menores que se sometían a un procedimiento penal los criterios y principios que a continuación se destacan, porque, además, es necesario conocerlos para tomar una posición clara respecto al sistema que se quiera elegir para enjuiciar a los menores, ya que ello también derivan importantes consecuencias.

Así, el texto de 1948, inspirado en los principios de la Escuela Positiva, consideraba al menor infractor como un ser enfermo necesitado de ayuda y tratamiento en consonancia con la excepción de responsabilidad penal que los sucesivos Códigos Penales establecían para los menores de diecisiete años, creo un sistema inquisito en el que el juez le eran otorgados amplios poderes, sin que existiese prácticamente ningún control a sus actuaciones

¹ “...artículo 40.3 los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes alegue que han infringido esas leyes...”

y decisiones por que se encendían que todo lo hacía para ayudar y proteger la menor (de ahí la terminología” tutelar”), que aún no era responsable de sus actos. Principios que hoy resulta que estén ausentes del proceso penal, tales como los de legalidad, tipicidad, acusatorio formal, contradicción y doble instancia y garantías como el derecho hacer informado o asistido del letrado esta proscrita puesto que, como todo era para bien del menor, no se estima necesaria su aplicación ya que se le estaba protegiendo. En este punto, fue frecuente en los textos de esa época encontrar argumentos que justificaba la actuación de los tribunales titulares y la intervención de esa Jurisdicción que “...no es para infringir un castigo sino más bien un beneficio al menor, pues no es jurisdicción represiva, sino protectora y tutelar; lejos de servirle al delincuente la prescripción para evitarle un mal, le priva de un bien; luego parece lo lógico y natural, que los delitos y faltas del menor no prescriban nunca y que en todo momento puedan intervenirlos tribunales para niños, para salvar y ayudar al menor, y conseguir su enmienda...”.(Vives LLamazares, 1928, pág. 35)

El juez puede podría actuar contra el menor que había cometido una infracción criminal y contra el que no la había cometido, puesto que la ley podría ser también aplicada a los menores que cometieren conductas no delictivas pero que se consideran irregulares, ya que su ámbito se extienda a “los casos de menores de 17 años prostituidos, licenciosos, vagos y vagabundos, siempre que, a juicio de tribunal respectivo, requiere el ejercicio de su facultad reformadora”.

MENDIZABAL OSES estableció una relación de cuales podían ser estas conductas irregulares y las califico según supusiese un atentado contra la propiedad realidad vital del menor, contra el significado de lo tuyo y lo mío contra el respeto que nos merecen los demás. Dentro de la primera categoría incluyo como tales conductas los atentados contra la propia vida y salud, frecuentar establecimiento inadecuados para su edad, vagar o deambular a deshora y pernoctar en la vía pública o despoblado, merodear en las proximidades vías férreas, aeropuertos, autopistas o carreteras, ejercer la mendicidad y observar una conducta desordenada, disoluta o indecente. Dentro de la segunda categoría incluyo como conducta irregular el apropiarse de cosas que no pertenecen, utilizar las cosas comunes sin el cuidado de las que se usan como propias, molestar o causar daño a los animales ajenos u observar una conducta obscena o procaz en público.(Mendizabal Oses, 1974, pág. 260 y 55)

De ahí que el principio de legalidad perdiera sentido puesto que “ no se trataba de acuñar -tipos de delitos sino tipologías de delincuentes” esto era una consecuencia lógica de los principios de la escuela positivista que consideraba el delito como un hecho humano, lo cual motivo que el foco de atención se trasladase hacia el autor del delito, que, en cuanto que no era libre al cometer el hecho delictivo debía ser tratado de reeducarlo sobre las bases de medidas que siempre iban a tener una finalidad beneficiosas y preventiva.

Por todo ello, el menor no tenía derecho de un letrado, no era informado de sus derechos porque prácticamente no tenía ninguna y no existían unas normas de procedimiento ya que el juez expresamente estaba autorizado en el artículo 15 de la Ley de Tribunales Titulares de Menores a no someterse a ninguno. Por otro lado, se precisa también que la presencia del Ministerio Fiscal no está prevista, por lo que el proceso era de carácter inquisitivo y el sistema de recursos a las resoluciones de los jueces, que no tenían obligación de fomentárselas, era muy limitado.

En ese sentido, lo más grave de ello fueron las consecuencias sufridas por los menores, ya que la ley preveía la posibilidad de adoptar diversas medidas con relación a ellos entre las cuales se encontraba la de internamiento, sin especificar el límite máximo de su duración y sin que el juez estuviese obligado a determinarlo o revisar su resolución cada cierto tiempo.

De acuerdo con esta filosofía los antiguos tribunales titulares, además de la facultad de reforma, que tenían carácter penal, asumían la llamada “facultad protectora” en virtud de la cual actuaban en protección de los menores “contra el indigno ejercicio del derecho a la guarda y educación” (artículo 93º. de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores). En realidad , ambas funciones, o facultades se confundieron en la práctica y con frecuencia aún menor que se encontraba en situación respecto de la que era necesario adoptar una medida protectora², se le acaban aplicando auténticas medidas de reforma consistentes, incluso, en privaciones de libertad. Si cometían una pequeña infracción o incluso sin cometerla, por el simple hecho de fijarse en su domicilio, se entendía que, como la actuación del juez siempre iba a redundar en la ayuda del menor, no importaba mezclar protección y reforma de menores

² Piense en casos de menores objetos de malos tratos, abandono o imposibilidad de los padres o tutores de atender a sus hijos.

e internarles durante largo tiempo en un centro de reforma ya que así se pensaba se les estaba protegiendo. A consecuencia de ello, principio como el de legalidad o proporcionalidad ni siquiera se planteaban en el procedimiento y que no se estimaba necesario al hacerse todo el interés de menor.

De esta manera, los menores eran así tratados penalmente mucho peor que los adultos, a los que, incluso en la fase previa a la constitución, se les reconocía una serie de derechos en el proceso que a ellos les estaban negando.

La constitución española de 1978 determinó un cambio sustancial que motivó importantes reformas legislativas tendientes a adoptar las leyes penales sustantivas y procesales a los principios y garantías que estableció.

Sin embargo; en la justicia de menores no hubo cambios significativos y se desconocían principios constitucionales como el de legalidad y seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y tipicidad (artículos 9º y 25º.1 Constitución Española), interpretación de las normas relativas a derechos fundamentales y libertades (artículo 10.2), igualdad ante la ley (artículo 14), libertad y seguridad (artículo 17), o el derecho como el de la tutela efectiva, al juez natural predeterminado por la ley, a la defensa del letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia (artículo 24), a continuación cabe destacar una serie de hitos legislativos y jurisprudenciales, tanto internacionales como dentro de nuestro país, que ha marcado la evolución en el tratamiento penal de los menores hasta llegar a la actual ley que es fruto de esa evolución o influencias por lo que es obligado a conocer dichos cambios.

1.2.2 Características en un proceso penal de menores

La importancia de la jurisdicción de menores es evidente, no sólo por su finalidad educativa, como intento de dar al menor que ha cometido una infracción penal una respuesta social diferente y especializada, alejadas de fines retributivos o de prevención general, sino también porque no puede negarse que cumple con un papel de prevención especial puesto

que trata de evitar la reproducción de conductas delictivas futuras del menor al intentar su resocialización. De todas formas, aunque se quiera defender retóricamente la ausencia en el ámbito penal de menores de la finalidad de prevención general, no puede olvidarse que la intervención judicial se sustenta en que el menor ha cometido una infracción penal y que la ley penal no deja ejercer una intimidación genérica sobre todas las personas.

El juez y todas las partes que intervienen en el proceso están sometidos a la observancia de un dificultoso equilibrio entre la salvaguarda de todos los derechos y garantías que deben ser aplicados en el procedimiento y la actuación tendente a conseguir el interés del menor y es posible afirmar que esos dos criterios sobre los que se sustenta su actuación podrían constituir un modelo a seguir en la propia jurisdicción penal de adultos, si quiere hacerse realmente efectivo lo dispuesto en el artículo 25.2 de nuestra constitución con relación a la orientación hacia al reeducación y reinserción social que deben tener las penas.

No estamos hablando de un derecho penal de autor, más propio de la concepción positivista que inspiró la antigua Ley de Tribunales Tutelares de Menores, sino de un derecho penal de hecho, más objetivo y por ello más cercano a la seguridad jurídica, en el que; sin embargo, se tiene en cuenta, de forma decisiva, la personalidad o circunstancias del menor a lo largo de todo el proceso y de cara a la determinación de la medida que, en su caso, se adopte respecto de él.

Una serie de principios generales y criterios específicos de ben ser tomados en consideración si quiere entenderse cuál es el auténtico significado de esta justicia, al tiempo que nos permitan conocer cuáles son las bases de esta diferencia de trato del menor que pasa por ella respecto del tratamiento penal del mayor de edad.

1.2.3 Objetivos del Sistema de Justicia Juvenil

La CDN, en su artículo 40°, al describir los derechos de todo niño de quien se alegue ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, se refiere a la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

En cuanto a los lineamientos y principios fundamentales que deben guiar el ejercicio de la acción penal en los casos de niños acusados de infringir leyes penales, la Comisión Interamericana, siguiendo los estándares fijados por el *corpus juris* ya descrito, ha destacado que existe dentro del derecho internacional de los derechos humanos una clara tendencia a darles a los niños una protección mayor que a los adultos, limitando el papel del *Ius Puniendi*³.

Al respecto, la Comisión Interamericana ha indicado que del artículo 19° de la Convención Americana derivan obligaciones particulares de “garantizar el bienestar de los delincuentes juveniles y empeñarse en su rehabilitación”(CIDH, Informe No. 62/02, Caso 12.285, 2002, pág. 83). En la misma línea, la Corte Interamericana ha indicado que cuando el aparato del Estado tiene que intervenir frente a infracciones a la ley penal cometidas por personas menores de edad, debe realizar un esfuerzo sustancial para garantizar su rehabilitación a fin de permitirle cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad(Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 1999, pág. 185).

Así, un sistema de justicia juvenil cuya política criminal esté orientada meramente por criterios retributivos y deje en un segundo plano aspectos fundamentales como la prevención y el fomento de oportunidades para una efectiva reinserción social, sería incompatible con los estándares internacionales en la materia.

De manera general, conforme al artículo 40° de la CDN los Estados parte deben tratar de promover medidas que no supongan la judicialización, como la reorientación hacia servicios sociales, siempre que sea apropiado y deseable⁴. Asimismo, el derecho internacional de los derechos humanos se dirige a procurar que las penas que imponen graves restricciones de los derechos fundamentales de los niños, se limiten únicamente a las infracciones más severas, de forma que los sistemas de justicia juvenil tiendan a abolir la pena privativa de la libertad. En el caso de infracciones tipificadas, cuando se trate de

³ Véase ECHR. Case of Neulinger and Shuruk v. Switzerland, Application No. 41615/07, Judgment, Grand Chamber, 6 de Julio de 2010, párr. 138. En los casos en que los niños menores de la edad mínima de imputabilidad penal infrinjan las leyes penales, la exclusión legal deberá ser genérica sin que deba hacerse un análisis caso por caso. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 105.

⁴ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párrs. 24 y 25.

personas menores de edad la legislación debe permitir la aplicación de formas de sanción distintas a la reclusión o privación de libertad(CIDH, Menores detenidos- Informe No. 41/99, Caso 11.491 , 1999). Aún más, en aquellos casos en los que se establezca la responsabilidad de niñas, niños y adolescentes por delitos graves a los que correspondan penas privativas de libertad, el ejercicio del IUS PUNIENDI por parte del Estado debe regirse por el principio del interés superior del niño.

En cuanto a la forma como estas sanciones deben aplicarse, las Reglas de Beijing disponen que “las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras un cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible” (Regla 17.1.b). Por eso, aún en los casos de delitos graves que merezcan sanciones importantes, es preciso que la legislación ofrezca al juzgador los mecanismos para aplicar este tipo de sanciones de acuerdo con el interés superior del niño. Es decir, que “la respuesta que se dé al delito sea siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad” (Regla 17.1.a).

Estos estándares parten de la premisa de que, en el caso de las personas menores de edad, el ejercicio del poder punitivo de los Estados no sólo debe observar de manera estricta las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino además tomar en especial consideración la situación distinta en la que aquéllos se encuentran y sus necesidades especiales de protección. Esto aplica tanto para la determinación de la responsabilidad por infracciones a leyes penales como para la aplicación de las consecuencias de dicha responsabilidad. Al respecto, la Comisión (CIDH) ha resaltado la diferencia que debe existir en la respuesta punitiva del Estado frente a conductas cometidas antes de los 18 años, precisamente en atención a que por la situación particular en la que se encuentran los niños al cometer dichas conductas, el juicio de reproche y, por lo tanto, la sanción impuesta, la que debe ser menor respecto de los adultos(CIDH, Informe No. 62/02, Caso 12.285, 2002, pág. 80).

A la luz de lo anterior, la Comisión subraya que la consecución de los objetivos de la justicia juvenil requiere que los Estados tomen en consideración el interés superior del niño antes de regular el sistema de justicia juvenil o al aplicar una pena o sanción y, en caso de judicializar o aplicar las sanciones, los Estados deben orientar todos sus esfuerzos a garantizar la rehabilitación de los niños que sean intervenidos por la justicia juvenil, a fin de

promover su sentido de valor y dignidad, permitirles una efectiva reinserción en la sociedad y facilitar que puedan cumplir un papel constructivo en ella.

La Comisión considera que el elemento retributivo del derecho penal ordinario es inapropiado dentro del sistema de justicia juvenil si lo pretendido es satisfacer plenamente los objetivos de reintegración y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes infractores de las leyes penales.

1.2.4 El Corpus Iuris de los Derechos Humanos de los adolescentes

Según, la comisión Interamericana de Derechos Humanos- Relatoría Sobre Los Derechos De La Niñez, respecto al corpus Iuris de los derechos Humanos de los adolescentes (La Comision de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011, págs. 5-6), refiere que el derecho internacional relativo a la interpretación de los tratados internacionales, la Convención Americana y la CDN forman parte de un conjunto de normas vinculadas o *CORPUS JURIS* de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que debe ser considerado al interpretar el significado del artículo 19° de la Convención Americana⁵ y del artículo VII de la Declaración Americana⁶, los cuales garantizan el derecho de los niños a medidas de protección especiales por parte de su familia, la sociedad y el Estado.

Asimismo, refiere que el concepto de un *CORPUS JURIS* en materia de niñez se refiere al reconocimiento de la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de garantizar los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes, la Comisión Interamericana se ha referido a este concepto señalando que:

“Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores, además de las disposiciones de la Convención Americana, la Comisión considera importante acudir, por referencia, a otros instrumentos internacionales que

⁵ “... Artículo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado...”

⁶ “... Artículo VII. - Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a la protección, cuidados y ayuda especiales...”

contienen normas más específicas con respecto a la protección de la niñez, entre las cuales cabría citar la Convención sobre los Derechos del Niño, y las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas sobre el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema universal de los derechos humanos, a los efectos de interpretar la Convención, encuentra su fundamento en el artículo 29° de la Convención Americana y en la práctica reiterada de la Corte y de la Comisión en esta materia(CIDH, Menores detenidos- Informe No. 41/99, Caso 11.491 , 1999, pág. 72).

Posteriormente, (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), agrega que la Corte ha subrayado que el *CORPUS JURIS* sirve para fijar el contenido y los alcances del artículo 19 de la Convención Americana y es el resultado de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en materia de niñez que tiene como eje el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos:

Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo *CORPUS JURIS* internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19° de la Convención Americana(IDH, 2002)(Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) , 1999).

Es así que del análisis, señalado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), Por tanto, el marco jurídico de protección de los derechos humanos de los niños no se limita a la disposición del artículo 19 de la Convención Americana o a la del artículo VII de la Declaración Americana, sino que incluye para fines de interpretación, entre otras, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (en adelante “la CDN”)⁷, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores(en adelante “Reglas de Beijing”)⁸, las Reglas sobre Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (en adelante “Reglas de Tokio”)⁹, las Reglas para la protección

⁷ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

⁸ Adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985.

⁹ Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.

de menores privados de la libertad (en adelante “Reglas de La Habana”)¹⁰ y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (en adelante “Directrices de Riad”)¹¹, además de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de alcance general.

Con referencia a lo anterior mencionado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), arguye que la existencia de un *CORPUS JURIS* incluye también para efectos interpretativos las decisiones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (en adelante “Comité de los Derechos del Niño”) de las Naciones Unidas en cumplimiento de su mandato, como la Observación General No. 10 sobre los derechos del niño en la justicia de menores¹². Tal perspectiva representa un avance significativo que evidencia no sólo la existencia de un marco jurídico común en el derecho internacional de los derechos humanos aplicable en materia de niñez sino también la interdependencia que existe en el ámbito internacional entre los distintos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos de los niños.

Según se ha visto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), finalmente sostiene que la CIDH subraya que los Estados Miembros que no han ratificado la Convención americana están igualmente sometidos al *CORPUS JURIS* relativo a los derechos de los niños, toda vez que el artículo VII de la Declaración Americana establece que todos los niños tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales.

1.2.5 El interés superior del niño y el Sistema de Justicia Juvenil

Respecto al Interés superior del niño en el Sistema de Justicia Juvenil, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), refiere que el artículo 3 de la CDN dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas

¹⁰ Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

¹¹ Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

¹² Adoptada por el Comité de los Derechos del Niño el 25 de abril de 2007.

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Asimismo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), agrega además que la Corte ha establecido que el interés superior del niño es el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en la CDN, cuya observancia permitirá al niño el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades¹³, y que “la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención [Americana] cuando el caso se refiera a menores de edad”(Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, 2005).

Cabe decir que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), sostiene que la Comisión ha considerado que, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma CDN, por interés superior del niño debe entenderse la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos(CIDH, Informe Sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2009). Así también lo ha entendido la Corte Interamericana al afirmar que:

[...] la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

[...]

La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los

¹³ Véase Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 59.

*derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas que adoptara para atender ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella*¹⁴.

En este sentido, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), advierte que las instituciones, órganos y autoridades, así como las personas privadas autorizadas o relacionadas con la regulación, aplicación y operatividad del sistema de justicia juvenil deberán considerar en todo momento el interés superior del niño. La Comisión considera que el interés superior del niño debe ser el criterio interpretativo rector que concilie dos realidades al regular el sistema de justicia juvenil: por un lado, el reconocimiento de su capacidad racional y de su autonomía, dejando de ser un mero objeto de tutela, y, por otro, el reconocimiento de su vulnerabilidad dada la imposibilidad material de satisfacer plenamente sus necesidades básicas, con mayor razón cuando éstos pertenecen a sectores sociales desaventajados o a grupos discriminados como el de las mujeres¹⁵¹⁶¹⁷

En el mismo sentido, sostiene que el Comité de los Derechos del Niño ha indicado que: los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico, como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias

¹⁴ Véase Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53 y 137.

¹⁵En este sentido, el interés superior del niño implica un rechazo tanto de doctrinas como la de la “situación irregular”, que sitúa al niño como un objeto de compasión o represión y parten en gran medida de perfeccionismos o paternalismos injustificados, como también de doctrinas que desconozcan en gran medida la vulnerabilidad de los niñas, niños y adolescentes de forma contraria a la adecuada satisfacción de sus necesidades.

¹⁶ González Contró, Mónica, *Derechos Humanos de los Niños: una propuesta de fundamentación*, UNAM, México, 2008. El Comité de los Derechos del Niño se ha referido a la doctrina de la “situación irregular” de forma expresa.

¹⁷ Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales: Argentina, CRC/C/15/Add. 187, 9 de octubre de 2002, párrs. 15, 40 y 6.

justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños¹⁸

En otras palabras, lo que pretende demostrar es que el Comité de los Derechos del Niño tiene concordancia con lo que la Comisión considera, respecto a la protección del interés superior del niño significa, entre otras cuestiones, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión y el castigo, sean sustituidos por una justicia especial, enfocada a la restauración del daño y a la rehabilitación y reinserción social de la niña, niño o adolescente, a través de la remisión de casos u otras formas de justicia restitutiva como se desarrollan en el correspondiente apartado de este informe, recurriendo lo menos posible a procedimientos judiciales así como a medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad¹⁹.

Finalmente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), aduce respecto al interés superior del niño implica, entre otras consideraciones, que el análisis de cada caso se realice de forma individualizada, toda vez que cada niño, niña y adolescente tiene necesidades diferentes, permitiendo escuchar la opinión del niño de conformidad con el nivel de desarrollo de su personalidad, así como la opinión de sus padres, tutores y/o representantes o familiares más cercanos, dentro de los procedimientos y procesos relativos a la justicia juvenil²⁰.

1.2.6 La Doctrina de la Protección Integral en el Sistema de Justicia Penal Juvenil Peruano

¹⁸ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 10.

¹⁹ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 10, y Observación General No. 12, El derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009, párr. 57.

²⁰ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 43 a 45.

Según lo señalado por Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Peru, 2016, págs. 227-230), señala el caso de Gerald Gault, un adolescente de 15 años, en Arizona (Estados Unidos), el 08 de junio de 1964, fue detenido y acusado de hacer unas llamadas obscenas a su vecina.

Asimismo, sostiene que sus padres no fueron informados de su detención hasta pocas horas antes de la realización de la audiencia, donde no concurrió la víctima y el juez no le advirtió que podía permanecer en silencio ni que podía contar con la asistencia de un abogado.

Además, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), aduce que pese a la vulneración de su derecho de defensa, Gault fue internado en un establecimiento correccional (escuela industrial del estado) hasta los 21 años. Un adulto por el mismo hecho, podría haber sido condenado a una multa de USS 50 o a dos meses de prisión. Los padres de Gault fueron impedidos de apelar, pues el propio tribunal considero que su decisión era justa. Sus padres no se quedaron tranquilos e interpusieron un hábeas Corpus, el cual a pesar de ser denegado permitió a la corte suprema de los estados Unidos tomar conocimiento del caso y desnudar el modelo de justicia aplicado, a partir de ese momento ingreso el modelo de Protección Integral en el Sistema Norteamericano, desterrando así la Doctrina de la Situación Irregular, la cual trataba de la misma manera tanto al niño y al adolescente que están en estado de abandono como al que ha infringido alguna ley, sin respetar ninguna garantía.

De esta manera, Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que en el año 1990, nuestro país, ratifico la convención Internacional de los Derechos del Niño, y con ello, Decretó, el abandono del sistema tutelar, y la adopción de la Doctrina de la Protección Integral del ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, quienes son considerados a partir de entonces sujetos de derechos y como consecuencia de ello, también pasibles de responsabilidad penal desde los 14 años de edad, dentro de un sistema de justicia penal

distinto al de los adultos, con todos los derechos sustantivos y procesales, mas aquellos derechos específicos vinculados a su condición de sujetos de derechos en proceso de desarrollo y maduración, desde la perspectiva de “doble garantía”, por medio de la cual se asegura el ejercicio de sus derechos específicos, adecuándolas circunstancias y generando condiciones para que pueda ejercerlos, en la lógica de que si bien todos tienen derechos, no todos se encuentran en condiciones de ejercerlos del mismo modo.

Asimismo refiere que en el proceso de adecuación de nuestra legislación a la convención, no ha sido fácil, ni ha estado exento de marchas y contra marchas, y presenta aún fuertes rasgos tutelares, junto a un creciente matiz neo-retribucionista, fundamentado en el discurso de defensa social y seguridad ciudadana, busca la rebaja de la minoría de la edad penal, el incremento de las sanciones penales y la utilización de la medida de internamiento, como respuesta justa a la gravedad de las conductas delictivas cometidas por los adolescentes.

Posteriormente, Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), agrega desde la aprobación del primer Código de los Niños y Adolescente las reformas en materia de justicia penal Juvenil, sin otro aspecto trascendente que destacar, han consistido fundamentalmente en el incremento de las sanciones que destacar, han consistido fundamentalmente en el incremento de las sanciones penales, especialmente en el caso del internamiento el cual comenzó en 3 años como máximo, incrementándose a 6 años el 2007, mediante el Decreto Legislativo 990, y luego a 10 años mediante Decreto Legislativo N° 1204 de septiembre del 2015.

Cabe agregar, que Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), aduce que el punitivismo (necesidad de penas cada vez más altas y desproporcionadas) se junta con el derecho penal simbólico, el cual etiqueta como “enemigo” al sector o grupo que será objeto de persecución penal relativizando las garantías que le asisten con un discurso proteccionistas aparentemente en favor del adolescente que ha cometido ilícitos: “quien va estar mejor en el centro juvenil...”.

De los anteriores planteamientos, Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que el estado demuestra a la gente, que siempre pide mano dura y más sanciones e insiste en el camino del fracaso, de los últimos años. El resultado es predecible, dentro de un tiempo más, la percepción del incremento de la violencia se hará nuevamente latente y frente al fracaso de la ley el estado nuevamente incrementará las sanciones persistiendo en el error ¿por qué? Simple, es más barato cambiar la ley e incrementar las sanciones que invertir en la realidad y atacar las causas de la violencia: falta de educación, salud, empleo y en suma de un futuro, para los jóvenes. ¿Cuándo entenderá nuestro estado que la inversión en la prevención y la atención de la delincuencia penal juvenil es inversión y no gasto? ¿Que la dimensión estructural del problema debe atacarse de modo estructural? ¿Qué hace falta una política integral? ¿que tener una política integral no sólo es cuestión de plantearla; sino que hace falta implementarla?

Es así que , Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), finalmente sostiene que se traslada la responsabilidad de la seguridad a los agentes estatales: Ministerio Publico, Poder Judicial y Policía Nacional, pues el estado ya” resolvió dando la ley”.

Agrega además, Cristian Hernández Alarcón en el tema el Principio de Proporcionalidad O Prohibición de exceso en la Determinación de la sanción Penal Juvenil del Perú (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), ante una situación así, las instituciones y los operadores, tiene un desafío enorme, administrar la respuesta sancionadora del estado sin vulnerar la proporcionalidad, respetando las garantías y al mismo tiempo, sin que exista sensación de impunidad. Ciertamente que ello depende también de recurso, pero por más recursos con los que se cuente, nada se puede lograr si los operadores no cumplen a cabalidad su función.

1.3 PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL SISTEMA PENAL JUVENIL

1.3.1 Principio de Interés Superior del Niño, Niñas y de los Adolescentes

Según lo señalado por Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (García Huayama, 2016, págs. 29-31), refiere respecto del principio bajo comentario que el mismo resulta ser un estándar jurídico de observación obligatoria y rector del derecho penal juvenil el mismo que deberá orientar los operadores jurídicos al momento de adoptar decisiones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes, implicando la satisfacción integral de sus derechos e intereses, entre éstas por citar algunos ejemplos evaluar la situación jurídica de un menor de edad retenido, la determinación de la participación o responsabilidad de un menor de edad frente a un acto de infractor o la imposición de una medida socio-educativa.

Asimismo, sostiene que el Tribunal Constitucional [STC 02132-2008-PA/TC] ha precisado que el **principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente** cuenta con contenido constitucional implícito del artículo 4° de la norma fundamental, por cuanto establece que “La comunidad y el estado protegen especialmente al niño, al adolescente, (...)”. Dicho contenido es reconocido a su vez por la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 1989, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificadas por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N° 25278 del 3 agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial el peruano el 04 de agosto de 1990, luego del término de un proceso progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de los niños que se desarrolló durante el siglo XX. El texto de la mencionada Convención se publicó en Separata Especial el 22 de noviembre de 1990 y mediante N° 25302, publicada el 4 de enero de 1991, se declaró de preferente internacional la difusión de la “Convención sobre los Derechos del Niño”. Posteriormente en la Ley N° 27337 “Código de los Niños y Adolescentes”, publicada con fecha 07 de agosto de 2000, se recogió también este principio en el artículo IX de su título preliminar prescribiendo que en toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el estado a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones.

Por otro lado, agrega que el Comité de los Derechos del Niño subrayó el 29 de mayo de 2013 a través de la Observación General N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), que el interés superior del niño es un concepto triple el cual debe ser analizado como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento²¹, debiendo tener presente que ante cualquier caso de conflictos de intereses en las que se encuentre inmerso un menor de edad, atendiendo a su situación de vulnerabilidad y dependencia, debe priorizar su intereses moral y material que tiene valor superior a los padres, sociedad y estado mismo. (EXP. N° 02132-2008-AA/TC, 2011).

En ese sentido, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil, también refiere que este principio no resulta ser novísimo en nuestro sistema penal Juvenil, las autoridades públicas y operadores de justicia solo se han limitado a invocarlo como fundamento de sus resoluciones, decisiones judiciales o disposiciones fiscales sin disgregar como tal o cual decisión va a redundar en la satisfacción integral de los derechos e intereses de los menores de edad, lo cual constituye una falencia grave que progresivamente debe ser desterrada, puesto que es deber motivar la adopción de acción eso decisiones y más aun a lo concerniente a los menores de edad.

De esta manera, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil, sostiene que el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos; es una de gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a toda las autoridades en instituciones públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática (CILLERO BRUÑOL, 2018).

²¹ Observación general N° 14(2013) sobre el Derecho del Niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) el comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple.

1.3.2. Principio de Inmediación

Respecto de este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 32), agrega que el Juez Especializado de Familia o Mixto en los distritos en los que no se cuente con órgano jurisdiccional especializado debe tener de manera constante comunicación y contacto con el menor en conflicto con la ley penal, sus familiares o responsables y las otras personas que intervienen en el proceso. Dicho contacto se debe evidenciar a través de comunicaciones orales o escritas, cuya constancia obre en el expediente. Este principio tiene como objeto establecer una relación inmediata entre el juez especializado y el adolescente que ante el comparece.

1.3.3. Principio de Contradictorio

Con relación al principio en mención, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 32), refiere que en un proceso penal debe existir siempre igualdad entre las partes que intervengan en este. Para ello se requiere de (Informe Defensoría N° 51, 2000, págs. 76-77):

- La existencia de una imputación; que significa que el ente acusador indique claramente el hecho del que se acusa al adolescente.
- La realización de una intimidación; es decir, que la imputación sea comunicada oportunamente para poder desarrollar su defensa; y
- La celebración de una audiencia; donde puedan contraponérselas argumentaciones de la parte acusadora y de la defensa.

Asimismo, agrega que es importante que los roles defensa, acusación y juzgamiento sean asignándose entes distintos a fin de asegurar un debido proceso y resultado imparcial para el adolescente en conflicto con la ley penal.

Por otro lado, refiere que a nivel constitucional éste principio se encuentra comprendido en el inciso 15° del artículo 139° de la Constitución Política del Estado que establece que toda persona debe estar informada inmediatamente y por escrito de las causas

de su detención. A su turno, siguiendo esa orientación, el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 192° prescribe que las mismas garantías de administración de justicia consagradas en la Carta Magna deben observarse para los procesos judiciales que se sigan a favor del adolescente infractor.

1.3.4. Principio al Debido Proceso

Según lo señalado por Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 33-34), sostiene que los instrumentos normativos internacionales referidos a los Derechos Humanos recojan al debido proceso como una garantía procesal, entre estos tenemos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 10-11), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 18-26), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 4,14 y 15), la Convención Americana de los Derechos Humanos (Art. 8,9, 10 y 27). Es en los artículos 37° y 40° de la Convención de los Derechos del Niño que es regulado este derecho.

Asimismo, refiere que en nuestro país, el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Nacional de 1993, consagra la observancia del debido proceso con un principio de la administración de justicia, como principio y derecho de la función jurisdiccional (Hernandez Alarcon, 2005).

Por otro lado, menciona que el debido proceso es un concepto amplio que comprende todas las garantías establecidas tanto en los convenios internacionales como en la legislación nacional. En este caso el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño han señalado que tanto los procesos judiciales como administrativos deben estar sujetos a los derechos y garantías del debido proceso consagrados en los tratados, prestando especial atención, entre otros, a: (i) La presunción de inocencia; (ii) La información sin demora y directa de los cargos; (iii) La asistencia jurídica u social apropiada; (iv) Los procesos sumarios hay participación directa de los padres; (v) El respeto a la vida privada; y a la imparcialidad en el proceso.

En la misma línea de lo afirmado, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil, refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “ en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelve derechos de los niños se deben observar principios y las normas del proceso legal; esto abarca las reglas correspondientes juez natural-competente; independiente e imparcial-, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyecta razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sean indispensables adoptar en el desarrollo de estos”²².

1.3.5 Principio de Legalidad

Respecto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil, (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 34), sostiene que la justicia de menores no es retroactiva pues la regla que nadie debe ser declarado culpable con la comisión de delitos o actos u omisiones que, en el momento de cometerse, no fuera delictivos según las Leyes Nacionales o Internacionales se encuentra prevista en el literal a) del párrafo 2 del artículo 40° de la convención, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 15° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A(XXI), del 16 de diciembre de 1966 aprobado por el Perú a través del Decreto Ley N° 22128 del 28 de marzo de 1978. Instrumento de adhesión del 11 de abril de 1978. Depositado el 28 de abril de 1978. fecha de entrada en vigencia el 28 de julio de 1978²³.

²²CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión consultiva OC-17/02 del 28 de agosto del 2002. Serie A no.17, opinión resolutive N°10.

²³ “... Artículo 15°: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley la dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello...”

Asimismo, sostiene que el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 189° establece que ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no se encuentra previamente calificado en las leyes penales de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con medida socio-educativa que no esté prevista legalmente.

En igual sentido, sostiene que ningún niño debe estar castigado con una pena más grave que la aplicable en el momento de haberse cometido la infracción a la ley penal, aunque si con el transcurso del tiempo para el mismo acto delictivo se prevé una pena más leve, este debe beneficiarse con dicho cambio.

1.3.6. Principio de Igualdad y No Discriminación

En cuanto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 35), refiere que el sistema de administración de justicia se encuentra en el deber de desarrollar acciones tendientes a tutelar a ciertos grupos a un más vulnerable, como por ejemplo los niños de la calle, los niños de distinta condición étnica, racial y lingüística, las niñas y niños que presenten algún tipo de discapacidad y los niños que tienen constantes conflictos con la justicia (reincidente). Al respecto, los estados deben capacitar a todo el personal profesional que forman parte del sistema de administración de justicia de menores de edad, además de expedir normatividad que promueva y garanticen un trato igual a los menores inmersos en la investigación penal en calidad de infractores, propiciando el desagravio, la reparación y la indemnización²⁴.

1.3.7 Principio de Intervención Mínima

Cabe mencionar respecto a este principio, que Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia

²⁴ Véase la regla Numero 22.1 (Regla Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores), que establecen para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa del caso de menores e impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y discurso de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.

Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 35-36), afirma que los artículos 37.b, 40.3.b) y 40.4 de la Convención de los Derechos del Niño a hacen eco de este principio, refiriéndose que la privación de la libertad a un niño o adolescente debe ser una medida de último recurso o ultima ratio e impuesta por el más breve plazo que proceda, prefiriéndose adoptar medidas alternativas para el tratamiento de niños adolescente frente a la comisión de delitos o faltas a fin de evitar recurrir a la promoción de procedimientos judiciales, respetando en este caso siempre sus derechos humanos y garantías legales correspondientes.

Asimismo, sostiene que la observación a este principio busca contrarrestar los efectos negativos que puede involucrar el normal desarrollo de un menor de edad, tanto es su aspecto físico como psíquico, toda vez que por un lado la privación de su libertad puede originar desesperación , frustración, depresión, y por otro lado el desarraigo familiar a temprana edad va debilitar sus vínculos primarios y referenciales no solo con los integrantes de su familia sino con el medio social que lo rodea como por ejemplo amigos, compañeros, etc.

De esta manera, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), aduce que podemos encontrar referencias expresas a éste principio en las denominadas Reglas Mínimas para la administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), aprobadas por Resolución N° 40/33, del 29 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las reglas 6, 11,13,18, 19 y 23. Así, pues estas se recoge el principio de oportunidad, el dictado de prisión preventiva en caso de infracciones que revistan gravedad y por el menor tiempo posible; así como el principio de flexibilidad al momento de regular la sentencia, las mismas que no solo debe ser proporcional a la gravedad del hecho sino además a las circunstancias y necesidades del menor, prescribiendo todo tipo de imposición de penas capitales y corporales.

En razón a lo mencionado anteriormente, se advierte que el principio en mención, constituye una aspiración del moderno derecho penal, tiene una referencia obligada en el ámbito penal de menores.

Es evidente entonces, que la convención sobre los derechos del niño determinó en su artículo 40.3.b), la conveniencia de tratar a los niños que sean considerados, acusados o declarados culpables de infringirlas leyes penales “sin recurrir a procedimientos judiciales”.

Se trataría de evitar, en la medida de lo posible, en la incoación de lo posible, la incoación de expedientes a menores por hechos de poca importancia, por lo que este principio estaría en estrecha unión con el principio de intervención mínima que parte de la idea de buscar un derecho penal mínimo, en el sentido de entender que el recurso a la justicia penal debe ser de último, es lo que se ha llamado des judicialización o derecho penal subsidiario, por cuanto las perturbaciones más leyes de orden jurídico son objeto de otras ramas del mismo(Ornosa Fernández, 2007).

Posteriormente, sostiene que en el caso de los menores la búsqueda de un derecho penal mínimo se debe intensificar porque es claro que no todas las conductas tipificadas como delitos o faltas, previstas para los adultos en las leyes penales, tienen que ser sancionadas también en el que todavía no ha adquirido la mayoría de edad penal. El recurso a la justicia penal debe ser el último camino a seguir y previamente debe intentarse la descriminalización de conductas de escasa entidad desde el punto de vista de las leyes penales o bien la búsqueda de soluciones alternativas, mediante sistemas de diversión o mediación que intenten la solución del conflicto de forma extra judicial.

Es lo que GARCÍA PABLOS llama “*la subsidiaridad de la intervención legal y naturaleza mínima de la intervención penal*”(Garcia Pablos , 1996).

El artículo 40.3.b de la convención sobre los derechos del Niño expresamente establece:

“los estados partes...y, en particular, examinarán: b) siempre que sea apropiado, la convivencia de tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente los derechos humanos y las garantías jurídicas”

En ese mismo orden y dirección, se determina que los principios de tipicidad y legalidad, tienen como objetivo observar todas las conductas que se estimen infractoras de orden social a lo dispuesto en el Código Penal o leyes especiales, criterio seguido a partir de

la ley 4/1992, no parece la opción más adecuada para intentar la aplicación de este principio de intervención mínima, a pesar de la ayuda que supone para ello el principio de oportunidad y tal vez, en aras de lograr la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante la ley que la oportunidad no siempre alcanza, la nueva ley podría haber ido algo más lejos y al regular los aspectos sustantivos del tratamiento penal de menores y por sus especiales características, dada la inmadurez de su raciocinio y de que ello se pueda derivar una exigencia de responsabilidad penal, aunque sea conforme a esta ley especializada.

Algunos ejemplos pueden ilustrar esta afirmación, así el Código Penal castiga la conducta imprudente en los casos en que expresamente se establece a lo largo de su articulado y, sin embargo, creo que cualquier profesional de las ciencias de la conducta puede afirmar que, en un gran número de ocasiones, la actuación de un menor es imprudente por las propias características de su personalidad en evolución. Por otra parte, existen determinadas conductas típicamente infantiles, que en el Código Penal constituyen sin más una falta o incluso un delito sancionado con una pena menos grave que lleva aparejada prisión y que, por las características de su autor también podían haber sido despenalizadas y no dejarse al criterio de cada fiscal de menores. Se trataría de excluir desde un principio del ámbito penal determinadas conductas que en un adulto sí merecerían una respuesta, pero sin que tuviese el carácter de lista cerrada, puesto que, como es evidente, el principio de oportunidad tendrá que entrar en juego respecto a otro tipo de conductas no incluidas, cuando así se estime necesaria para lograr el interés del menor.

1.3.8 Principio de Presunción de Inocencia

Respecto de este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 36), afirma que la presunción de inocencia constituye también un derecho de carácter subjetivo consagrado en el artículo 2°.24.e de nuestra Carta Constitucional, fundamental para la protección de los derechos humanos del niño o adolescente en conflicto con la ley penal, lo cual significa que la carga probatoria sobre las imputaciones realizadas en su contra recaen en la acusación que realiza el titular del Ministerio Público, en consecuencia le asistirá el beneficio de la duda y sólo se le declarará responsable judicialmente de un acto infractor cuando los cargos imputados se encuentren

fehacientemente acreditados al punto que se desvirtuó de toda duda razonable; por lo que mientras el menor no cuente con sentencia consentida o firme que declare su responsabilidad y participación en el acto infractor cuenta con el derecho a recibir un trato acorde con esta presunción en todas las etapas procesales encontrándose todas las autoridades públicas obligadas a abstener de prejuzgar o realizar juicios de valor.

Por lo que, sostiene que debido a la falta de comprensión del proceso, inmadurez, temor u otras razones, el niño puede comportarse de manera sospechosa, pero las autoridades no deben presumir por ello que sea culpable, si carece de pruebas de su culpabilidad, más allá de toda duda razonable(Placido Vilcachagua, -, pág. 704).

1.3.9. Principio de Respeto a la Opinión del Niño y del Adolescente

Tratándose del principio en mención, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (García Huayama, 2016, pág. 37), refiere que el niño, niña y adolescente tiene derecho a participar y emitir su opinión en todos los asuntos que le conciernen, le correspondan o tengan alguno efecto sobre su vida, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado. En el sistema especializado de administración de justicia se debe asegurar la participación del niño o del adolescente en todas las etapas del proceso, teniendo la obligación de escuchar al primero de ellos y tomar en cuenta la opinión del segundo en función a su edad cronológica y madurez, lo cual no implica que el juzgador se encuentre limitado a resolver según lo quiera el menor, puesto que se encuentra obligado a observar su interés superior, lo cual en algunas ocasiones puede ir en contra de sus deseos, previendo además que no se genere represalias y que la experiencia procesal temprana sea lo menos traumáticamente posible.

Es así que sostiene que no cabe duda que, constituye un derecho de todo adolescente, a quien se le impute la comisión de un acto infractor, a ser escuchado en todas las etapas del proceso penal por las autoridades que intervengan en este, como la policía, fiscal y juez especializado; asistiéndole también el derecho de mantenerse en silencio como sucede en los casos de adultos.

Finalmente, aduce que la garantía se desprende de la Convención de los Derechos del Niño (Art.12°, inc. 2); la Reglas del Beijing (N° 7.1) y el artículo 85° del Código de los Niños y Adolescentes. El derecho a ser oído constituye su resguardo compartido por el sujeto menor de edad con el catálogo de acreencias procesales del imputado adulto(D´Antonio, 2013, pág. 78).

1.3.10 El Derecho a la Vida, la Supervivencia y el Desarrollo

Por otro lado, respecto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (García Huayama, 2016, pág. 38), sostiene que todo lo que involucre este principio obliga al estado a establecer políticas de prevención de delincuencia juvenil y su reincidencia asegurando el desarrollo integral del niño y adolescente, enfocadas en socializar e integrar a los niños con su familia, con su colegio y comunidad.

De manera que sostiene que llegado al plano de la administración de justicia, bajo este principio se encuentra proscrita la cadena perpetua y la pena de muerte, imponiéndose la obligación a los juzgadores a aplicar solo de manera excepcional y en casos muy graves medidas socio-educativas que impliquen la privación de la libertad de los menores de edad, las mismas que deberán por el tiempo más breve posible en razón a que lo que se busca no es reprimir sino rehabilitar la menor²⁵.

1.3.11 Principio de Doble Garantía

Posteriormente, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 38), sostiene que las garantías procesales con las que cuentan una persona adulta se debe reconocer a los niños, niñas y adolescente las correspondientes a su edad y condición

²⁵ La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-7/2002 ha señalado: “en consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la última medida...”.

de vulnerabilidad, por encontrarse en situaciones de desventaja frente a los adultos para ejercer de la misma forma sus derechos.

Es así que sostiene que el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 192° prescribe que en los procesos judiciales que se sigan al adolescente infractor se respetaran las garantías de la administración de justicia consagradas en la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño, el presente Código y las leyes vigentes sobre la materia, normativa sobre la que el juzgador deberá sustentar su actividad hermenéutica en este sentido.²⁶

1.3.12 Principio de Dignidad del Niño y adolescente

Respecto de este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 38-39), aduce que en materia de justicia juvenil, está compuesto con los siguientes elementos: (i) un trato acorde con el sentido de la dignidad del valor del niño; (ii) un trato que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades de terceros; (iii) un trato en el que se tenga en cuenta la edad del niño y se fomente su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad; y (iv) el respeto de la dignidad del niño requiere la prohibición y prevención de todas las formas de violencia en el trato de los niños que estén en conflicto con la justicia (EXP N°03247, 2008)²⁷.

En ese sentido, refiere que resulta inherente a este principio la prohibición de adopción de medida disciplinarias que infrinjan el artículo 37° de la Convención sobre los Derechos del niño, principalmente los castigos físicos, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, hacia como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental o el bienestar del menor.

²⁶ Léase en el libro Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, pag.38

²⁷ El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP N°03247-2008-PHC/TC Cuzco-J.V.C.B señala invocando la Observación General N° 10 los derechos del niño en la justicia de menores elaborada por el Comité de las Naciones Unidas son los derechos del niño en un mecanismo de responsabilidad penal juvenil se basa en que el adolescente no solo es sujeto de derechos sino también de obligaciones hacia la sociedad.

Sin embargo, este sistema debe obedecer a determinados parámetros respetuosos del interés superior del niño y de los principios rectores de derechos humanos, entre estos el de dignidad del niño y adolescente.

Por otro lado, también sostiene que en el ámbito del sistema interamericano este principio está consagrado fundamentalmente en el artículo XXV de la Declaración Americana, que dispone que “todo individuo que haya sido privado de su libertad (...) tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. Así mismo, se tiene que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es ajeno a esta norma, puesto que en su artículo.

1.3.13 Principio de Confidencialidad y Reserva del Proceso

En relación a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 39-40), a modo de ejemplo sostiene que cuando un adolescente infractor se encuentra inmerso en un proceso judicial los datos sobre los hechos que se le atribuyen son confidenciales, debiendo en todo momento respetarse el derecho a la imagen e identidad del adolescente bajo el entendido que puede afectar de forma grave su dignidad, desarrollo, situación emocional o seguridad. El procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado, así lo ha prescrito el Código de los Niños y de los Adolescentes en su artículo 190°. De igual forma dentro de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad elaborada por la Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de trabajos de su XIV edición, se ha contemplado en la sección 4° sobre Protección de la Intimidad, la regla 80, ha previsto la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de tal manera que según pueden acceder la personas involucradas asimismo, la regla 81 y 82 del cuerpo normativo acotado prescribe respeto a los niños, niñas y adolescentes la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o video. Finalmente, las reglas 83 y 84 señalan que deben evitarse todas las publicaciones no deseadas de los datos de carácter personal, debiendo tener especial cuidado en aquellos supuestos en los cuales los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento automatizado.

En ese sentido, afirmar podemos contar con el Reglamento de la ley N° 29733 “Ley protección de datos personales”, publicada el 22 de marzo del 2013, el cual en su artículo 30 estipula como una obligación a los titulares de bancos personales y especialmente con las

entidades públicas colaborar con el fomento del conocimiento del derecho a la protección de datos personales de los niños, niñas y adolescente, así como de la necesidad de que su tratamiento se realice con el especial responsabilidad y seguridad.

1.3.14 Principio de Impugnación

Por otro lado, respecto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 40-41), refiere que este principio se fundamenta en la posibilidad que tiene toda persona natural o jurídica, entre ellas los menores de edad que se encuentran inmersos en un proceso judicial, para que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea realizado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal, puesto que puede ocurrir que el juzgado sentenció haya cometido un error, brindándose así una forma de control hacia el despacho judicial inferior. En su artículo 186°, el Código de Niños y Adolescentes en concordancia con lo establecido con el artículo 37°, inciso d) de la Convención sobre los Derechos del Niño, prescribe expresamente esta garantía procesal señalando que el adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y ejerce la Acción de Habeas Corpus ante el juez especializado.

Asimismo, sostiene que este principio tanto en el inciso 6 del artículo 139° de la Constitución, como en el Tribunal Constitucional ha establecido en la STC 03261-2005-PA/TC [fund.3] que: “tiene por objeto garantizar que las personas naturales o jurídicas, que participan en un proceso judicial tengan oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal. Así mismo, tenemos dicho que el problema relativo a cuáles ya cuántas deben ser estas instancias jurisdiccionales no ha sido precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho por lo que, en base de las exigencias que se derivan del principio de legalidad en la regulación de los derechos fundamentales, artículo 2°, inciso 24, ordinal “a”, de la ley fundamental, el laconismo constitucional de su formulación lingüística debe entenderse en el sentido de que su determinación es una tarea que compete al legislador. En tal sentido, hemos sostenido que el derecho a la pluralidad de instancia es un derecho de

configuración legal. Sin embargo, al mismo tiempo, hemos advertido que la condición de derecho de configuración legal no quiere decir que el legislador pueda decidir si prevé (o no) tales instancias. Dado que el inciso 6) del artículo 139° no precisa cuantas deben ser esas instancias, pero sí que debe establecer una instancia plural, el contenido constitucionalmente garantizado demanda que el legislador prevea, como mínimo, la doble instancia. Sin duda, el número de instancias jurisdiccionales que el legislador, puede variar teniendo en cuenta la naturaleza de la materia que se discuten en cada proceso. Así, por ejemplo, en función de que se trata de un proceso civil, penal, administrativo o constitucional”.

1.3.15 Principio sobre la Presunción de Minoridad

Cabe mencionar que respecto de este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 42), sostiene que en caso de que existieren dudas acerca de si una persona es niño, niña y adolescente, puesto que por ningún medio ha podido probarse su mayoría de edad se le presumirá niño, niña o adolescente, y será considerada como tal hasta que se le pruebe lo contrario. Dicha garantía solo rige de manera de manera temporal para los casos en los que no exista ningún elemento de convicción que demuestre lo contrario o ponga en duda o tela de juicio lo afirmado por el afectado o sus representantes legales.

Por lo que concluye que en el caso en que exista una persona detenida indocumentada, carente de familiares en la jurisdicción y sin domicilio fijo, las autoridades deberán tratarlos como si se tratase de un menor de edad hasta que se alcance la documentación que acredite lo contrario, o en su defecto se practique la evaluación antropológica forense correspondiente; es decir no enmarrocarlo y mantenerlo separado de personas detenidas cuya mayoría de edad se encuentre comprobado, debiendo respetarse además de los derechos adicionales que como persona humana le asisten por encontrarse privado de su libertad.

1.3.16. Principio de Especialización

Respecto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 42-43), refiere que la convención tiene la necesidad de desarrollar un sistema especializado dirigido a la protección de los derechos de los menores de edad infractores de la ley penal, comprometiendo a los estados partes adoptar las medidas necesarias que tiendan a promover el establecimiento de leyes, procedimientos, selección de autoridades e instituciones específicas para que conozcan los asuntos penales en los que se encuentren inmersos niños y adolescentes. La especialización jurídica exigida a los jueces como fiscales, abogados y policías que intervengan en los asuntos penales en los que se encuentren inmersos menores de edad es establecido en la Observación General N° 10 del Comité de Derechos del Niño (párrafo 92/93) y requerida, también por la Reglas de Beijing-2.3, 6.1, 6.2 6.3 y 22, en las que tratan varios aspectos importantes de una administración de justicia penal de niños y/o adolescente eficaz, justa y humanitaria, exigiendo que los magistrados, jueces, fiscales, defensores oficiales sean elegidos teniendo en cuenta ciertas cualidades y experiencia y, a su vez, deben estar especialmente capacitados para poder abordar los delitos juveniles.

De tal manera, que sostiene que respecto al principio de especialización que gozan los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal implica (Barbirotto, 2011, 18. 12, Buenos Aires.):

- Que los órganos judiciales (jueces, fiscales, defensores oficiales) se encuentren capacitados y tengan competencia específica para actuar cuando los delitos sean cometidos por personas menores de 18 años de edad.
- Que los procedimientos se adapten a las necesidades de los adolescentes, previendo incluso estándares más exigentes en comparación con los vigentes para las personas adultos.
- Que las autoridades administrativas de aplicación del sistema y los establecimientos de ejecución de las penas sean especiales, es decir, diferenciados de los destinados a la población de mayores de 18 años. Este principio, implica, además, que todos los operadores-no solo los jueces, fiscales y defensores oficiales-deben contar con formación específica. Por eso se

recomienda la especialización y la formación profesional adicional de todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley;

- Que las sanciones y las medidas alternativas al proceso penal sean destinadas del régimen penal de adultos. Ejemplos de estas medidas alternativas tenemos a la remisión fiscal regulada en el artículo 206° del C.N.A.

Cabe agregar, que lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes”.

Como resultado de lo mencionado anteriormente, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 42-43), agrega que la Corte ha sostenido que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal²⁸. Por su parte, también la CIDH ha hecho referencia a la necesidad de un tratamiento especial y una magistratura especializada (CIDH, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Menores detenidos, 1999, 10 de marzo, pág. 125).

Igualmente, la Corte ha explicado también que en una jurisdicción penal especializada para niños (Caso Instituto de Reeduación del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, 2004.), los que ejerzan facultades en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de niños deberán estar especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología infantil para

²⁸Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 109.

evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas, necesarias y proporcionales²⁹.

Finalmente, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 42-43), aduce que la especialización requiere leyes, procedimientos e instituciones específicos para niños, además de capacitación específica para todas las personas que trabajan en el sistema de justicia juvenil. Estos requisitos de especialización se aplican a todo el sistema y a las personas que en él laboran, incluyendo al personal no jurídico que asesora a los tribunales o que ejecuta las medidas ordenadas por los tribunales, y al personal de las instituciones en las que se mantiene a los niños privados de su libertad. Los requisitos de especialización también se aplican a las fuerzas policiales cuando entran en contacto con los niños y las niñas.

1.3.17 Principio de la inviolabilidad de la defensa

Este principio, según Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 43-45) viene a ser una suerte de matriz del principio del debido proceso. El derecho a la defensa constituye la posibilidad efectiva del imputado a defenderse de los cargos formulados en su contra. Este principio implica³⁰:

- Conocer los cargos se le imputan
- Tener la oportunidad de rebatirlos ante el Tribunal
- Poder presentar pruebas
- Contar con la asistencia de un abogado

De manera que sostiene que el derecho de defensa constituye la posibilidad de que el adolescente infractor conozca plenamente los hechos que se le imputan, la infracción penal

²⁹Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 40.4 y Reglas de Beijing, regla 6.3.

³⁰ Informe Defensorial N° 051, "El sistema penal juvenil en el Perú"- Análisis Jurídico Social, Proyecto Justicia Penal Juvenil ILANUD/comisión europea". Op.cit. p.80

presuntamente cometida; así como los medios probatorios que existen en su contra; de esta manera su abogado defensor a quien libremente elige, salvo en los supuestos que se tenga la necesidad de designar un defensor público, va a cumplir el rol de probar su inocencia, modificar, disminuir o levantar los cargos en su contra, debiendo intervenir desde la etapa de investigación policial y durante todo el proceso judicial, controlando que las autoridades policiales, fiscales, judiciales actúen conforme a derecho, correspondiéndole además velar por el respeto a sus derechos fundamentales que como persona y en especial por la condición de adolescente le asisten.

Asimismo, refiere que el derecho a la defensa tiene dos aspectos según Gimeno Sendra (GIMENO SENDRA, 1988):

- a) **Defensa Material.** -Derecho del imputado de hacer valer por sí mismo su defensa
- b) **Defensa técnica.** -Derecho a contar con la asistencia técnica de un abogado, que le permite una defensa adecuada (incluye el deber del estado de proporcionar asistencia jurídica en caso que la persona no pueda acceder a un abogado).

Cabe mencionar, que del principio precitado, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que tiene sustento legal en primer término en el literal d) del artículo 37° y el literal b), iii del punto 2) del artículo 40° de la C.D.N, estableciéndose que todo niño tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a contar con esta en el desarrollo del proceso; del mismo modo el numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú prescribe que una persona no pueda ser privada de la defensa en ningún estado del proceso, pudiendo comunicarse con su defensor y ser asesorada desde que es citada o detenida, también el artículo 148° del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que ningún adolescente puede ser investigado o procesado sin contar con asesoramiento legal, debiendo participar en todas las diligencias que se programen con motivo de su detención con la asistencia de su abogado defensor; así lo estipula el artículo 200° del referido cuerpo legal.

1.3.18. Principio de Humanidad de las Medidas y Orientación a la Rehabilitación

Que respecto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 45-46), sostiene que en los literales a) y c) del artículo 37° de la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe las torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como la pena de muerte y prisión perpetua. También lo encontramos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing), que en el numeral 4) del art. 1° establece que “la justicia de menores se ha de concebir como una parte importante del proceso de desarrollo de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad”. Las mismas reglas en el numeral 2) del art. 17° prescriben que “los delitos cometidos por menores no sancionarán en ningún caso con la pena capital”, advirtiéndose además que en numeral 3) del mismo artículo señala textualmente que “los menores no serán sancionados con penas corporales”.

Es así que bajo este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), afirma que las sanciones que deben aplicarse en el sistema penal juvenil deben tener un componente educativo para su rehabilitación y reinserción en la sociedad, donde el estado implemente políticas de orientación en concertación con las organizaciones de la sociedad social comprometidas con el quehacer de los adolescentes infractores, con respecto de los derechos de los adolescentes y a su dignidad como seres humanos. Nótese que nuestra legislación en el artículo 217° del C.N.A establece taxativamente los tipos de medidas socio-educativas que el juez puede interponer, las que consisten en: a) Amonestación, b) Prestación de servicios a la comunidad, c) Libertad Asistida, d) libertad Restringida, y e) Internamiento en establecimiento para tratamiento; es decir no se trata de penas como es aplicable a los adultos sino de medidas que tienen como fin de reeducar al adolescente para su reinserción en su familia, comunidad y sociedad en general.

Finalmente, aduce que el artículo X del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes señala que el estado garantiza un sistema de administración de Justicia especializada para los niños y adolescentes. Los casos sujetos a resolución Judicial o administrativa en los que estén involucrados niños o adolescente serán tratados como problemas humanos.

1.3.19. Principio de Jurisdiccionalidad y Prohibición de Condena en Ausencia

Que respecto a este principio, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (Solar Villalta A. M., Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 46-47), manifiesta que el proceso penal previamente debe contener garantías procesales que corresponden antes de la imposición de alguna medida socio educativa a los adolescente infractores; puesto que la presunción de inocencia es un derecho fundamental considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (D.U.D.H), en el sentido de que " toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)". De igual modo, este derecho es analizado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, "(...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada".

Es así que concluye que este principio también se encuentra regulado en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución establece que "Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad". El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla en el principio Derecho de Dignidad Humana ("La defensa de la persona Humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado", artículo 1 de la constitución), como el principio pro homine³¹.

³¹ Sentencia Constitucional recaída en el Expediente N° 01768-2009-AA-PA/TC, punto 4.

1.3.20. Principio de Progresividad y No Regresividad de los Derechos Humanos

Con respecto al principio de progresividad y no regresividad, Ana María Solar Villalta en el tema Principios que inspiran el Sistema Penal Juvenil (García Huayama, 2016, págs. 47-48), traduce este principio en el sentido que es la obligación que tienen los estados para adoptar acciones o políticas tendientes a mejorar el alcance de los derechos humanos, estando impedidos de retroceder a los estándares de protección internacional referido a Derechos Humanos, acción que acarrearía consecuencias negativas como la involución en este campo, además de la sanción correspondiente para el Estado Peruano. En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ésta advierte que la adopción de medidas regresivas a través de las cuales se limite el goce de los derechos de los niños, constituye una violación a los estándares establecidos por el sistema Interamericano de Derechos Humanos e insta a los Estados a abstenerse de probar Legislación contraria a los estándares sobre la materia³².

Asimismo, refiere que la diferencia existente entre el Sistema Penal Juvenil y el Sistema penal aplicable a los adultos, es básicamente porque el primero de ellos persigue la formación, inserción social y familiar del infractor atendiendo el grado de comprensión y madurez mental sobre sus actos, lo que obliga al Estado establecer procesos rápidos y a disponer de una amplia gama de sanciones que puedan interponer sede acuerdo a la edad, circunstancias personales del adolescente, reincidencia, naturaleza del acto infractor, entre otros factores; por lo que podemos colegir que el Decreto Legislativo N° 1204 al que hemos hecho referencia afecta el enfoque socio educativo que debe caracterizar todo sistema juvenil de un estado que ha ratificado la Convención, pues restringe el ámbito de protección de sus derechos, afectando claramente el principio de no regresividad, orientador de los derechos humanos. Cabe mencionar además que las obligaciones de los estados frente a los niños según lo dispuesto en el artículo 27,2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no son sujetas de suspensión bajo circunstancia alguna.

³² Informe "Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" del 13 de julio del 2011.

1.3.21 Principio de Proporcionalidad

Derivado del principio de intervención mínima. Este principio significa que debe existir una correspondencia entre la gravedad del hecho cometido por el menor y la medida que se aplica, con imposibilidad de que ésta sea más grave o de una duración superior a la pena que se podría imponer a un adulto por los mismo hechos y ello con independencia de las especiales circunstancias del menor, que, al margen de lo anterior, pudieran hacer aconsejable la adopción de esta medida (Sentencia, Sala 1ª, 61/1998, de 17 de marzo). (Ornosa fernández, 2007)

1.3.22 Principio de excepcionalidad

Que, el artículo 37.b) de la CDN dispone que los Estados partes velarán por que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se lleven a cabo como medidas de último recurso. Lo anterior constituye un reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son personas en desarrollo respecto de quienes los Estados están obligados a adoptar medidas especiales de protección, según el artículo 19 de la Convención Americana y el artículo VII de la Declaración Americana.

Cabe mencionar que este principio de excepcionalidad derivado de las normas anteriores implica tanto la excepcionalidad de la privación de la libertad, de forma preventiva o como sanción, como la excepcionalidad de la aplicación del sistema de justicia juvenil o judicialización. Evidentemente, las consecuencias, muchas veces adversas, de someter a una persona a la justicia por infringir las leyes penales, especialmente cuando ello implica su privación de libertad, se acentúan cuando se trata de niñas, niños y adolescentes por tratarse de personas en desarrollo. Por ello, es necesario limitar el uso del sistema de justicia juvenil respecto a niñas, niños y adolescentes, disminuyendo en la mayor medida posible la intervención punitiva del Estado, sobre todo la privación de la libertad.

En particular sobre la prisión preventiva, la Corte ha destacado que ésta es la medida más severa que se le puede aplicar a quien se acusa de infringir una ley penal, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática³³. En relación específica con la privación de libertad de niños, la Corte ha añadido que la regla de la excepcionalidad de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma prevaleciente debe ser la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva (Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas., 2004)³⁴. Finalmente, respecto a toda privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes, la Corte ha señalado que el contenido del derecho a la libertad personal “*no puede deslindarse del interés superior del niño, razón por la cual requiere de la adopción de medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad*” (Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2004).

La información recibida por la Comisión da cuenta que las detenciones de niños en la región constituyen la regla en vez de la excepción, y que es mucho mayor el número de niños sometidos a detención que el número de niños que son sometidos a un proceso judicial para determinar si infringieron la legislación penal. Ello implica que existe una gran proporción de niños que son detenidos por las autoridades policiales sin que ello implique un procedimiento posterior. Más aún, la detención no es sólo utilizada para casos de delitos flagrantes sino también para enfrentar situaciones como el ausentismo escolar, la fuga del hogar, niños de la calle, entre otros.

1.4 LAS SANCIONES HA APLICARSE EN LA LEY PENAL CONTRA ADOLESCENTES INFRACTORES

1.4.1. Introducción

Tratándose de las sanciones contra adolescentes infractores, García Huayama, Juan Carlos (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 135-136), sostiene que con

³³ Corte IDH. Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228 y Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.

³⁴ Según la Corte IDH, estas medidas sustitutorias pueden incluir, inter alia, “la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones”

fecha 23 de septiembre de 2015 se publicó en el diario Oficial, el Decreto Legislativo N° 1204, que modifica el Código de los Niños y Adolescentes respecto a las sanciones a imponer a los adolescentes en conflicto con la ley penal y su ejecución. Muchas son las innovaciones que introduce el Código de los Niños y Adolescentes, así tenemos: (i) el cambio de denominación de las consecuencias jurídicas que asumen los adolescentes que infringe la ley penal, actualmente la norma se refiere a “sanciones”, dejando de lado el término medidas socioeducativas como se le denominaba con anterioridad, (ii) se establece un variado catálogo de sanciones, algunas de las cuales resultan novedosas en nuestro ordenamiento, tales como los mandatos y prohibiciones, reparación directa a la víctima e internación domiciliaria; (iii) se amplía el plazo de la internación domiciliaria; (iii) se amplía el plazo de la internación para determinados hechos punibles considerados de gravedad; (iv) se otorga facultades al juzgador para variar, reducir o dejar sin efecto la sanción durante la etapa de ejecución de sentencia; (v) se amplían los plazos de prescripción de la acción penal; (vi) se incorporó el capítulo VII-A denominado “ejecución de las sanciones” y (vii) se modificó el artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes referido a la medida cautelar de internación preventiva.

Asimismo, García Huayama, Juan Carlos (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), refiere que el Código de los Niños y Adolescentes puede identificarse tres dimensiones complementarias en cuanto al proceso seguido contra adolescentes que infringen la ley penal: *la sustantiva*, que regula las consecuencias jurídicas de las infracciones cometidas por menores de edad; *la procesal*, que se ocupa de fijar el sistema de enjuiciamiento necesarios para realizar los aspectos sustantivos de la ley, consagrando garantías procesales análogas a las que establecen en la legislación de adultos con peculiaridades orientadas a salvaguardar el interés superior del niño y, *la ejecutiva*, vinculada al desarrollo y cumplimiento de las sanciones impuestas (EZEQUIEL CRIVELLI, 2014, pág. P.157).

En ese sentido, García Huayama, Juan Carlos (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016) concluye se puede determinar que la dimensión sustantiva, integrada por las sanciones que actualmente resultan susceptibles de imposición para aquellos adolescentes que sean declarados responsables de infringir la ley penal.

1.4.2. Naturaleza jurídica de las sanciones

Atendiendo a estas consideraciones, García Huayama, Juan Carlos (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 136-137), refiere que el capítulo VII, título II del Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes, denomina “sanciones” a las consecuencias Jurídicas que se imponen a los adolescentes cuyas edades oscilan entre 14 a 17 años de edad y que infringen la ley penal, esta terminología en realidad nos parece la adecuada, pues el concepto de “medida socioeducativa”, utilizado con anterioridad a la reforma, es propio de la doctrina de la situación irregular, en cuyo contexto se las entiende como:

“Aquellas en las que la finalidad esencial no es la de penar ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la de reprobar socialmente la conducta de quien se encuentre en situación irregular porque fundamentalmente se trata de proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que nocivamente influye en su comportamiento y contra las tendencias o inclinaciones perturbadoras de su normal desarrollo personal que motivan indudables desajustes a su convivencia con los demás, por ello la finalidad esencial de éstas medidas es de prepararle eficazmente para la vida”(HERNÁNDEZ ALARCÓN, 2018),

En ese sentido, Guzmán Díaz respecto a la denominación de sanciones, sostiene que se rompe con una tradición nefasta en el tratamiento de reproche penal muy al estilo del sistema tutelar o de situación irregular, donde a las consecuencias jurídicas no se les había asimilado como aflicciones sino como medidas de protección. Se decía durante la vigencia de la Doctrina de la situación irregular, donde a las consecuencias jurídicas no se les había asimilado como aflicciones sino como medidas de protección. Se decía durante la vigencia de la doctrina de la situación irregular que los procesos seguidos contra adolescentes no eran de carácter represivo sino esencialmente tutelar y tienen como fundamento la protección especial del niño y la prevalencia del interés superior del menor, por tanto, no pueden ser declarados responsables de un hecho punible ni sometidos a medida o sanción penal como consecuencia de su realización, sino protegidos y educados de acuerdo con su situación personal o socio familiar (GUZMAN DÍAZ, 2012, pág. p.123)

Por otro lado, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal sostiene que la ley de Justicia Penal Juvenil de

Costa Rica, del año 1996, es uno de los primeros textos legislativos en Latinoamérica que se sinceró y reguló el tratamiento penal del adolescente, dejando de lado la denominación de “medidas” para hablar de “sanciones”. Al respecto MARY BELLOF sostuvo que ello “representó un avance significativo en la transformación de la justicia juvenil latinoamericana al abandonar la denominación de medidas para las consecuencias jurídicas de la conducta infractora de la ley penal y adoptar la denominación de sanciones” (DUCE, 2011, agosto , pág. p.212.).

Asimismo, García Huayama, Juan Carlos en el tema las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal aclara que existe un sector de la Doctrina que establece que “mantener la denominación de medidas, aun sabiendo que va a recibir críticas de eufemismo, se muestre como necesaria no sólo por la especificidad del derecho penal de menores sino también por la limitación de intervención punitiva que ello conlleva, ya que su unificación terminológica con las penas de adultos podría acabar justificando una mayor intervención sancionadora. Por ello, teniendo en cuenta que son de mayor peso las diferencias sancionadoras con las personas, discrecionalidad judicial en su elección y modificación, valoración de criterios individuales, familiares y sociales recogidos de informes profesionales, adaptación de la ejecución a la evaluación del menor y amplitud de alternativas, parece preferible señalar la línea divisora con las penas de adultos también en el ámbito semántico (CERVELLO DONDERIS, 2009, pág. p.95)”

Sobre la base de lo ya mencionado, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016) sostiene que el termino sanción ayuda a entender que aun cuando los menores de edad se encuentran sometidos a una jurisdicción especializada, en realidad se trata de una responsabilidad penal, aunque atenuada respecto del adulto, pero de la misma naturaleza³⁵; En ese sentido, ORNOSA FERNÁNDEZ sostiene que la exigencia de un proceso diferenciado respecto a los adultos “no es obstáculo para que el proceso de infracción a la ley penal deba considerarse de carácter penal, por su propia naturaleza y aplicación de los principios, derechos y garantías previstos en ordenamiento jurídico(ORNOSA FERNANDEZ, 2007, pág. P.99).

³⁵ (DEL CARPIO RODRIGUEZ, Derechos de los niños y adolescentes. , 2001, pág. P.61.)

Adicionalmente, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016) considera que resulta aconsejable y hasta beneficioso que el menor conozca sin subterfugios que estamos ante una justicia penal que, con todas sus especialidades, le van exigir- en caso de acreditarse su participación en los hechos imputados- responder ante la sociedad por la infracción a la ley penal a través de una sanción. Además, si reconocemos la naturaleza penal de este proceso le estamos imponiendo al sistema los límites y controles propios del ordenamiento jurídico de un estado de derecho, en caso contrario, al no tener en claro esta naturaleza, la exigencia de derechos y garantías puede soslayarse, conforme se ha hecho en el pasado con la legislación tutelar, donde “en materia de infracciones penales, el menor de edad era considerado irresponsable penalmente e inimputable, y se le trataba como una persona incapaz, incluyéndolo así una categoría de personas diferentes a las normales, siendo la base de una discriminación y marginaciones expresada en la pérdida de garantías personales, reforzando el rol paternal del juez. De esta forma se afirmaba que las normas aplicables en estos procesos no correspondían al derecho penal al tener naturaleza distinta, lo que no era cierto debido a que la lógica sancionadora era idéntica, de manera tal que al menor se le aplicaba la severidad del derecho penal, pero sin ninguna garantía que lo protegiera. Al afirmarse que la sentencia no contenía una sanción, sino una medida de seguridad, la misma podía ser de duración indeterminada (en razón al criterio de peligrosidad de la conducta del menor) y para su fundamentación no se requería demostrar la culpabilidad del menor sino sólo la peligrosidad (Defensoría del Pueblo, 2007, pág. pp.18 y 19)”.

Por su parte, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), afirma que se ha empezado a llamar las cosas por su nombre, desde una simple amonestación hasta la privación de la libertad por aplicación del internamiento en un centro juvenil, son sanciones aplicables al adolescente que infringe una norma penal. Entender esto es necesario a efectos de desterrar eufemismo como los expuestos por la Primera Sala Civil de Arequipa, en el Expediente N° 0015-2001-P-P, donde se indica:

“No puede dejarse de considerar que tratándose de adolescente las medidas socioeducativas que se dictan, así como las preventivas no poseen un carácter de sanción, sino por el contrario, tienen como fin coadyuvar a la formación y educación del infractor a cargo de personal especializado, lo que resulta beneficioso

especialmente en aquellos casos en que las inconductas se originan en las deficiencias de los padres en cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con sus hijos...”³⁶

Como puede observarse, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal finalmente advierte debe tenerse en cuenta que el derecho penal juvenil no es un derecho social, como estimaba la doctrina de situación irregular, ni derecho de familia, sino que es derecho penal, eso sí con particularidades derivadas del interés superior del niño y de la protección integral de este, expresadas como principio educativo(TIFFER, 1999, pág. p.24.).

1.4.3 Criterios para la Determinación de la Sanción

Ante la situación planteada, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 148-153), afirma que el juzgador de familia en el sistema de justicia penal juvenil cuenta con un amplio abanico de sanciones de diferente intensidad y contenido, a efectos de seleccionar aquellas que satisfagan con mayor claridad el interés superior del niño. Así, de comprobarse la responsabilidad del adolescente infractor se procederá a aplicar alguna de las medidas que se indican en el artículo 231° del Código de los Niños y Adolescentes, que comprende desde una simple amonestación hasta la privación de su libertad mediante la sanción de internamiento en un centro juvenil.

En tal sentido, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016) sostiene que a efectos de guiar al juzgador en la determinación de la sanción concreta a imponer, el artículo 230 del Código de los Niños y Adolescentes establece que éste no solo debería limitar sea examinar la gravedad del hecho punible, sino que también debe analizar los siguientes aspectos:

³⁶ DEL CARPIO RODRIGUEZ, Columba. Ob. Cit, p.362 y 363.

- La edad del adolescente, sus circunstancias personales, así como su situación psicológica, educativa, familiar y socio cultural, según el informe del equipo multidisciplinario.
- La magnitud del daño causado.
- El nivel de intervención de los hechos.
- La capacidad para cumplir la sanción.
- Las circunstancias agravantes o atenuantes reguladas en el Código Penal o leyes especiales, en lo que corresponda.
- La proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción, y
- Los esfuerzos del adolescente por reparar, directa o indirectamente, los daños.

Posteriormente, sostiene que conforme al artículo 230° del Código de los Niños y Adolescentes el juez al momento de elegir la medida socioeducativa deberá atender no solamente la gravedad y naturaleza de la infracción, sino también a la edad, personalidad, circunstancias personales, familiares y sociales del adolescente. La valoración conjunta la valoración de estos aspectos también interviene decisivamente al momento de adoptar por la aplicación de una sanción determinada (socioeducativa, limitativa de derechos o privativa de libertad). En ese sentido, también se ha pronunciado el comité sobre los derechos del niño que en la observación general N° 10, resalto: “... la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y las necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad, en particular a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no está en armonía con los principios básicos de la justicia de menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la convención”.

Por las consideraciones anteriores, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), afirma que tratándose de una sanción de internamiento, el juez debe explicar por qué considera que la privación de libertad resulta indispensable en el caso específico, alegando los motivos de los cuales las otras medidas personales menos gravosas son incapaces de cumplir el mismo objetivo, tal como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 donde señala: “ en consideración

a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y libertad asistida”.

Cabe agregar, que García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal, sostiene que es importante las técnicas motivadas que ejerza el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables; sin embargo, cuando se dispone la privación de libertad de un adolescente que se encuentra en conflicto con la Ley Penal la exigencia de motivación debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permita evaluar si el juez ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida de internamiento.

En ese mismo orden y dirección, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 150-152), agrega que el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00804-2013-/TC, resolvió el caso del ciudadano Jorge Esteban Dueñas Rojas, quien cuestionaba las resoluciones judiciales (de primera y segunda instancia) que declararon a su hijo como autor de la infracción de robo agravado en grado de tentativa y dispusieron su internamiento durante tres años como medida socioeducativa. El demandante alega que las decisiones judiciales cuestionadas únicamente se sustentaron en la declaración del agraviado y no se valoró el resto de material probatorio aportado en el proceso judicial, lo cual vulnera su derecho al debido proceso y la debida motivación. Al respecto el máximo intérprete constitucional sostuvo lo siguiente:

“8.1. con relación de la sentencia N° 069-2012, expedida por el Segundo Juzgado Especializado de Familia:

- a) El primer lugar, se aprecia que si bien el juzgado aludió al informe técnico multidisciplinario incluido en el expediente, que clasificaba al investigado como “ primario en internamiento “así como la evaluación psicológica, que concluyo respecto al menor infractor que “ refiere cursar estudios superiores

observando interés por continuar carrera profesional (profesor de educación física) serio, preocupado, tranquilo, emocionalmente estable, animoso persistente (...) se proyecta así su futuro, con metas de superior personal”, no se parecía en el iter argumentativo de la resolución judicial cuestionada ponderación alguna de estas pruebas, cuyo mérito ha sido excluido inexplicablemente del razonamiento judicial expuesto en la sentencia, cuando lo cierto tal información era absolutamente relevante, sino para determinar la responsabilidad penal del infractor en el hecho denunciado (lo que no se discute), si lo era para determinar la medida socio educativa que iba imponérsela al menor como consecuencia de los hechos acreditados. En tal sentido, la conclusión a la que arriba el juzgado en el fallo de la sentencia, que impone al infractor la medida socio educativa de internación por el plazo de cuatro (04) años, al estar desprovista de la necesaria justificación en los términos aquí señalados, constituye un supuesto de motivación insuficiente, al no haberse brindado los argumentos suficientes que respaldan la imposición de la sanción impuesta al menor infractor.

- b) Pero además, y en segundo lugar, se precia también un supuesto de motivación incongruente, pues la ausencia de valoración de la pruebas antes aludidas contrasta o es incoherente con la invocación, en la parte final de la sentencia, del principio de interés superior del niño, así como la Convención Internacional de Derecho del Niño y la Doctrina de la Protección Integral, que buscan precisamente “No sancionar la adolescente, si no prevenir que vuelva incurrir en actos similares y lograr un cambio en su conducta”, como el propio Juzgado lo refiere en el considerando duodécimo segundo de la sentencia.

8.2 con relación a la Resolución N° 18, expedida por la Primera Sala Civil de Arequipa:

Si bien la Sala demandada, a diferencia del juez Aquo, si valoró los informes antes aludidos, al señalar que “ al momento de cometer el acto infractor el adolescente contaba con diecisiete años de edad, con grado instrucción secundaria completa f...) existe la necesidad de intervención estatal, debido a que el adolescente

infractor se encuentra con un entorno familiar altamente desfavorable”, concluyendo por ello que la medida socioeducativa de internamiento “es la adecuada en caso de autos, con la finalidad de lograr a través del apoyo del equipo multidisciplinario que el adolescente infractor adquiriera criterios de valores y moralidad”, no menos cierto es que la Sala demandada, al valer la sanción originalmente impuesta de cuatro (04) a tres (03) años, se limitó a señalar que “debe tenerse presente que al adolescente infractora nacido el 15 de agosto de 1984 (...) no registra antecedentes por infracciones (...) y la infracción ha quedado en tentativa”, pero deja sin explicar el razonamiento judicial que lo conduce de que esta premisa a la conclusión punitiva a la cual arriba. Lo que igualmente revela, aunque por este otro motivo, un supuesto de motivación insuficiente teniendo cuenta las circunstancias personales del menor infractor que la Sala demandada tenía a su disposición para resolver”.

Dado el caso expuesto, por García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 152), se aprecia que tanto en el Segundo Juzgado Especializado de Familia como la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa al expedir sus correspondientes sentencias, excluyeron de su razonamiento argumentativo el valorar aspectos relevantes para establecer la proporcionalidad de la sanción al aplicar en el caso concreto, tales que como el ilícito quedó en grado de tentativa, que el adolescente no registraba antecedentes por otras infracciones a la ley penal que se encontraba cursando estudios superiores, no se apreció los resultados de la evaluación psicológica donde se afirma que el menor tiene interés por continuar cursando una carrera profesional, se proyecta así su futuro, con metas de superación personal; así mismo, se omitió con explicar con base objetiva y razonable porque motivos resultaba necesario explicar una sanción privativa de libertad y no resultaría aplicable una alternativa menos gravosa a la restricción de la libertad física del menor de edad. Es que en el sistema penal juvenil la privación de la libertad queda justificada como ultima ratio, porque solo puede ser dictada cuando fuera absolutamente indispensable y necesaria, siempre que no existen otros mecanismos menos radicales.

De lo mencionado anteriormente, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal

Juvenil en el Perú, 2016, pág. 152), sostiene que la ausencia o insuficiencia de motivación convierte la medida de internamiento en ilegítima en inconstitucional, en tal sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional aludida es beneficiosa pues exige a los operadores de derecho proceder con una diferencia perspectiva de atención, ya que si bien al principio de flexibilidad propios de los sistemas de responsabilidad penal juvenil importa reconocer márgenes de discrecionalidad, esto no se identifica con arbitrariedad dado que la sanción elegida se debe explicar conforme a los criterios antes expuestos y siempre ser compatibles con el interés superior del niño.

Por otro lado, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley, advierte que las circunstancias personales, educativas, familiar, sociocultural del adolescente debe servir para su beneficio, es decir, deben ser alegadas a efectos de disponer una sanción menor. Las carencias del adolescente en conflicto con la ley penal no deben servir para agravar su situación jurídica, consecuentemente no resultaría privar la libertad de un menor de edad bajo el argumento de estar “fuera de control de sus padres”, “debido a consumo de sustancias psicoactivas” o por encontrarse en un “ambiente altamente desfavorable” pues estos fundamentos establecen en razones de su condición (Estatus Offenses)y , en general no debe dictarse la sanción de internación únicamente alegando razones que no estén vinculadas directamente al hecho infractor; verbigracia, por el ambiente donde el adolescente desarrolla su vida, el estado de desamparo que padecen, la necesidad de educación, adicción a drogas, situación de indigencia, garantizar sus sustento o protegerlo frente a influencias nocivas; estas consideraciones no deben de servir de excusa para privar al adolescente del derecho fundamental a la libertad. En este caso retrocederíamos al concepto que se tenía de la medida privativa de libertad durante la doctrina de la situación irregular, donde esta medida adquiriría el carácter de una respuesta inmediata ante la situación de riesgo o peligro social en que se encontraba el menor, como forma de sacarlo del entorno social en que se desenvolvía cuando se estimaba que este no era conveniente.

Finalmente, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), concluye que en muchos casos hay una relación entre delito y falta de contención familiar, falta de ocupación de muchos jóvenes que pasan gran parte de su tiempo en la calle,

falta de educación y necesidades básicas no satisfechas. No pueden negarse la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran inmersos muchachos adolescente en conflicto con la ley penal, pero de ningún modo creo que esto deba pesar en contra del imputado a la hora de decidir sobre su libertad ambulatoria. Nada tiene que ver el desamparo moral con la responsabilidad penal. Esto debe andar por caminos separados.

1.4.4. Sanciones susceptibles de ser Impuestas a los Adolescentes Infractores

En ese orden de ideas, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), agrega que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.4 establece la necesidad de que ese disponga una diversidad de sanciones frente a un hecho punible cometido por un menor de edad para asegurar que sean tratados de manera apropiada para su bienestar, pero sin perder de vista la necesaria proporción que debe guardar la respuesta adoptada, tanto con las circunstancias personales del adolescente en conflicto con la ley penal como la infracción misma.

Es así que, aduce que la diversidad de medidas tiene también una naturaleza de las reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia de menores, que dispone: “para mayor flexibilidad y para evitaren la medida de lo posible confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. En entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicar simultáneamente, figuran las siguientes: a) órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) libertad vigilada; c) órdenes de prestación de servicios a la comunidad; d) sanciones socioeconómicas, indemnizaciones y devoluciones; e) Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; g) Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimiento educativos; h)Otras Órdenes pertinentes”.

De esta manera, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), informa que frente a una diversidad de respuestas frente a un hecho punible cometido por adolescente, el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 231° establece tres

tipos de sanciones que se puede aplicar a los adolescentes conflicto con la ley penal: a) Sanciones socioeducativas, b) Mandatos y prohibiciones y c) Sanciones Privativas de Libertad.

1.4.4.1 Sanciones Socio Educativas

a) Amonestación

Cabe mencionar, que lo señalado por García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), determina que el artículo 231-a del Código de los Niños y Adolescentes la amonestación consiste en la recriminación o llamada de atención que realizada el juez al adolescente infractor y cuando corresponda, a sus padres o responsables. Al adolescente se le exhortará para que en lo sucesivo cumpla con las normas de convivencia social, en tanto que a los padres, tutores o responsables de éste se les requerirá que ejerzan mayor control sobre la conducta del adolescente, advirtiéndole las consecuencias jurídicas de reiterarse la infracción.

Según lo citado por García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), la llamada de atención dada por el juez debe ser “clara y directa”, de manera que el adolescente en conflicto con la ley penal y las personas adultas responsables de su conducta comprendan la ilicitud de los hechos cometidos. Esto indica que el juez, debe utilizar un lenguaje simple y comprensible para un menor de edad, es decir, la explicación de las consecuencias jurídicas en caso de reiteración debe ser transmitida al adolescente en “su” idioma, lo que implica que no involucre excesivas expresiones científicas o técnicas que finalmente resulten incomprensibles y que en consecuencia, carecen de referencias o significados tanto para el adolescente como para los responsables de vigilar su conducta; por el contrario, todos éstos no deben salir de la audiencia de lectura de sentencia sin haber entendido cual es el motivo de la amonestación y las consecuencias jurídicas que se derivan si el adolescente infractor no se somete a las advertencias de otros hechos más graves.

En ese sentido, sostiene que los efectos de la aplicación efectiva de esta medida socioeducativa es necesario la presencia del adolescente, sus padres o responsables y del abogado defensor así como el respeto al principio de oralidad al momento de hacer la recriminación y advertencia, conforme lo establece el numeral 14.2 de las Reglas de Beijing donde se señala que para dictar sentencia, el procedimiento favorecerá los intereses del menor de edad y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el niño participe en él y se exprese libremente. Se entiende que para imponer la sanción socioeducativa de amonestación, el juez necesariamente debe señalar hora y fecha para realizar la audiencia donde se efectuará el llamado de atención y explicación de las consecuencias en caso de reincidir, no basta entonces que la sentencia sea notificada al domicilio del adolescente conforme establecía anteriormente el artículo 219° del CNA para todas las medidas socioeducativas no privativas de libertad, incluida la amonestación.

En consecuencia, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), advierte que el carácter oral de la llamada de atención, no exime de dictar una resolución motivada donde se analice los hechos demostrados en el ínterin del proceso, el derecho vulnerado y los dispositivos relacionados a la sanción que se ha aplicado, pues esto garantiza mayor efectividad en el cumplimiento de la sanción y satisface el principio de fundamentación suficiente de cada resolución judicial.

Es así que, García Huayama Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), corrobora que esta medida , una que contenga la calidad de sanción leve y menos restrictiva de los derechos del infractor, se dispone que se aplique cuando se trata de faltas. Aunque no lo indica textualmente la norma, considero que el juez también tiene la posibilidad de aplicar esta sanción en aquellos casos que no revelen gravedad y se considere, además, que por las condiciones personales del sujeto resulta la más adecuada.

b) Libertad Asistida

Según lo señalado por García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú,

2016, pág. 157), respecto de este principio sostiene que consiste en otorgar la libertad al adolescente sancionado, quién queda sometido a los programas educativos, de orientación o de cualquier otro tipo que se consideren convenientes para su desarrollo. La forma de ejecución y cumplimiento de la libertad asistida es la siguiente: una vez firme la sentencia, se elaborará un plan individual para el cumplimiento de esta sanción. Bajo este plan se ejecutará la libertad asistida, y deberá contener los posibles programas educativos o formativos a los que el adolescente debe asistir, el tipo de orientación requerida y el seguimiento para el cumplimiento de los fines fijados.

Asimismo, refiere que el artículo 231-B del C.N.A establece que la libertad asistida implica otorgar libertad al adolescente, pero éste queda obligado a cumplir ciertos programas educativos y recibir orientación, con la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes. Se caracteriza por lo siguiente:

- Esta sanción se aplica por un plazo mínimo de seis meses y como máximo por el término de un año.
- Procede su aplicación siempre que se trate de un hecho punible tipificado en el Código Penal o leyes especiales como delito doloso, cuya sanción no supere los dos años de pena privativa de libertad y siempre que no se hubiera empleado violencia o amenaza, ni puesto en grave riesgo la vida o la integridad personal de la víctima.
- Se ejecuta en entidades públicas o privadas que desarrollan programas educativos o de orientación para adolescentes. Dichas entidades deben informar al juez sobre la evolución del adolescente infractor cada tres meses o cuando se le requiera.
- La Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder judicial, o la que haga sus veces, se encarga de la supervisión de los programas educativos o de orientación y de administrar el registro de las entidades que brindan dichos servicios a nivel nacional.

Anteriormente, el artículo 233 del CNA señalaba que la libertad asistida consistía en nombrar un tutor para que se encargue de la supervisión y promoción del adolescente

sentenciado y de su familia. Su asistencia era ajustable o adecuada a sus requerimientos o necesidades, teniendo como termino máximo ocho meses.

c) Prestación de Servicios a la Comunidad

Por otro lado, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, pág. 158), afirma que tratándose de esta medida socioeducativa, el artículo 231-C del CNA indica que la prestación de servicios a la comunidad “consiste en la realización de tareas gratuitas, de interés social, en entidades asistenciales, de salud, educación que desarrollen programas educativos o de orientación u otras instituciones similares, ya sea públicas o privadas”.

Así también, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal, sostiene que la mencionada norma indica que el adolescente habrá de asumir la ejecución de la medida de manera gratuita significando que la entidad pública o privada que reciba al sentenciado no ofrecerá ni entregará remuneración alguna, tampoco hará promesas a esos fines, de modo que éste comprenda que la asignación que realiza es consecuencia de una violación a una norma legal. La persona responsable del lugar donde se presta el servicio tendrá en cuenta que este adolescente no está supeditado a un contrato.

Posteriormente, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal, advierte que las tareas o labores a realizar deben ser acordes a la aptitud del adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo. Hubiera sido importante que la norma señale que las labores a efectuar se encuentren en relación con el bien jurídico lesionado, pues de este modo se reforzaría el carácter educativo de la sanción, ya que a través de dichas actividades el adolescente podría comprender mejor las consecuencias negativas de la acción ilícita que cometió.

Cabe agregar, que García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal, informa que la duración de esta sanción oscila entre las ocho (08) y treinta y seis (36) jornadas. Cada jornada se cumplirá periódicamente

en un lapso de 06 horas semanales como máximo. En cuanto a los días debe ejecutarse la prestación de los servicios, existen dos opciones: a) la regla es que deberá realizarse entre los días sábados, domingos o feriados, esto para que no sea incompatible con el horario escolar o laboral del adolescente, pues dichas actividades no deben perjudicar su salud, su asistencia regular a un centro educativo o de trabajo o b) excepcionalmente, cuando las circunstancias particulares del adolescente lo exijan, se puede solicitar a la entidad pública o privada donde el adolescente desempeña sus labores-por intermedio del juez- que aquél sea autorizado para prestar los servicios durante días hábiles semanales, computándose la jornada correspondiente.

Asimismo, refiere que la supervisión estará a cargo de personal técnico de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial. Se puede desarrollar dichas labores en asilos, centros educativos, Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales, Municipalidades, Parques, escuelas y otros establecimientos similares; estas unidades receptoras deben informar al juez sobre la evolución del adolescente infractor cada dos meses o cuando se les requiera.

En ese mismo sentido, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que la modificatoria guarda silencio respecto si resulta necesario el consentimiento previo del adolescente para la aplicación de la medida. Contrariamente, el artículo 73 del sistema de responsabilidad Juvenil de Colombia, Plantea la Opinión del menor de edad como requisito esencial para aplicar la medida; también el artículo 7 numeral 1) de la ley orgánica 5/2000 de España, establece que “la persona sometida a ésta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad (...)”.

De la misma manera, sostiene que es adecuado establecer como requisito el consentimiento del menor de edad, pues la prestación de servicios a la comunidad que no cuenta con el aval del sentenciado, no alcanzaría objetivos para los que se ordenan. No hay que olvidar que es una medida generalmente destinada a favorecer a una población que requiere de atenciones y cuidados especiales, las áreas donde intervendrán son entidades

públicas o asistenciales donde se necesita un mínimo de disposición para evitar que terceros resulten perjudicados. Por lo que esta sanción se aplica siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sean sancionado en el Código Penal o Leyes especiales, con pena privativa de Libertad no mayor de tres (03) años.

De otro lado, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que el objetivo de la medida es básicamente sensibilizar emocionalmente al adolescente, hasta el punto que pueda comprender que está realizando una labor útil a la sociedad. Si dicha medida se aplica de manera coercitiva, estaría revestida de arbitrariedad e inmediatamente cambiaría el significado para el adolescente, quien lo interpretaría como una especie de trabajo forzado.

Por otro lado, manifiesta que la Resolución Administrativa Nro. 085-2010-CE-PJ, del 02 de marzo del 2010, se aprobó el reglamento de la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad donde se destaca los siguientes aspectos:

- Impuesta la sanción, el juez deberá remitir al equipo técnico (conformado por un psicólogo y trabajador social) el oficio respectivo, acompañando copia certificada de la sentencia, esto a efectos que se forme el expediente matriz del adolescente sentenciado.
- El equipo técnico remitirá a la institución en la cual el adolescente te cumplirá la medida socioeducativa, una carta de presentación y en coordinación con la entidad responsable establecerá el horario y las actividades que el menor deberá desarrollar, las cuáles ahora no pueden exceder de 06 horas semanales debidamente distribuidas para evitar algún perjuicio a sus estudios o trabajo, no debiendo generar ningún tipo de pago como contraprestación por la labor.
- El control de permanencia del adolescente en la institución designada será efectuado directamente por ésta, registrando la hora de ingreso y salida mediante una ficha de control. Se agrega que esta sanción socioeducativa podrá cumplirse en entidades públicas o asistenciales (hospitales, parroquias, escuelas, municipios, etc.).

- El incumplimiento de la medida socioeducativa deberá ser informada oportunamente al juez competente para que adopte las acciones que correspondan.
- Entre los derechos del sentenciado se encuentran: contar con las condiciones y medios adecuados para el desempeño de la prestación de servicios a la comunidad; la cautela de su integridad física y mental dentro de la institución donde presta servicios; no variar el lugar donde el adolescente presta servicios, sin la debida coordinación con el equipo técnico; obtener permisos por razones de enfermedad y/o particular, etcétera.
- Se establece como deberes del infractor: cumplir con responsabilidad, honestidad, dedicación y eficiencia su labor; concurrir puntualmente a la prestación de servicios y registrar personalmente su ingreso y salida, mediante los medios que para tal efecto, ponga a su alcance la institución donde presta servicios; utilizar, conservar y velar por la seguridad de los enseres, equipos y útiles de trabajo que le hayan asignado, para el desarrollo de sus labores; acatar las instrucciones y medidas de seguridad que se le impartan durante su permanencia en las instalaciones de la institución; entre otros.

d) Prestación Directa a la Víctima

Según lo señalado por García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 161-162), sostiene que el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 231-D, indica que esta sanción consiste en la prestación de un servicio por parte del adolescente infractor a favor de la víctima, esto con la finalidad de resarcir el daño ocasionado con el hecho ilícito. Conforme a esta norma los adolescente declarados responsables pueden ser condenados a resarcir el daño que ocasiono a la víctima con el hecho punible; sin embargo, esta modalidad no debe entenderse como una acción civil accesoria que alcanza solidariamente a los padres, sino como una sanción pura y simple en contra del adolescente, por eso es conveniente que cuando la reparación se traduzca en un entrega de dinero o se trate de la restitución de un bien de similar naturaleza o valor, se debe hacer énfasis en que el dinero u objeto debe provenir del esfuerzo del adolescente, pues lo

ideal es que no se provoque un traslado de la responsabilidad personal del adolescente hacia sus padres o representantes.

La norma antes citada puntualiza los siguientes aspectos:

- Para su aplicación se requiere que la víctima y el adolescente lleguen a un acuerdo, el mismo que deberá ser aprobado por el juez, a quién le corresponde evaluar en la mejor forma posible el cumplimiento de la sanción.
- Corresponde su aplicación siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o Leyes especiales, con Pena Privativa de Libertad no mayor de tres (03) años.
- Los servicios asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del adolescente, prohibiéndose todo tipo de trato inhumano o degradante hacia su persona.
- Los servicios no remunerados deberán cumplirse, salvo acuerdo en contrario, entre los días sábados, domingos y feriados, sin perjudicar la salud, escolaridad ni trabajo del adolescente, durante el periodo que el juez determine, atendiendo a la magnitud del daño ocasionado, pero no podrá exceder las treinta y seis (36) jornadas.
- El acuerdo entre víctima y adolescente puede consistir en que la reparación del daño se realice a través de la restitución de un bien de similar valor, o en la entrega de una suma de dinero que le juez fijará, en este caso el monto que no deberá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios por el hecho ilícito.
- La imposición de esta sanción excluye el pago de la reparación civil, salvo acuerdo contrario entre las partes.

De igual manera, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), arguye que al dictar la sentencia el juzgador tomando en cuenta el acuerdo entre víctima y adolescente, deberá precisar los siguientes aspectos: a) la forma como se reparará el daño (a través de una prestación de hacer, la entrega de dinero o mediante la restitución de un bien de similar naturaleza); b) lugar donde se debe cumplir la sanción y c) los días y horario que el adolescente ejecutará los servicios, de ser el caso.

En ese orden de ideas, aduce que el artículo 231-D del Código de los Niños y Adolescentes está inspirado en el artículo 127° de la Ley Penal Juvenil de Costa Rica, en cuyo texto se establece:

“La reparación de los daños a la víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el menor de edad en favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño causado por el delito. Para repararlo, se requerirá el consentimiento de la víctima y del menor de edad; además, la aprobación del juez.

Finalmente, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), determina que tanto la víctima y el menor de edad que lleguen a un acuerdo, la pena podrá sustituirse por una suma de dinero que el juez fijará, la cual no podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho. La sanción se considerará cumplida cuando el juez determine que el daño ha sido reparado en la mejor forma posible”

1.4.4.2 Mandatos y Prohibiciones

Según García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 163-165), manifiesta que el artículo 232° CNA, los mandatos y prohibiciones son reglas de conducta impuestas por el juez con el objeto de regular el desarrollo social del adolescente, así como para promover su formación. Con este tipo de medidas se busca reducir al máximo la intervención del sistema penal, mediante sanciones de ejecución ambulatoria, que a la vez tienen la positiva consecuencia de que en muchos casos el adolescente no será sustraído de la supervisión de sus padres o responsables.

Posteriormente, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), aduce que esta sanción es como una forma de protección al adolescente infractor, pues tienen por finalidad impedir o evitar que continúe en contacto con factores que se entienden contribuyen al incremento de su conducta si fuera el caso, o a la inserción de

programas conducentes a su rehabilitación cuando estuviera expuesto a sustancias que produzcan adicción.

Entre los mandatos y prohibiciones se puede establecer lo siguiente:

- Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual: consiste en prohibir al adolescente residir en un lugar determinado, cuando se compruebe que el ambiente del lugar en que se desenvuelve resulta perjudicial para su sano desarrollo.
- No frecuentar determinadas personas: consiste en ordenar al adolescente abstenerse de frecuentar a determinadas personas, las cuales están contribuyendo a que el adolescente lleve una forma de vida delictiva. El juzgador debe indicar, en forma clara y precisa, cuáles personas debe el adolescente abandonar en su trato o en su convivencia, durante el tiempo de vigencia de la sanción. Cuando la prohibición de relacionarse con determinada persona se refiera a un miembro del núcleo familiar del adolescente o a cualquier otra persona que resida con él, deberá esta sanción combinarse con la prohibición antes comentada.
- No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u otros lugares señalados por el juez: esta sanción consiste en ordenar al adolescente no asistir a ciertos lugares o establecimientos que resulten inconvenientes para su sano desarrollo. El juzgador a imponer esta sanción deberá indicar, en forma clara y precisa, cuales lugares debe el adolescente dejar de visitar o frecuentar. Los funcionarios de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial en cargados del seguimiento de esta sanción se informarán, sea con el propietario del establecimiento, con los familiares del adolescente o cualquier otra persona que les merezca credibilidad, sobre el cumplimiento de esta sanción, todo lo cual informarán al juzgador.
- No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa: se establece la obligación para el adolescente respecto a solicitar autorización del juzgador y esperar su asentimiento, previamente a salir del lugar de su residencia.

- Matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, de acuerdo a las condiciones y requisitos que se establezcan en el reglamento, en congruencia con lo establecido en la ley general de educación: consiste en ordenar al adolescente ingresar y permanecer en algún centro de estudios, sea éste de educación formal o bien programas que combinen aspecto educativos, vocacionales, deportivos, terapéuticos. El juez al imponer esta sanción deberá indicar el centro educativo formal al que el adolescente debe ingresar, o el tipo alternativo de programa educativo que debe seguir. En todo caso, se preferirán aquellos centros educativos que se encuentren cerca del medio familiar y social de adolescente.
- Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea posible su ejecución y se encuentre dentro de los marcos legales: Esta sanción consiste en ordenar al adolescente sancionado ubicarse y mantenerse en un empleo acorde con sus características y capacidades. Lo anterior, con el objetivo que el trabajo desarrolle en él actitudes positivas de convivencia social, aumento de su productividad y autoestima, para estos efectos, deberá contarse con una lista de empresas públicas o privadas interesadas en emplear al adolescente, sancionados con esta pena. El empleador deberá no divulgar la condición de condenado del adolescente y no podrá discriminarlo cuando se encuentren en situación semejantes con otros trabajadores.
- No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas: Esta sanción consiste en prohibir al adolescente consumir, durante el tiempo de ejecución de la sanción, este tipo de bebidas o sustancias en cualquier lugar público o privado, debiendo indicarse el tipo de sustancia o droga que debe dejar de consumir. Los funcionarios de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial elaborarán un plan para la ejecución de esta sanción, en el que se establecerá la asistencia a cursos, seminarios o programas que induzcan al adolescente a eliminar el consumo y adicción de este tipo de sustancias o drogas.
- Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento des-adictivo: Consiste en ordenar al adolescente participar en un programa, público o privado, que lo conduzca a eliminar la dependencia de

drogas o cualquier otro tipo de sustancias que provoquen adicción. Los funcionarios de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles al momento de la elaboración del plan individual de ejecución de esta sanción considerarán, entre otros elementos: 1) un diagnóstico previo que permita establecer el tipo y grado de dependencia a las drogas; 2) la relación entre esta dependencia y la comisión de delitos; 3) anteriores programas de desintoxicación del adolescente; 4) la convivencia de mantener los vínculos familiares; 5) las condiciones económicas. En todo caso, se consultará al adolescente, quien en todo momento conserva sus derechos fundamentales durante el internamiento en el centro de desintoxicación.

Asimismo, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que la duración máxima es de dos (02) años, puede imponerse de forma autónoma o accesoria de otra sanción, cuando las circunstancias de la comisión del hecho punible y en atención a las condiciones personales del adolescente sea necesario hacer seguimiento de sus actividades con la finalidad de ayudarlo a superar los factores que determinan la infracción cometida. De manera que en el supuesto que le adolescente incumpliera alguna de las reglas impuestas, el juez puede de oficio o a petición de las partes, modificar la sanción impuesta.

1.4.4.3. Sanciones Privativas de Libertad

a) Internación Domiciliaria

Según García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016, págs. 166-167), sostiene que este tipo de sanción se encuentra regulada en el artículo 233° CNA-, la misma procura limitar la libertad de tránsito del adolescente infractor manteniéndolo en su domicilio habitual, rodeado de su medio familiar. Tal medida impone obligaciones a cargo del adolescente sancionado y de sus responsables. Esta característica entraña un alto grado de compromiso y participación activa de los miembros del grupo familiar, que garantice la efectividad de la sanción impuesta.

Cabe mencionar, que García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), refiere que cuando dicha medida socioeducativa no se pueda cumplir en el domicilio habitual del adolescente, sea por razones de inconveniencia o imposibilidad, se ejecutará en el domicilio de cualquier otro familiar que se encuentre dispuesto a coadyuvar a que se cumplan los fines de la sanción. En caso que tampoco exista algún familiar que coadyuve al cumplimiento de la sanción, se puede ordenar la internación del adolescente en una entidad privada, que se ocupe de su cuidado y garantice alcanzar los objetivos de la sanción, para cuyo efecto dicha entidad deberá manifestar su aceptación. La norma hace énfasis en que el responsable de cuidar al adolescente debe ser una persona de comprobada responsabilidad y solvencia moral, comprometida a realizar los esfuerzos necesarios para que cumpla el propósito de la sanción.

Para ilustrar esto, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), refiere que la internación domiciliaria no debe afectar la salud del adolescente, tampoco debe imposibilitar que concurra a su centro de laboral o educativo, esto implica que el juez debe facultar al menor de edad sentenciado para egresar del domicilio o entidad donde se ejecuta la sanción para asistir a la institución educativa donde cursa estudios o a su centro de labores. Para tal efecto, en la sentencia el juzgador deberá establecer los parámetros de desplazamiento, indicando el periodo de tiempo y horarios, teniendo como referencia el domicilio señalado.

De manera que puede apreciarse, que García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), aduce que la aplicación de esta medida procede siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor de tres (03) o no mayor de cuatro (04) años, según el tipo penal.

Asimismo, refiere que tratándose de una intervención domiciliaria la duración máxima no puede exceder de un (01) año. Durante el tiempo de ejecución, el adolescente deberá participar obligatoriamente de programas de intervención diferenciados, de enfoque

formativo-educativo, que orientan y controlan sus actividades. La cabal ejecución de la sanción es supervisada por la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial o la entidad que haga sus veces, a través de un trabajador social designado para el caso concreto.

En igual forma, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), agrega que esta sanción resulta de difícil aplicación en la práctica dado que existe un elevado índice de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, presentan problemas familiares traducidos en malos tratos, falta de supervisión, ausencia de comunicación o carencias afectivas. Esto conllevará a que rara vez se encuentre un entorno familiar adecuado y dispuesto a que coadyuvar a que se cumpla a cabalidad los fines de la sanción, mucho menos se encontrara la disposición del grupo familiar para costear la internación del adolescente en una entidad privada, pues en su mayoría provienen de hogares de condiciones socio económicas poco favorables.

En ese sentido, el artículo 233° del CNA, se encuentra inspirado en el artículo 129° de la Ley Penal Juvenil de Costa Rica, que establece los siguientes:

“El internamiento domiciliario es el arresto del menor de edad en su casa de habitación, con su familia. De no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento en una vivienda o ente privados, de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de cuidar al menor de edad. En este último caso, deberá contarse con su consentimiento.

El internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Un trabajador social del Departamento de menores de edad de la Dirección de Adaptación Social supervisará el cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será mayor de un año”.

b) Libertad Restringida

Con respecto a la libertad restringida, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que según el artículo 234° del CNA- es una sanción privativa de libertad en medio libre, que se ejecuta a través de la asistencia diaria y obligatoria del menor de edad sentenciado al servicio de orientación al adolescente o la que haga sus veces, o en institución es públicas o privadas con fines asistenciales o sociales, para participar en programas de intervención diferenciados, sin discriminación de género, de enfoque formativo-educativo, que orientan y controlan sus actividades, cuya duración es no menor de seis meses ni mayor de un año.

Asimismo, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), refiere que esta sanción se aplica, cuando el hecho punible se encuentra tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o en leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor de cuatro años, o cuando no obstante tener una pena privativa de libertad no menor de seis años, no se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas.

De manera que, advierte que la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial o la que haga sus veces, o las instituciones públicas o privadas, según sea el caso, están obligadas a informar sobre la evaluación, seguimiento y resultados de los programas de intervención diferenciados cada tres meses.

c) Internación

Que respecto a la medida de internación, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que el artículo 235 CNA establece que la internación es una sanción privativa de libertad de carácter excepcional y se aplica como último recurso. Este enunciado se encuentra en concordancia con múltiples normas internacionales que también garantizan la excepcionalidad de la privación de la Libertad en el caso de menores

de edad, tales como el artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño³⁷, las reglas 13 y 19 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”)³⁸ la regla 6 de las Reglas Mínimas sobre medidas no privativas de la Libertad (“reglas de Tokio”)³⁹ y la regla 17 de las Reglas Mínimas para la protección de los Menores Privados de Libertad (“Reglas de la Habana”).

Ahora bien, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), agrega también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 ha señalado al respecto que: “en consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, en el internamiento debe ser la última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios de la comunidad, la obligación de reparar el daño y libertad asistida”.

Sobre la base de lo mencionado, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), sostiene que el Tribunal Constitucional también ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de libertad en Sistema Penal Juvenil. Así, en Expediente N° 03247-2008 PHC/TC señala que: “el artículo 37° de la Convención sobre los Derechos del Niño determina el marco general de un sistema de responsabilidad penal juvenil al establecer que la privación de la libertad del niño es posible como una medida de último recurso, pero en establecimientos especiales separados del régimen para los adultos y por el menor tiempo posible, tomando en cuenta sus necesidades especiales”.

³⁷ El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño determina el marco general de un sistema de responsabilidad penal juvenil al establecer que la privación de la libertad del niño sólo es posible como una medida de último recurso.

³⁸ “... 13.1 Sólo se aplicará la prisión Preventiva como último recurso (...)” “19.1 el confinamiento de menores en establecimiento penitenciarios se utiliza en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible”.

³⁹ “6.1 En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso (...)”.

De manera, que García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), también refiere que el Código de Niños y Adolescentes dispone que esta medida proceda siempre que se cumpla cualquiera de los siguientes presupuestos:

- Cuando el hecho punible imputado al adolescente se encuentre tipificado en el Código Penal o Leyes especiales como delito doloso, cuya pena no sea mayor de seis años de privación de libertad, siempre que se hubiera puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de la víctima;
- Por la reiteración en la perpetración en otras infracciones graves en un lapso que no exceda de dos años;
- Por incumplimiento injustificado y reiterado de alguna sanción limitativa de derechos (mandatos y prohibiciones) o sanciones privativas de libertad, distintas a la internación que le haya sido impuesta, o
- Cuando según el informe preliminar del equipo multidisciplinario, el adolescente infractor sea considerado de alta de peligrosidad, en atención a sus características, personalidad, perfil y demás circunstancias y rasgos particulares.

Finalmente, García Huayama, Juan Carlos en el tema Las Sanciones para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal (Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, 2016), concluye que no procede aplicar esta sanción cuando el hecho punible se encuentre sancionado en el Código Penal o Leyes especiales, con penas distintas a la privativa de libertad.

1.5 MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES ACUSADOS DE INFRINGIR LEYES PENALES

1.5.1 Medidas Cautelares No Privativas de la Libertad

Respecto de las medidas a aplicarse a los adolescentes, La Comisión de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoría Sobre los derechos de la Niñez,

2011), refiere que el principio de que los niños sólo deben ser privados de su libertad como último recurso es especialmente importante durante la etapa previa al proceso ante la justicia juvenil, puesto que debe presumirse su inocencia hasta que se haya demostrado lo contrario.

En ese orden de ideas, La Comisión de Derechos Humanos ciertamente, ha informado que la Convención Americana, en su artículo 7.5, prevé que la libertad de las personas pueda estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Pero en todos los casos, y en especial cuando se trata de personas menores de edad, la privación de libertad como medida preventiva debe ser utilizada únicamente como último recurso.

En ese sentido, la regla 13.2 de las Reglas de Beijing requiere que la prisión preventiva sólo se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible:

Según lo manifestado, la Comisión de Derechos Humanos, en casos excepcionales se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa.

No obstante, La Comisión de Derechos Humanos, arguye que la Comisión advierte que estos catálogos de medidas cautelares no privativas de libertad establecidas en las distintas legislaciones no siempre se aplican en la práctica, y con frecuencia las autoridades recurren a la prisión preventiva como primera medida frente a los niños acusados de infringir leyes penales. La CIDH insta a los Estados a garantizar el estricto cumplimiento del principio de excepcionalidad de la privación de libertad desde el inicio del proceso de justicia juvenil, así como también a fortalecer sus esfuerzos para poner en funcionamiento medidas cautelares no privativas de la libertad respetuosas del principio de inocencia.

1.5.2 Medidas Cautelares Privativas de la Libertad

Respecto a este punto, La Comisión de Derechos Humanos (La Comisión de Derechos Humanos, Relatoria Sobre los derechos de la Niñez, 2011), sostiene que existe un uso generalizado de las medidas privativas de libertad para precautelar la presencia de los

niños a lo largo del proceso que se inicia en su contra cuando han sido acusados de infringir leyes penales. Cabe aclarar que la prisión preventiva es la medida cautelar privativa de libertad que con más frecuencia se utiliza, pero también se consideran medidas privativas de libertad todas las formas de detención, institucionalización o custodia mediante las cuales se encierra en instituciones públicas o privadas a los niños acusados de infringir leyes penales, disponiendo de su libertad ambulatoria mientras dura el proceso en su contra.

Cabe agregar, La Comisión de Derechos Humanos, afirma que independientemente de cómo los distintos Estados denominen a las medidas cautelares preventivas de libertad impuestas a niños acusados de infringir las leyes penales, para ser legítimas estas medidas deben cumplir con ciertos principios mínimos aplicables para todas las personas privadas de su libertad sin que exista una sentencia de por medio. Adicionalmente a estos principios mínimos generales, la prisión preventiva de niños menores de 18 años debe cumplir con requisitos especiales para precautar su derecho a la protección especial en virtud de su edad, según lo establece el artículo 19 de la Convención Americana y el artículo VII de la Declaración Americana.

De manera que para La Comisión de Derechos Humanos, ser legítima, toda medida cautelar privativa de la libertad que se aplique a un niño acusado de infringir leyes penales debe cumplir con el principio de excepcionalidad, es decir, debe ser aplicada cuando el niño represente un peligro inmediato y real para los demás (Unidas I. d., 2006, agosto, 29, pág. párr. 112); como último recurso cuando no exista otra alternativa; adicionalmente, debe ser aplicada durante el plazo más breve posible y debe ser sometida a una revisión periódica; y finalmente, debe garantizar a los niños privados de libertad todos sus derechos y protecciones acordes a su edad, sexo y características individuales, y en particular deberá garantizarse su derecho a estar separados de los adultos así como también de los niños que hayan recibido una condena.

De esta forma, la Comisión recomienda a los Estados garantizar que sus sistemas de justicia juvenil aseguren la vigencia del principio de excepcionalidad de la privación de libertad estableciendo límites tanto en la determinación de la prisión preventiva como en cuanto a su duración. En ese sentido, la CIDH insta a los Estados a disponer métodos cautelares alternativos a la privación de la libertad para asegurar la comparecencia de los niños imputados y a cumplir con su obligación de sustituir estas medidas por otras menos

lesivas a medida que las circunstancias del caso lo ameriten. Asimismo, la Comisión destaca que la ejecución de la prisión preventiva debe ajustarse a los estándares mínimos para toda persona privada cautelarmente de su libertad y garantizar de manera adicional los derechos de los niños a una protección especial.

Con miras a guiar a los Estados en el cumplimiento de estas recomendaciones, a continuación, la Comisión analizará con más detenimiento cada uno de los requisitos que debe cumplir la prisión preventiva en el caso de niños acusados de infringir las leyes penales.

1.5.2.1 Excepcionalidad de la Prisión Preventiva

Respecto de este punto, La Comisión de Derechos Humanos, califica que el carácter excepcional de la prisión preventiva en el caso de personas menores de edad se encuentra reconocido en múltiples normas internacionales, incluyendo el artículo 37.b. de la CDN, la regla 13 de las Reglas de Beijing, la regla 6 de las Reglas de Tokio y la regla 17 de las Reglas de La Habana. La citada regla 13 de las Reglas de Beijing establece que, respecto de los menores de edad:

“... 13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso...”

“13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa...”

También la Corte Interamericana ha señalado con claridad que la aplicación de la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional, estar limitada por la presunción de inocencia, así como por los principios de (idoneidad), necesidad y proporcionalidad⁴⁰.

La CIDH ha expresado que:

⁴⁰ Cfr. Corte IDH, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77; Caso “Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228.

Con respecto a la detención preventiva, la Comisión resalta que la jurisprudencia internacional reiterada sobre su aplicación en el sentido de entenderla como una medida excepcional que debe responder exclusivamente a fines procesales, adquiere especial relevancia cuando se trata de niños y niñas que por su condición se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad⁴¹.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sido enfática al señalar que: en el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas medidas pueden ser, *INTER ALIA*, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones [...]⁴².

Para estar justificada, La Comisión de Derechos Humanos, arguye que la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar debe estar destinada a asegurar determinadas finalidades procesales legítimas. Al respecto, el artículo 7.5 de la Convención Americana prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. Más aún, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas, de tal forma que la mera alegación de este riesgo no satisface este requisito.

En ese sentido, sostiene que para una medida de prisión preventiva debe tenerse en cuenta también el principio de proporcionalidad de la pena, de forma tal que no se podrá aplicar esta medida cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad. Pero, además, la Corte ha sido categórica al afirmar que en ningún caso la

⁴¹CIDH, Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en

Bolivia, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 34, 28 junio 2007, párr. 393

⁴² Corte IDH. Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 130.

aplicación de una medida cautelar debe estar determinada por el tipo de delito que se impute al individuo⁴³. En ese sentido, excluir a ciertas infracciones a las leyes penales de los límites para la aplicación de la prisión preventiva desvirtuaría la naturaleza cautelar de esta medida y la convertiría en una verdadera pena anticipada.

Asimismo, la Comisión nota que la normativa internacional aplicable establece que los niños a quienes se les imponga una medida de prisión preventiva deben tener la oportunidad de cuestionar la justificación de esta medida con la asistencia de su defensor⁴⁴, y el plazo para la resolución de este recurso debe ser menor al plazo máximo de la prisión preventiva. Además, deben respetarse las garantías del debido proceso, asegurarse el derecho a la defensa y la participación de los niños en el proceso en audiencia.

Pese a la claridad de estas normas, la información recibida por la Comisión da cuenta de que existe en el continente una utilización generalizada de la prisión preventiva contra niños acusados de infringir las leyes penales. Por ejemplo, se informó a la CIDH que en Perú en el 2005 el 33% de los adolescentes privados de libertad en los Centros Juveniles se encontraba esperando sentencia, y tres años después, en el 2008, el número de niños sin sentencia privados de su libertad sumaba el 70% de los detenidos⁴⁵. Según otra fuente de información en el 2008 se registraban 2628 niños privados de libertad de los cuales 1238, es decir poco menos de la mitad se encontraban privados de su libertad sin sentencia⁴⁶.

A la luz de lo anterior, la CIDH recomienda a los Estados incorporar medidas legislativas que establezcan claramente los límites a la utilización de la prisión preventiva descritos en el presente apartado, para que no queden a discreción de los jueces o autoridades administrativas encargados de los casos de supuestas infracciones a las leyes penales cometidos por niños menores de 18 años.

⁴³ Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 81.

⁴⁴ Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37, inc. d; Reglas de La Habana, regla 18; Reglas de Tokio, regla 6.3.

⁴⁵ Justicia Juvenil en Cifras, en: Justicia para Crecer, Revista sobre Justicia Juvenil Restaurativa, N° 1, Terre des hommes Lausanne y Encuentros, Casa de la Juventud, diciembre 2005 - febrero 2006, Fuente: Poder Judicial, Gerencia de los Centros Juveniles.

⁴⁶ Rodríguez Dueñas, Juan José, Indicadores de Justicia de Menores 2008, de 11 a 17 años, Población de los Centros Juveniles 2008, 24/02/2009. Documento remitido a la CIDH el 4 marzo de 2009.

1.5.2.2 Duración de la Prisión Preventiva

Atendiendo a todo lo mencionado, La Comisión de Derechos Humanos, sostiene que el artículo 7.5 de la Convención Americana establece que toda persona que haya sido detenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Al respecto, la Corte ha advertido que la duración excesiva de la prisión preventiva origina el riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo a la medida cautelar en una verdadera pena anticipada⁴⁷.

Agrega además que la extensión desmedida de la duración de las medidas preventivas de la libertad ha sido condenada enfáticamente por los órganos del sistema interamericano. La Corte se ha referido a la aplicación de la prisión preventiva en casos de personas menores de edad señalando que:

[...] La prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales de derecho universalmente reconocidos⁴⁸.

Asimismo, sostiene que La Corte añadió que:

[...] cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en el caso de niños, ésta debe aplicarse siempre durante el plazo más breve posible, tal como lo establece el artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño [...] ⁴⁹.

⁴⁷ Véase Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69; Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 75; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 180; y Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.

⁴⁸ Corte IDH. *Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 229.

⁴⁹ Corte IDH. *Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 231

La regla 13.1 de las Reglas de Beijing también dispone que respecto de las personas menores de edad sólo se aplique la prisión preventiva durante el plazo más breve posible.

La Comisión observa que la determinación legal de un plazo máximo expositiva cuando éste es razonablemente breve. Al vencimiento de este plazo, no debería ser posible conceder prórrogas y el niño debería ser puesto en libertad en forma inmediata⁵⁰. Al mismo tiempo, la Comisión considera que la legislación debe contemplar sanciones y consecuencias para los operadores que incumplan estos plazos.

La Comisión observa que la privación de la libertad como medida preventiva en estos casos debiera ser la más breve posible.

1.5.2.3 Revisión de la Prisión Preventiva

Por otro lado, La Comisión de Derechos Humanos, menciona que la Convención Americana es clara al señalar en su artículo 7.5 la obligación de los Estados de llevar, sin demora, a toda persona detenida ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Si la persona es sometida a una medida de prisión preventiva, los Estados también están obligados a asegurar el carácter temporal de dicha medida, estableciendo un mecanismo de revisión periódica que permita resolver su cese o sustitución, cuando se constate un cambio de circunstancias que incida en los fundamentos por los que fue establecida.

Además, La Comisión de Derechos Humanos sostiene que el Comité de los Derechos del Niño también ha recomendado a los Estados Partes que adopten disposiciones jurídicas estrictas para garantizar que sea objeto de examen periódico la legalidad de la prisión preventiva, preferentemente cada dos semanas. Según este organismo, cuando no sea posible la libertad provisional del menor, por ejemplo mediante la aplicación de medidas

⁵⁰ La regla 17 de las Reglas de La Habana dispone que “cuando...se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible”.

alternativas, deberá presentarse una imputación formal de las presuntas infracciones a las leyes penales y poner al menor a disposición de un tribunal u otra autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en el plazo de 30 días a partir del ingreso del menor en prisión preventiva⁵¹.

La Comisión reitera que, cuando se prive de libertad a un adolescente acusado de infringir leyes penales, el juzgador deberá revisar, periódicamente, si los motivos que originariamente fundaron la prisión preventiva aún subsisten⁵². En su decisión, la autoridad deberá expresar las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir, fundamentalmente, que persiste el peligro de fuga o enunciar las medidas probatorias que resten cumplir y su imposibilidad de producirlas con el niño imputado en libertad.

1.5.2.4 Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sometidos a Prisión Preventiva

Que, respecto de este principio, La Comisión de Derechos Humanos sostiene que toda persona menor de edad que sea sometida a prisión preventiva debe gozar de todos los derechos aplicables a las personas privadas de su libertad, así como también de todas las garantías y protecciones específicas aplicables en virtud de su edad. Al respecto, la regla 13 de las Reglas de Beijing señala que:

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y reclusos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos.

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.

⁵¹ Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 83.

⁵² Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 77. En el mismo sentido Reglas de La Habana, regla 79.

A pesar de lo anterior, la CIDH ha recibido información de la cual se desprende que muchos Estados de la región no cuentan con establecimientos específicos destinados a alojar a niños privados de su libertad preventivamente, por lo que es común que estos niños permanezcan en centros junto a niños que ya han sido condenados o, lo que es peor, junto a adultos. Asimismo, la información recibida por la Comisión da cuenta de que en algunos Estados las condiciones de detención a las que se somete a niños que aún no han sido sentenciados son incluso más gravosas que para aquéllos que ya han sido responsabilizados por infringir leyes penales, vulnerando así el principio de inocencia.

Asimismo, la Comisión considera oportuno recordar que el derecho de los niños bajo prisión preventiva a ser ubicados en lugares que mantengan contacto con su familia y aseguren la separación respecto de las personas adultas, así como de niños que ya hayan sido condenados está establecido en una serie de instrumentos internacionales sobre la materia, incluyendo el artículo 5 de la Convención Americana, los artículos 10 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte se ha pronunciado de manera específica sobre este derecho, señalando que la falta de separación coadyuva al clima de inseguridad, tensión y violencia en los centros de privación de libertad de las personas menores de edad⁵³.

La Comisión reitera que los establecimientos en los cuales los niños sean sometidos a prisión preventiva deben asegurar el respeto de sus derechos humanos y aplicar programas respetuosos del principio de inocencia. Además, deben asegurarse todos los derechos que les corresponden en tanto niños privados de libertad, tales como el contacto con su familia, el acceso al derecho a la educación, recreación, salud, prácticas religiosas, entre otros.

1.6 LOS ADOLESCENTES QUE SON DECLARADOS RESPONSABLES DE INFRINGIR LEYES PENALES Y LAS MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD

1.6.1 Límites a la privación de libertad

⁵³ Corte IDH. *Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 169.

Los criterios expuestos por la CIDH en párrafos anteriores con respecto a los principios que deben respetarse en la aplicación de medidas cautelares privativas de libertad son también aplicables a las medidas de privación de libertad cuando éstas se imponen como sanción a un niño cuya responsabilidad al infringir las leyes penales haya sido comprobada.

Así, para ser legítima, toda sanción privativa de la libertad que se aplique a un niño responsable de infringir una ley penal debe cumplir con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la pena, debe ser aplicada durante el plazo más breve posible y debe garantizar a los niños privados de su libertad de todos sus derechos y protecciones acordes a su edad, sexo y características individuales. La Comisión insta a los Estados a respetar de manera irrestricta estos principios y los derechos de los niños cuando son privados de libertad por haber infringido una ley penal, debiendo los sistemas de justicia ser integrales, restitutivos y enfocados a la rehabilitación y reintegración en la comunidad de los niños, niñas y adolescentes infractores de las leyes penales⁵⁴.

1.6.1.1 La Naturaleza de Excepcionalidad de las medidas de privación de libertad

Que, respecto a la naturaleza de dicha medida, La Comisión de Derechos Humanos, ha manifestado que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37.b establece que: La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

Asimismo, refiere que el principio de excepcionalidad está garantizado también por otras normas internacionales sobre la materia, particularmente la regla 19 de las Reglas de Beijing, y la regla 2 de las Reglas de La Habana.

Por su parte, la CIDH ha señalado que en la aplicación de medidas de privación de libertad de un niño, es preciso considerar que la privación de libertad constituye la última

⁵⁴ Informe del Experto Independiente de Naciones Unidas para el Estudio de la Violencia contra los Niños, 29 de agosto de 2006, A/61/299, párr. 112.

ratio, y por ello es necesario dar preferencia a medidas de otra naturaleza, sin recurrir al sistema judicial, siempre que ello resulte adecuado⁵⁵.

La CIDH también ha manifestado que:

*[...] el derecho internacional de los derechos humanos se dirige a procurar que las penas que imponen graves restricciones de los derechos fundamentales de los menores, sean limitadas únicamente a las infracciones más severas. Por tanto, aun en el caso de infracciones tipificadas, la legislación tutelar del menor debe propender hacia formas de sanción distintas a la reclusión o privación de libertad [...]*⁵⁶.

La CIDH considera oportuno recordar también que el respeto del principio de excepcionalidad de la privación de libertad exige la priorización y la disponibilidad de las sanciones no privativas de libertad⁵⁷.

Más aún, debe tomarse en cuenta que el principio de excepcionalidad sirve no solamente para proteger el derecho de los niños a la libertad, sino también sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como para proteger su derecho a la vida familiar. Sobre este punto, el Comité de los Derechos del Niño, en referencia al artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, ha advertido que “la privación de libertad tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso del niño y dificulta gravemente su reintegración en la sociedad”⁵⁸.

Conforme se mencionó respecto al tema de las medidas alternativas a la privación de libertad, en casi toda la región está previsto que los jueces puedan aplicar dichas medidas

⁵⁵ CIDH, Intervenciones escritas y orales respecto de la Opinión Consultiva 17/02. En Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, pág. 22.

⁵⁶ CIDH, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Admisibilidad y Fondo, Menores detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, párr. 117.

⁵⁷ Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37, inc. b y art. 40, inc. 4; Reglas de Beijing, reglas 5, 17 inc. a) y 19; Reglas de La Habana, reglas 1 y 2; y Reglas de Tokio, regla 3.2.

⁵⁸ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 11.

en vez de optar por la sanción privativa de libertad. No obstante, dichas medidas no se aplican de manera uniforme, y los jueces continúan prefiriendo las sanciones de privación de libertad como medida preferente para adolescentes infractores en contradicción con las normas del derecho internacional. Asimismo, en la aplicación de medidas sustitutivas es común encontrar violaciones al debido proceso y a otros derechos de los niños. La falta de financiamiento adecuado por parte de los Estados de las Américas a los programas que permiten la implementación de medidas alternativas a la prisión constituye uno de los principales obstáculos para la garantía del derecho de los adolescentes infractores a que la prisión sea aplicada únicamente como medida excepcional.

1.6.1.2 Proporcionalidad de las Medidas de Privación de Libertad

En tal sentido, La Comisión de Derechos Humanos ha afirmado que la normativa internacional aplicable exige que la respuesta frente a los niños responsables de infringir las leyes penales respete el principio de proporcionalidad de la pena⁵⁹. Esto significa que debe existir proporcionalidad entre la gravedad del hecho cometido y la reacción punitiva que éste suscita, es decir, a menor entidad del injusto corresponde menor pena y a menor participación del inculcado en la infracción de las leyes penales también corresponde menor pena. Conforme el artículo 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la proporcionalidad de la pena se relaciona con las circunstancias del niño y la infracción, mas no con las necesidades educativas de los niños.

Así, La Comisión de Derechos Humanos, arguye que la sanción de un adolescente infractor debe estar justificada en la proporcionalidad entre la conducta y la lesividad de la infracción respecto de los bienes jurídicos protegidos. Más aún, entre las distintas sanciones

⁵⁹ Hay que distinguir entre el “principio de proporcionalidad de la pena” y el “principio de proporcionalidad” dentro del test para controlar restricciones arbitrarias a que se refiere la Corte IDH. Mientras el primero comúnmente implica justificar la racionalidad de la relación entre la gravedad del delito y la pena aplicada, para la Corte IDH el principio de proporcionalidad como control de restricciones arbitrarias constituye un test de tres pasos para determinar si una restricción puede considerarse “necesaria en una sociedad democrática”. Véase Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.56. Después de revisar la idoneidad y la necesidad de la medida, en la fase de la proporcionalidad se determinan si “el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida”. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 93.

privativas de libertad, debe elegirse aquella que respete el principio de mínima intervención⁶⁰. La regla 5.1 de las Reglas de Beijing establece que:

[...] el sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito [...].

Tanto la Corte Interamericana⁶¹ como el Comité de los Derechos del Niño se han referido a este principio. Particularmente el Comité ha expresado que:

*[...] la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y las necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad, en particular a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no está en armonía con los principios básicos de la justicia de menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención [...]*⁶².

Asimismo, la Comisión sostiene que buena parte de las legislaciones del continente contemplen normas que recojan el principio de proporcionalidad de la pena. A manera de ejemplo, la Ley Penal Juvenil de Costa Rica es muy clara al establecer en su artículo 26 que las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o el delito cometido, así como también al prohibir en su artículo 27 las sanciones indeterminadas.

⁶⁰ Reglas de Tokio, regla 2.6.

⁶¹ Véase Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.

⁶² Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 71.

No obstante, a pesar del amplio reconocimiento legislativo, la Comisión ha recibido información según la cual, en la práctica, varios Estados no respetan este principio al momento de aplicar las penas a niños que infringen leyes penales. De hecho, subsisten todavía en el continente sentencias de duración indeterminada. Así, por ejemplo, la CIDH fue informada de que en Surinam, los tribunales no especifican necesariamente el período de tiempo durante el cual el niño debe permanecer privado de su libertad, sino que por lo general se espera que los niños permanezcan en el centro penitenciario hasta que cumplan 21 años⁶³.

También es común que la respuesta de los sistemas de justicia juvenil se dicte con base en circunstancias personales o familiares del niño infractor distintas de la infracción en sí misma. A manera de ejemplo, se informó a la Comisión que en Brasil los procedimientos seguidos a niños que infringen las leyes penales se caracterizan por su discrecionalidad, de forma tal que las sanciones parecen ser el producto de una conversación amigable entre jueces, promotores y defensores y el sistema da lugar a resultados totalmente diversos respecto de hechos similares⁶⁴.

Asimismo, en contradicción con el principio de proporcionalidad de la pena, así como también con el principio de igualdad y no discriminación, existen numerosos casos en los cuales la respuesta punitiva frente a la conducta de niños infractores es más dura que la respuesta penal frente a la conducta de adultos que han cometido un delito.

La CIDH alienta a los Estados a implementar legislación que permita que la respuesta estatal a la infracción de leyes penales por parte de niños sea siempre proporcionada a las circunstancias en las que ocurrió, a la gravedad de la conducta, a la edad y las necesidades del niño, entre otros criterios.

⁶³ Información obtenida por la CIDH durante entrevistas con funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en Surinam

⁶⁴ Véase Asociación Nacional dos Centros de Defesa da Criança de Adolescente (ANCD), Análisis sobre los directos da criação del adolescente Brasil: relatório preliminar da ANCD, São Paulo, 2009.

1.6.1.3 Duración de las medidas de privación de libertad

Respecto a este punto, es importante mencionar que cuando un Estado, en estricto respeto de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la pena, decida imponer a un niño una medida de privación de libertad por haber infringido una ley penal, debe además asegurar que esa medida tenga un plazo máximo de duración, el que deberá ser razonablemente breve.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37, prohíbe expresamente la determinación de penas capitales y de prisión perpetua sin excarcelación:

[...] No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad [...]

De lo anterior se desprende que la pena capital está prohibida por la CDN. No ocurre lo mismo con la pena de prisión perpetua, la cual no se encuentra prohibida en términos definitivos, sino que puede ser aplicada siempre y cuando exista una posibilidad de excarcelación. En cuanto al alcance de la posibilidad de excarcelación, el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado esta disposición indicando que “la posibilidad de la puesta en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico”⁶⁵.

Por ello, la respuesta estatal a dichas infracciones debe ser distinta de la respuesta frente a infracciones cometidas por adultos, conforme a los objetivos y principios de la justicia juvenil. La Comisión nota con preocupación que, a la luz de estas normas, niños que fueron responsabilizados por infringirlas leyes penales antes de cumplir la mayoría de edad, han sido tratados como adultos y sometidos a penas de prisión perpetua incompatibles con los fines de las sanciones en la justicia juvenil.

La CIDH reitera que las penas excesivamente largas en el caso de personas menores de edad atentan contra el principio de brevedad consagrado en la Convención sobre los

⁶⁵ Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 77.

Derechos del Niño y contra las protecciones especiales a las cuales los Estados se encuentran comprometidos de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana y del artículo VII de la Declaración Americana. Además, este tipo de penas resultan incompatibles con los objetivos de las penas de la justicia juvenil.

La Comisión alienta a los Estados a establecer en sus legislaciones una duración máxima de las penas que pueden imponerse a los niños responsables de infringir las leyes penales, y a garantizar que esa duración sea acorde con la particularidad de los niños en tanto sujetos de desarrollo y reconozca que los efectos negativos de la privación de libertad son aún más evidentes en los niños. Asimismo, la Comisión recomienda a los Estados abolir la pena de muerte y la pena de prisión perpetua para personas menores de edad.

1.7. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPECTO A LA JUSTICIA PENAL JUVENIL

En este apartado, sobre el Internamiento en Adolescentes Infractores penal existen diversas Normas que a nivel Internacional buscan armonizar los procedimientos Jurisdiccionales teniendo como base fundamental las Declaración Universal de los Derechos del Niño promulgado por las Naciones Unidas, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

1.7.1 Constitución Política del Perú 1993

Fue ratificada en el referéndum del 31 de octubre de 1993, y entra en vigencia el 31 de diciembre de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En la Constitución, en el artículo 1º se señala en forma terminante que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

El artículo 2º de la Constitución Política del Perú, prescribe que toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. En el

comentario a estos dos puntos de los artículos ya mencionados, se deja establecido que la vida humana empieza desde el mismo instante de la concepción, de conformidad con la legislación vigente. En el artículo 4, se deja establecido lo siguiente: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.”

1.7.2 Código de los Niños y Adolescentes

. Los cambios en la familia y la aparición de la adolescencia como un nuevo status, potenciaron importantes reformas en la legislación de menores. Una respuesta a nivel legislativo a esta situación, constituye la promulgación en diciembre de 1992 y la puesta en vigencia en junio de 1993, del Código del Niño y el Adolescente. Esta ley, incorpora la Convención por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que significa, la adopción de la doctrina de la Protección Integral en nuestro ordenamiento jurídico en esta materia.

En materia de infracción penal:

- Se establece la diferencia entre niños (desde la concepción hasta los 12 años), quienes pueden ser sujetos de medidas de protección, y los adolescentes (desde los 12 hasta antes de cumplir los 18 años).
- La responsabilidad penal especial solo se aplica al caso del adolescente cuya edad fluctúe entre los 14 y los 18 años, quien si bien es inimputable (no puede ser procesado como un adulto), sí puede ser sometido a un proceso judicial en el cual responderá por la infracción a una norma penal. En caso de comprobarse su responsabilidad se puede aplicarle alguna medida socioeducativa: desde la amonestación hasta la privación de la libertad de seis años como máximo.
- Se establece para el adolescente un conjunto de garantías sustantivas, procesales y de ejecución, las cuales tienen como contenido mínimo lo aplicable para los adultos. Asimismo, existe un conjunto de garantías o derechos específicos, especialmente relacionados con la protección de su identidad e integridad.

- Se crea una judicatura especializada en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que cuentan con el apoyo de una unidad especializada de la PNP.
- Luego de detenido el adolescente, en supuestos idénticos a los del adulto (Artículo 2º, inciso 24 literal f) de la Constitución Política), y puesto a disposición del Ministerio Público, se desarrolla un trámite similar al del adulto, adicionándose la posibilidad de que, en caso de que la infracción penal sea leve, el Fiscal de Familia puede disponer la Remisión de la investigación (Artículo 206º del CNA) e incorporarlo a un Programa de Orientación (para él y su familia), a cargo de una institución pública o privada autorizada y supervisada por el entonces Ministerio de La Mujer y Desarrollo (MIMDES).
- Si el Fiscal denuncia, remite la documentación al Juez de Familia para el inicio del proceso que se puede realizar con el adolescente en libertad (entregándolo a sus padres o responsables) o con internamiento preventivo en un Centro Juvenil.
- Durante el proceso, el adolescente puede solicitar (mediante una terminación anticipada) la Remisión, de modo que se le separe del proceso y se le imponga una medida socioeducativa (Artículo 226º del CNA). Ello se producirá solo en el caso de que la infracción no revista gravedad.
- De ser encontrado responsable, el adolescente puede ser sujeto a cualquiera de las medidas socioeducativas (Artículo 217º del CNA): Amonestación, Prestación de Servicios a la Comunidad, Libertad Asistida, Libertad Restringida e Internación en un establecimiento cerrado⁶⁶
- En el caso del internamiento estipulado en el art 235; que es medida privativa de libertad que no excederá seis (06) años.

⁶⁶ La ejecución de dichas medidas se encuentra a cargo de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, a excepción de la amonestación a cargo del Juez

- En los fundamentos establecidos Art 215° El juez al emitir sentencia tendrá en cuenta:
 - a) La existencia del daño causado;
 - b) La gravedad de los hechos;
 - c) El grado de responsabilidad del adolescente; y
 - d) El informe del Equipo Multidisciplinario y el informe social.

Se analizará la gravedad del hecho investigado, así como el grado de participación del infractor; de otro lado, es imprescindible que se aprecie convenientemente el informe que deberá realizar el Equipo multidisciplinario, toda vez que permitirá conocer exactamente el entorno social en el cual se ha desarrollado el adolescente y si éste tiene alguna alteración en sus factores endógenos o exógenos, es importante en este aspecto, la evaluación psicológica, lo cual establecerá si existe algún elemento de criminalidad psicológica, e igual modo es menester que se verifique el informe social de la célula familiar del menor investigado, a efectos de determinar su condición socio -económica.

Del mismo modo en la Sentencia según el art. 216 se establecerá:

- a) La exposición de los hechos;
- b) Los fundamentos de derecho que considere adecuados a la calificación del acto infractor;
- c) La medida socio - educativa que se imponga, y
- d) La reparación civil.

El contenido de la sentencia, tendrá una parte expositiva, en la cual se detallarán los hechos que han determinado la investigación tutelar, seguidamente se señalará los aspectos que configuren la tipicidad del acto antisocial, con el objeto de establecer la adecuación de la conducta del adolescente al tipo legal preceptuado en el Código Penal; por último se determinará la sanción respectiva, mediante la imposición de la medida socio -educativa correspondiente; la cual tiene por finalidad lograr la reeducación y resocialización del infractor, observándose que la resolución también deberá señalar el monto de la reparación civil con el objeto de resarcir el daño causado, para lo cual la parte agraviada o sus parientes o representantes legales deberán constituirse como parte civil.

1.7.3 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (REGLAS DEBEIJING)

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985 e incluidas en la resolución N° 40/33. Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política social en su conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permite reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, debe reducir al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención. Estas medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito antes del comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la necesidad de aplicar las presentes Reglas.

Las Reglas mínimas se han formulado deliberadamente de manera que sean aplicables en diferentes sistemas jurídicos y, al mismo tiempo, establezcan algunas normas mínimas para el tratamiento de los menores delincuentes con arreglo a cualquier definición de la noción de joven y a cualquier sistema de tratamiento de los menores delincuentes. Las Reglas se aplican siempre con imparcialidad y sin distinción alguna.

La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad puede perder todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.).

Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.

Respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, que en su artículo 17, el mismo que trata sobre Principios Rectores de la Sentencia y la Resolución, en el primer acápite inciso c) establece que “sólo se impondrá la privación de libertad personal en caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”.

1.7.4 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIRECTRICES DE RIAD)

Estas son las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

Las directrices tocan prácticamente todos los ámbitos sociales: los tres principales entornos en el proceso de socialización (familia, escuela, comunidad); los medios de comunicación: la política social; la legislación y administración de la justicia de menores. La prevención general (art.9) debe consistir en “planes generales de prevención en todos los niveles de gobierno” y debe incluir entre otras cosas mecanismos para coordinar los esfuerzos realizados por los organismos gubernamentales y no gubernamentales; supervisión y evaluación continuas; participación comunitaria mediante un amplio abanico de servicios y programas; cooperación interdisciplinaria, participación de los jóvenes en las políticas y procesos de prevención.

Se recalca en varias ocasiones que las políticas de prevención deberían ser ante todo políticas para los jóvenes: “medios educativos o de otras índoles que sirvan de cimiento al desarrollo personal de todos los jóvenes.”

Los “procesos de socialización” se presentan en el capítulo 10: “Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad,

los grupos de jóvenes que se encuentran en situaciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias”.

El amplio alcance de las Directrices de Riad presenta también cierto interés debido a la relación que establece con la Convención de los derechos del niño de las Naciones Unidas (1989), cuyo alcance es, también en este caso, una de las principales características. El objetivo de ambos instrumentos es mejorar la situación de los niños en general. Además, las directrices insisten también en la importancia de dichas medidas para la prevención de la delincuencia.

Respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, en su anexo, tema V, que habla de la Política Social, en el acápite 46, se señala que “Sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los propios intereses del joven.”

1.7.5 Convención de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad y reconoce sus derechos y asistencia especiales para el logro de su bienestar. En toda acción o medida que se tome en relación a ellos, se considerará el interés superior del niño, debiendo ser escuchado y su opinión tomada en cuenta. Todo niño que sea privado de libertad deberá ser tratado con dignidad y humanidad, teniendo en cuenta las necesidades de las personas de su edad y se promoverá su reintegración social.

Respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, el mismo que es un Instrumento Internacional que recoge sobre Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 37, inciso b) refiere “... La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevara a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”, inciso c) refiere “... todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tenga en cuenta las necesidades

de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al Interés Superior del Niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales y artículo 40 inciso uno señala “...que fortalezca el respeto del Niño por los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de Terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del Niño y la Importancia de Promover la Reintegración del Niño y de la que éste asuma una función constructiva en la Sociedad”.

1.7.6 Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad

Mediante la Resolución 45/113 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó estas reglas amparándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como otros instrumentos internacionales relativos a la protección de los Derechos y al Bienestar de los Jóvenes; la Regla en mención en su Anexo, refiere en su Primer Tema sobre la Perspectiva Fundamentales, en su acápite 2, refiere, Segunda Parte “La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitar sea casos excepcionales, La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo”, así como en el segundo tema, el mismo que refiere sobre los alcances y aplicación de las reglas, en su acápite once, inciso b) refiere “Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema jurídico materia de la presente investigación consiste en determinar si el internamiento ordenado por los jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida Coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017, implica la trasgresión del principio de excepcionalidad, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de última ratio.

Atendiendo a esta consideración, se advierte que en caso de decidir el internamiento como medida socio educativa o como medida coercitiva personal, es necesario que el juez explique las razones por las cuales considera que la privación de la libertad resulta necesaria en el caso específico, para ello, deberá alegar motivos por los cuales las otras medidas personales menos gravosas son incapaces de cumplir el mismo objetivo; es así, que la exigencia de la motivación debe demostrar que el internamiento no se aplica como una simple medida ordinaria, sino por el contrario que permita despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial y a la vez permita evaluar si el Juzgado de Familia ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida de internamiento.

En virtud de lo señalado, se puede constatar que en la práctica los jueces que aplican internamiento como medida coercitiva personal, lo hacen como una forma de adelantar la sanción penal, y en muchos casos perciben el exceso cometido, por lo que aplican la medida socio educativa de internamiento de corta duración que a la larga terminan siendo criminógenas y desfavorables para los adolescentes infractores de la ley penal; de ese modo, lo que se pretende al evitar el internamiento preventivo, es disminuir las probabilidades de aplicar internamiento como sanción penal. Por ello, se hace necesario, tener un estándar más riguroso en la aplicación del internamiento que prevalezca las medidas alternativas con las que dispone el juez con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los principios que rigen la aplicación de las sanciones privativas de la libertad; así como, aquellos principios relativos al interés superior del niño, como principio de intervención mínima y el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017, implica la trasgresión del principio de excepcionalidad, principio que regula la medida como de última ratio?

2.3 OBJETIVOS

2.3.1. Objetivo General

- Determinar si el internamiento aplicado como medida socio educativa o medida coercitiva personal por los Jueces de Familia del Distrito Judicial de Piura durante el periodo del año 2016 y 2017 fue aplicado como medida de última ratio, atendiendo su carácter excepcional y subsidiario.

2.3.2. Objetivo Especifico

- Determinar cuáles son los principales argumentos facticos y elementos de prueba utilizados por los Jueces de Familia de Piura para sustentar el internamiento como medida excepcional.
- Determinar si la medida que implica la privación de libertad de los adolescentes, dada como medida socio educativa o medida coercitiva personal por la infracción de una ley penal, es aplicada únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible, en respeto de los derechos al debido proceso y las garantías judiciales de los adolescentes.
- Comprobar si las sentencias proyectadas en los Juzgados de Familia durante el periodo del año 2016 y 2017 han sido emitidas vulnerando los principios que

rigen la aplicación de las sanciones privativas de la libertad a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

- Comprobar si existe deficiencias normativas en la dación de sentencias judiciales que imponen la sanción de internamiento en los Juzgados de Familia durante el año 2016 y 2017, lo que ha conllevado a la vulneración de los principios y estándares que establecen las normas que integran el corpus iuris internacional en materia de adolescentes infractores con la ley penal.

2.4. HIPÓTESIS GENERAL

“El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida Socio Educativa o Medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y el 2017, implica la trasgresión del Principio de Excepcionalidad, principio que regula la medida como de ultima ratio”

2.5 VARIABLES

2.5.1 Variable Independiente

V₁: Implica la trasgresión del “Principio de Excepcionalidad”, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de ultima ratio.

2.5.2 Variable Dependiente

V₂: El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017.

2.5.3. Conceptualización De Variables

HIPOTESIS	
<p>El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida Socio Educativa o Medida Coercitiva Personal durante el periodo del año 2016 y 2017, implica la trasgresión del principio de excepcionalidad, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de última ratio.</p>	
VARIABLES	CONCEPTUALIZACION
<p>V1: Implica la trasgresión del Principio de excepcionalidad, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de ultima ratio</p>	<p>I¹: PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD:</p> <p>Para Rosas Yataco⁶⁷, este principio es por regla general el respeto irrestricto del derecho a la libertad ambulatoria, y sólo en casos excepcionales se tomará dicha medida extrema. Fuera de estos casos excepcionales, el inculpaado tiene la posibilidad de concurrir al proceso penal en libertad, con las sujeciones de ley.</p> <p>I²: MEDIDA DE ULTIMA RATIO:</p> <p>Las normas y estándares internacionales sobre justicia juvenil refieren que los Estados deben reservar el uso de la privación de la libertad como un último recurso, y tener a disposición medidas alternativas a la privación de libertad.</p>
<p>V2: El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva</p>	<p>I¹: EL INTERNAMIENTO</p>

⁶⁷ ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 447.

<p>personal durante el periodo del año 2016 y 2017</p>	<p>Se entiende por internamiento, a la medida socioeducativa privativa de libertad no menor de 6 años.</p> <p>I²: JUECES DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA</p> <p>El Juez es el Director del proceso; como tal, le corresponde la conducción, organización y desarrollo del debido proceso⁶⁸.</p> <p>I³: MEDIDA SOCIO EDUCATIVA</p> <p>Para el autor Herrera Zurita, las medidas socioeducativas se definen como “(...) acciones legales dispuestas por la autoridad judicial competente, cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal” (HERRERA ZURITA, 2010, pág. p.23)</p> <p>I⁴: MEDIDA COERCITIVA PERSONAL</p> <p>Según Alonso Peña Cabrera Freyre manifiesta que es “la detención de un individuo, supone una grave afectación a la libertad personal, impidiendo su capacidad de locomoción y su desplazamiento de un lugar a otro”</p>
--	---

⁶⁸Artículo 136 del Código de los niños y adolescentes

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

2.6.1 Indicador

TABLA N° 01

VARIABLE	INDICADOR	FUENTE
V ₁ : Implica la trasgresión del Principio de excepcionalidad, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de ultima ratio	I ₁ : La regla general I ₂ : respeto irrestricto I ₃ : Derecho a la Libertad Ambulatoria I ₄ : casos excepcionales	- Doctrina. - Tratados Internacionales
	I ₁ : último recurso I ₂ : medidas alternativas a la privación de libertad	- Tratados Internacionales

TABLA N° 02

VARIABLE	INDICADOR	FUENTE
V ₂ : El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida	I ₁ : Medida socioeducativa privativa de libertad	- Código de los Niños y Adolescentes

<p>socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016y 2017</p>	<p>I¹: Director</p> <p>I²: proceso</p> <p>I³: conducción</p> <p>I⁴: organización</p> <p>I⁵: desarrollo del debido proceso</p>	<p>-Código de los Niños y Adolescentes.</p> <p>-Doctrina.</p>
	<p>I¹: acciones legales dispuestas por la autoridad judicial competente,</p> <p>I²: responsabilidad del adolescente</p> <p>I³: infracción penal</p>	<p>-Doctrina.</p>
	<p>I¹: Detención de un individuo</p> <p>I²: afectación a la libertad personal</p> <p>I³: impidiendo su capacidad de locomoción</p> <p>I⁴:desplazamiento de un lugar a otro</p>	<p>-Doctrina</p>

2.7. DISEÑO O CRITERIO METODOLÓGICO A EMPLEAR PARA LA PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

2.7.1. Tipo De Investigación

Por el tipo de Investigación, la presente tesis será de carácter documental-descriptiva; entiéndase por documental, cuando se trata de la identificación, recojo y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado. En este caso, la información recabada para el presente estudio se obtuvo a través del recojo de información de los legajos del periodo 2017 de los juzgados de familia (Primer, Segundo, Tercer y Cuarto), constituyéndose de esta manera como una estrategia que permitirá observar y reflexionar sistemáticamente como se ha venido aplicando la medida internamiento, en razón a ello, se lograra la interpretación y presentación datos e informaciones sobre el tema. Por otro lado, será una investigación descriptiva, ya que tiene como objeto evaluar algunas características de un población o situación particular, siendo en este caso que se describe la situación actual respecto al problema de investigación.

2.7.2. Método de Investigación para la Probanza Jurídico Social

El trabajo objeto de esta investigación jurídica, tiene entre los métodos a aplicar los Siguietes:

- **Método Descriptivo**

Se emplea porque la investigación necesita analizar la variación de la tenencia en el ámbito nacional, así como el mecanismo que limite la afectación a su naturaleza, y para ello se recolectará información de las instituciones nacionales, así como de las internacionales.

- **Método Analítico**

Consiste en la descomposición del objeto de estudio en sus elementos y partes integrantes lo que permitirá descubrir los elementos esenciales que lo conforman. Es así que a través de este método se procedió a descomponer el objeto de estudio a fin de realizar la posterior investigación.

Es importante señalar que este método se utiliza en la parte preliminar al momento de la búsqueda del problema a investigar.

- **Método Histórico**

Comprende el estudio de los antecedentes y condiciones en que aparecen y se desarrolla un proceso determinado; de manera que, su uso permitirá indagar y conocer los antecedentes del tema objeto de investigación, a través de sus fuentes; en consecuencia, nos permitirá conocer un poco más acerca del origen y el devenir histórico del tratamiento normativo y jurisprudencial de la prescripción adquisitiva de dominio e hipoteca, en el ámbito nacional como internacional

- **Método sintético**

Este método consistente en la integración de las partes, elementos o nexos esenciales de los objetivos o fenómenos que se estudia.

Este me sirvió para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales, así como al estudiar la aplicación de la medida socio educativa de internamiento tramitados en el 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia.

- **Método Hermenéutico**

Se utiliza para la interpretación de la técnica jurídica que integra el objeto de Investigación.

Se aplica este método interpretar y analizar las disposiciones normativas relativas al tema de Investigación.

2.7.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas de investigación que realizare en mi trabajo serán las siguientes:

- **Fichaje:** a través del fichaje bibliográfico se compilará todo lo que se ha escrito directa o indirectamente sobre el internamiento como sanción o medida preventiva llegando a tener una postura respecto a la investigación.

- **Recolección y Análisis de datos:** Esta técnica permite, recoger información en forma directa, es decir recolectar sentencias que tengan referencia a la temática de investigación, como por ejemplo procesos de Infracción contra la libertad sexual, infracción contra el patrimonio, Infracción contra la vida, el cuerpo, la vida y la salud, Infracción contra la fe Pública, entre otros; pero que tengan como características el haber sostenido su decisión en dictar una medida de internamiento, para luego hacer un análisis y determinar cuáles fueron los fundamentos que tuvo el juez de familia para aplicar dicha medida como una de ultima ratio.

2.7.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN

- Libros.
- Gacetas jurídicas y Artículos.
- Informes, revistas jurídicas
- Tratados Internacionales
- Legislación comparada
- Tesis
- Internet

CAPÍTULO III: PROBANZA DE LA HIPOTESIS, RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. PROBANZA JURÍDICO SOCIAL- DOCTRINARIA

El presente capítulo está diseñado a la probanza de la hipótesis planteada, habiéndose realizado para ello, una investigación desde su dimensión jurídica doctrinaria-social; en ese sentido, este tipo de comprobación trata determinar si la medida de internamiento, sea esta ordenada como sanción o medida coercitiva personal, ha sido impuesta como medida ordinaria o excepcional, así como el criterio utilizado por los jueces de familia de Piura para la aplicación de dichas medidas, esto con el objetivo de obtener a través del muestreo y estadísticas, la comprobación de si viene ordenando de forma indiscriminada la medida de internamiento, que implicaría la transgresión del principio de excepcionalidad, el cual regula la aplicación de la medida de internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura a los adolescentes infractores; con ello, se busca que la investigación realizada cumpla con los objetivos, tanto generales como específicos que se planteó en la presente tesis.

En ese sentido, la presente investigación muestra una serie de cuadros y porcentajes, para la parte descriptiva de la investigación, lo cual facilitara la observación de las tendencias de las variables como: análisis documentario de los legajos 2017, cada uno con sus respectivos gráficos y sus respectivas interpretaciones.

3.1.1 MUESTREO Y ESTADISTICA QUE SE APLICO

PRIMERO: Sobre el Ingreso y Producción General por Materia de los Juzgados de Familia- Periodo 2017

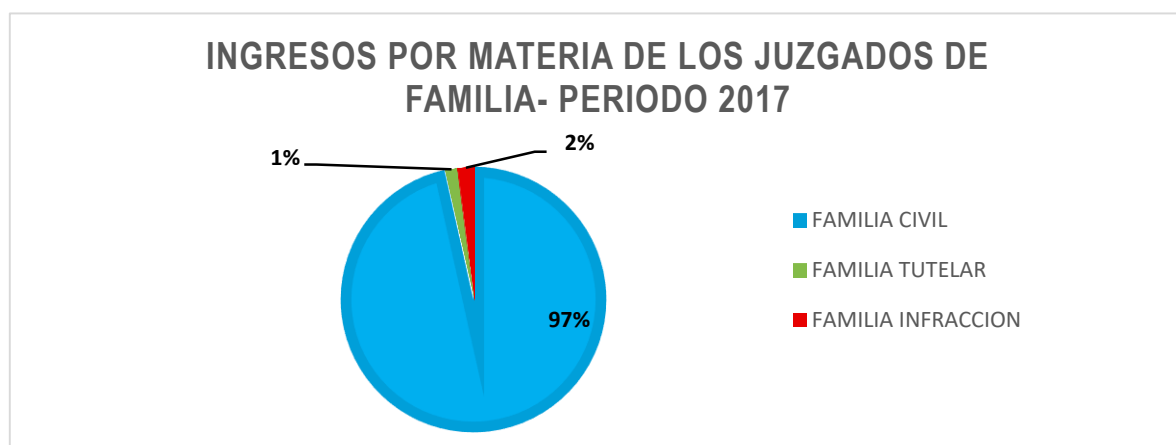
CUADRO N° 1

INGRESOS TOTAL POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DEL AÑO 2017

MATERIA	INGRESOS EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA	%
Familia Civil	8,841	97%
Familia Tutelar	137	1%
Familia Infracción	183	2%
TOTAL	9,161	100%

FUENTE: Área de Administración de los Juzgados de Familia del Poder Judicial de Piura

GRÁFICO N 01



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: El presente cuadro muestra el total de ingresos por materia de los Juzgados de Familia de Piura durante el periodo 2017, que respecto a los ingresos en materia- familia civil es de 8,841 casos que representa un 97% del total de ingresos, 137 casos en materia -familia tutelar que representa un 1% y 183 casos en materia- familia infracción que representa un 2%.

Cabe considerar, por otra parte, que respecto del periodo 2016 no se pudo obtener información, esto debido a lo manifestado en la Resolución Administrativa N° 195-2017-P-CSJPI/PJ de fecha 12 de abril del 2017.

COMENTARIO: Para comenzar, es importante señalar que dentro de los principios que regula todo proceso de infracción, encontramos el principio del interés superior del niño y del adolescente: Para Ameghino Bautista, C. Z., en su revista “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y funciones normativas del interés superior del niño”, refiere que dicho principio fue uno de los mecanismos para avanzar en el proceso de considerar al niño como un interés que debía ser público y jurídicamente protegido. Por ello, tal principio se encuentra reconocido en el Artículo 4º, de la Constitución Política del Perú, y en su Artículo IX, del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes; es así que, la aplicación del Principio del Interés Superior del Niño en un proceso de infracción que significa que el niño gozará de una protección especial, disponiendo de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Igualmente, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en su Artículo 3º, establece respecto al Principio del Interés Superior del Niño, que “*En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se consideración primordial la que se atenderá será el interés superior del niño.*”

Atendiendo estas consideraciones, del **CUADRO Y GRAFICO N° 1**, se puede observar que el ingreso de casos sobre materia familia infracción, fue solo 183 casos que representan un 2% del total de ingresos en el periodo 2017; es decir, es menor número que los ingresos sobre materias familia civil que tiene 97% (8,841) y en materia familia- tutelar solo del 1%. (137).

Cabe considerar, por otra parte, que no se pudo recabar información respecto de los expedientes en materia infracción del periodo 2016, esto debido al fenómeno del niño ocurrido en el periodo 2016 que ocasiono la pérdida de más de 6, 156 expedientes; en consecuencia, la Corte Superior de Justicia de Piura declaro expedientes siniestrados por dicho fenómeno y dispuso a través de la **Resolución Administrativa N° 195-2017-P-CSJPI/PJ** de fecha 12 de abril del 2017, que los órganos jurisdiccionales en materia de familia y penal (Código Procesal Penal), PROCEDAN A LA RECOMPOSICION DE LOS

EXPEDIENTES JUDICIALES que han sido siniestrados por el desborde del río Piura; es así que hasta la fecha se sigue con la recomposición.

JUZGADOS DE FAMILIA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES
1°	2,156
2°	2,000
3°	1,000
4°	1,000

FUENTE: Resolución Administrativa N° 195-2017-P-CSJPI/PJ de fecha 12 de abril del 2017⁶⁹

⁶⁹<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5656a08040da3e2b81f6cbfb1083971c/RA+N+1952017+RECOMPOSICION+DE+EXPEDIENTES+JUDICIALES.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5656a08040da3e2b81f6cbfb1083971c>

A. Producción General por materia de los Juzgados de Familia- Periodo 2017

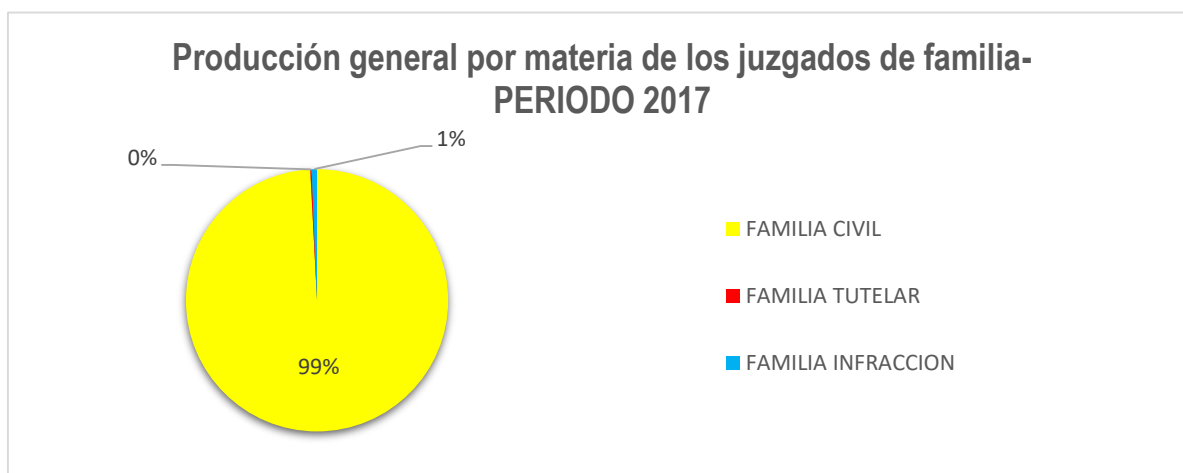
CUADRO N° 2

PRODUCCION GENERAL POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA- PERIODO 2017

MATERIA	PRODUCCION DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA	%
Familia Civil	5,293	99%
Familia Tutelar	9	0%
Familia Infracción	35	1%
TOTAL	5,337	100%

FUENTE: Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

GRÁFICO N° 2



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: El presente cuadro muestra la producción general por materia de los cuatro Juzgados de Familia de Piura, en donde se señala que respecto a materia- familia civil hubo 5,293 expedientes resueltos que representan un 99% del total, 9 expedientes resueltos en materia-familia tutelar que representa un 0% y 35 casos en materia- familia infracción que representa un 1%.

B. Producción respecto de sentencias y autos por Juzgados de Familia- Periodo 201

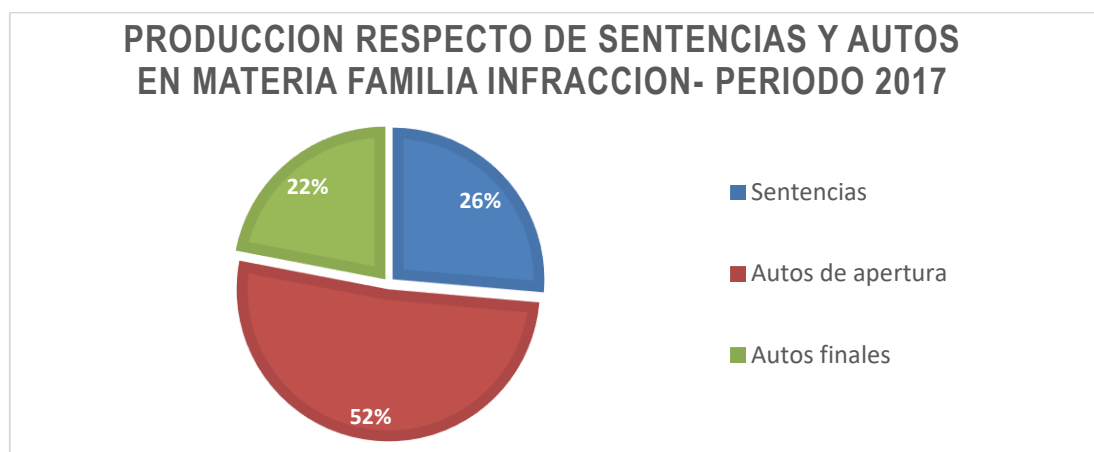
CUADRO N° 3

**PRODUCCION RESPECTO DE SENTENCIAS Y AUTOS EN MATERIA FAMILIA
INFRACCION- PERIODO 2017**

PRODUCCION	CANTIDAD	%
Sentencias	24	26%
Autos de apertura	47	52%
Autos finales	20	22%
TOTAL	91	100%

FUENTE: Legajos de Autos y sentencias -2017 delos Juzgados de Familia de Piura

GRÁFICO N° 3



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: El presente cuadro comprende la producción total tanto de autos de apertura, sentencias y autos finales emitidos por los cuatro Juzgados de Familia de Piura; en ese sentido, la producción de sentencias equivale al 22%, mientras la producción de autos de apertura es equivalente al 52% y finalmente respecto a los autos finales equivale al 22% del 100% de la producción total.

SEGUNDO: En relación al Internamiento ordenado por los Juzgados de Familia de Piura

A. Ordenado como Medida Preventiva

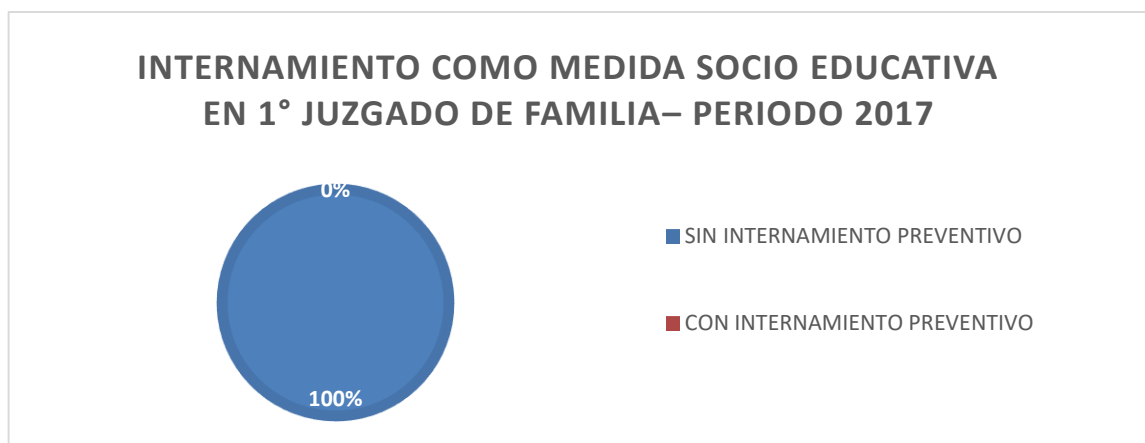
CUADRO N°4

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 1° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017

1° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO PREVENTIVO	SIN INTERNAMIENTO PREVENTIVO	TOTAL AUTOS DE APERTURA
AUTOS DE APERTURA	0	2	2

FUENTE: Legajos de Autos-2017 del 1° Juzgado de Familia de Piura

GRAFICO N°4



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: En el presente cuadro muestra la cantidad total de 5 autos de apertura dictados por el **Primer Juzgado de familia** que representa un 100%; asimismo, se observa que en ninguno auto de apertura se dictó internamiento como medida preventiva lo que representa un 0%.

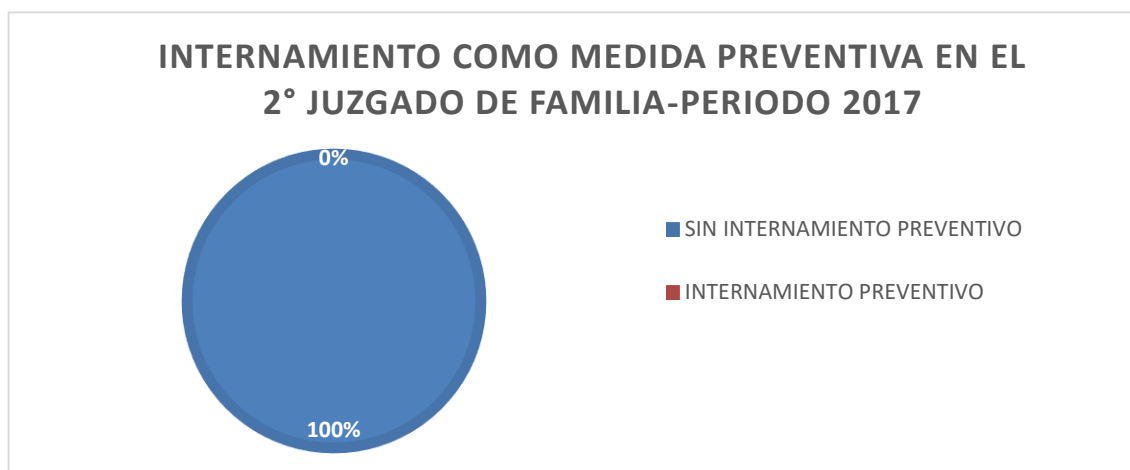
CUADRO N° 5

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 2° JUZGADO DE FAMILIA– PERIODO 2017

2° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO PREVENTIVO	SIN INTERNAMIENTO PREVENTIVO	TOTAL AUTOS DE APERTURA
AUTOS DE APERTURA	0	5	5

FUENTE: Legajos de Autos-2017 del 2° Juzgado de Familia de Piura

GRAFICO N°5



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: El presente cuadro indica la cantidad total de 5 autos de apertura dictados por el **Segundo Juzgado de Familia** que representa un 100%, asimismo se observa que en ninguno auto de apertura se dictó internamiento como medida preventiva lo que representa un 0%.

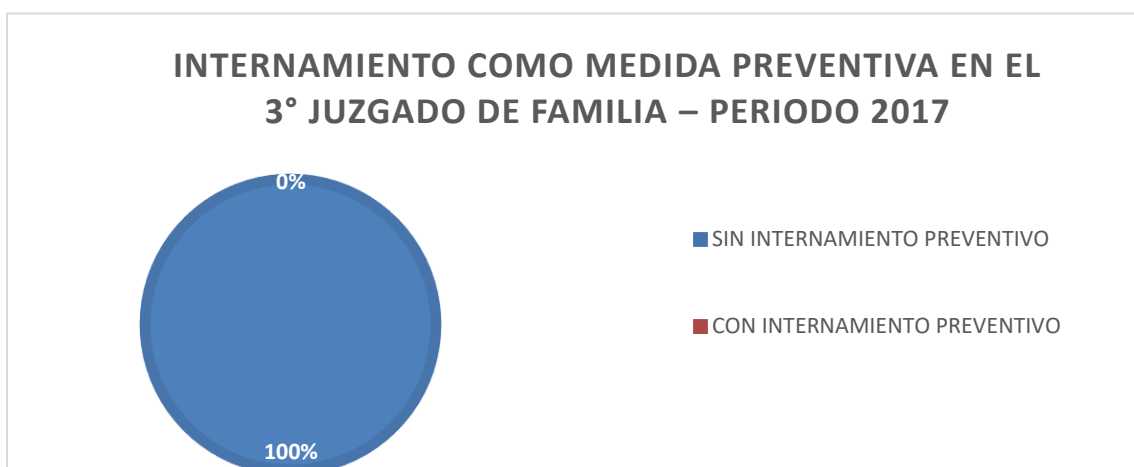
CUADRO N° 6

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 3° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017

3° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO PREVENTIVO	SIN INTERNAMIENTO PREVENTIVO	TOTAL AUTOS DE APERTURA
AUTOS DE APERTURA	0	16	16

FUENTE: Legajos de Autos-2017 del 3° Juzgado de Familia de Piura

GRÁFICO N°6



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: El presente cuadro comprende la cantidad total de 16 autos de apertura dictados por el **Tercer Juzgado de Familia** que representa un 100%, asimismo se observa que en ninguno auto de apertura se dictó internamiento como medida preventiva lo que representa un 0%.

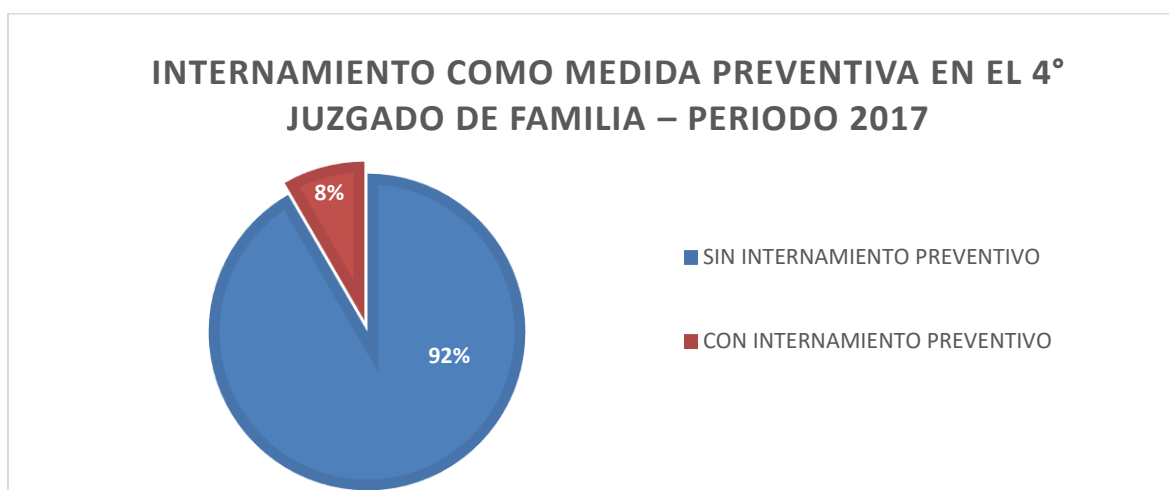
CUADRO N° 7

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL 4° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017

4° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO PREVENTIVO	SIN INTERNAMIENTO PREVENTIVO	TOTAL AUTOS DE APERTURA
AUTOS DE APERTURA	2	22	24

FUENTE: Legajos de Autos-2017 del 4° Juzgado de Familia de Piura.

GRAFICO N° 7



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: El presente cuadro indica la cantidad total de 24 autos de apertura dictados por el **Cuarto Juzgado de Familia** que representa un 100%, sin embargo, se observa 2 autos de apertura con internamiento como medida preventiva que representa un 8% y 22 autos de apertura sin internamiento preventivo que representa un 92%.

COMENTARIO DE LOS CUADROS N° 4, 5, 6, 7: Para comenzar, las medidas cautelares son aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad de la sentencia (Gimeno sendra, 2004). Estas medidas pueden recaer sobre el patrimonio recibiendo el nombre de medidas cautelares reales o pueden afectar la libertad personal del imputado en cuyo caso nos encontramos frente a las llamadas medidas cautelares personales

En ese sentido se comprende, que las medidas cautelares personales o internamiento preventivo persiguen como finalidad asegurar que la persona del imputado para la celebración de los actos procedimiento, o para la ejecución de la sentencia condenatoria que eventualmente pudiera dictarse, afectando la libertad ambulatoria (Garcia Guayama, 2016) y personal del procesado.

Atendiendo estas consideraciones, y efectuando el análisis de la información analizada, se puede observar del **CUADRO Y GRAFICO N°4** que el Primer Juzgado de Familia de Piura concibe la medida de internamiento preventivo como medida excepcional ya que se observa que en ninguno auto de apertura se dictó internamiento como medida preventiva lo que representa un 0%; resulta asimismo interesante señalar que en el **CUADRO Y GRAFICO N° 5 y 6**, el Segundo y Tercer Juzgado de Familia de Piura concibe de la misma manera que la medida de internamiento preventivo como una medida excepcional, pues se solo remitió a promover la acción penal a favor de los adolescente en conflicto con la ley penal.

Por su parte; del **CUADRO Y GRAFICO N° 7** se corrobora que el internamiento como medida preventiva en el Cuarto Juzgado de Familia de Piura se determina como medida excepcional, esto en razón de los 2 autos de apertura con internamiento como medida preventiva dictados que representa un 8% y 22 autos de apertura sin internamiento preventivo que representa un 92%.

De este modo, analizando los cuadros y gráficos precedentes se puede inferir que los Juzgados de Familia de Piura en un 100% conciben la medida preventiva de internamiento como una medida excepcional, asimismo, del análisis de los respectivos autos de apertura donde se aplicó el internamiento como medida preventiva se determinó que los mismos fueron debidamente motivados, toda vez que la privación de la libertad constituyen para los jueces de los citados juzgados una de las afectaciones más significativas a los derechos de las personas sujetas a investigación, la mismas que debe dictarse de manera excepcional y teniendo como base primordial el Interés superior del Niño.

B. Ordenado como Sanción o Medida Socio Educativa

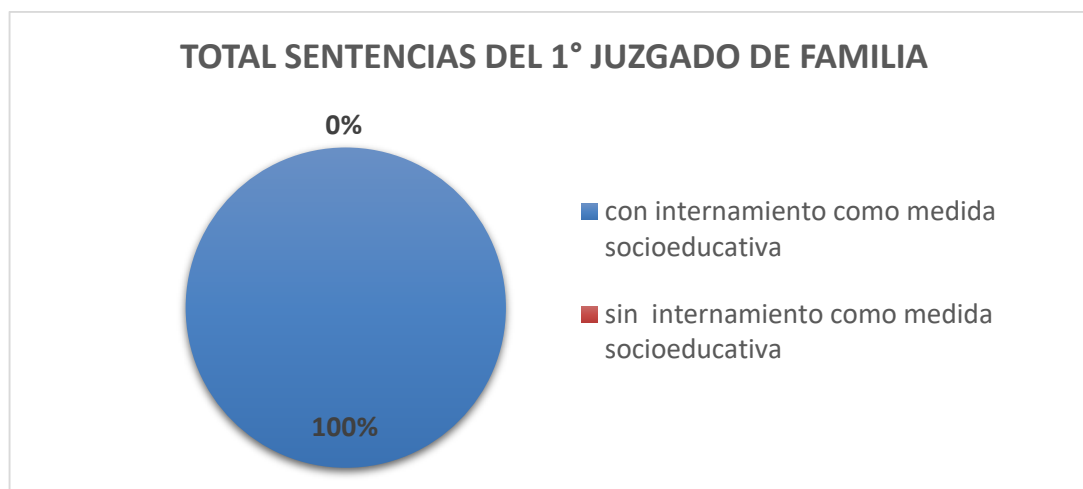
CUADRO N° 8

**INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 1° JUZGADO
FAMILIA – PERIODO 2017**

1° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	SIN INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	TOTAL SENTENCIAS
SENTENCIAS	2	0	2

FUENTE: Legajos de Sentencias-2017 del 1° Juzgado de Familia de Piura y el Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

GRAFICO N°8



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Del análisis del presente cuadro se puede apreciar la cantidad total de 2 de sentencias dictados por el **Primer Juzgado de familia** que representan un 100%, asimismo se observa que en ninguna sentencia se dictó internamiento como medida socioeducativa lo que representa un 0%.

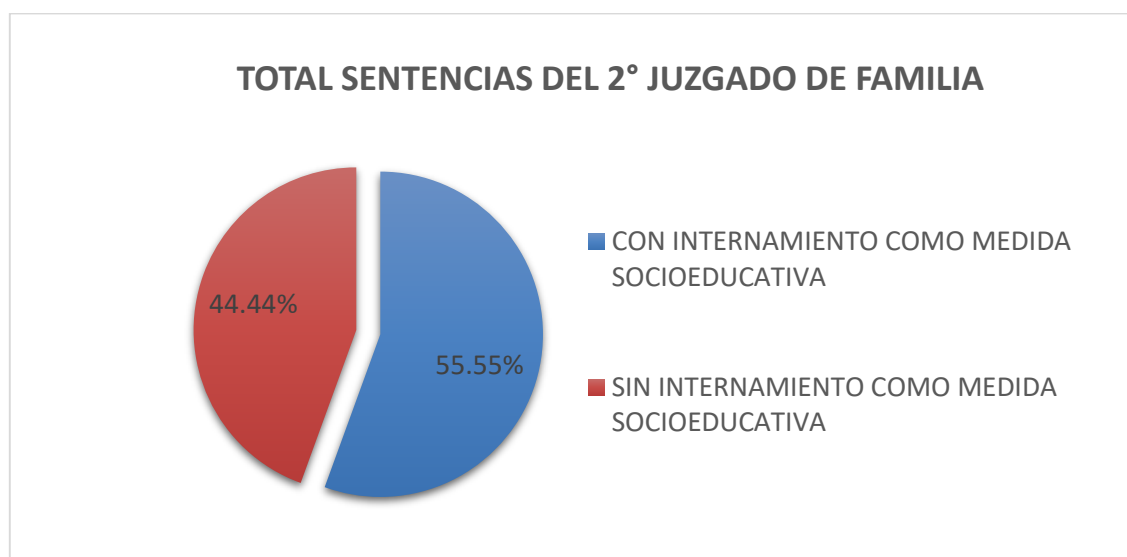
CUADRO N° 9

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 2° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017

2° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	SIN INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	TOTAL SENTENCIAS
SENTENCIAS	5	4	9

FUENTE: legajos de Sentencias-2017 del 2° Juzgado de Familia de Piura, y el Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

GRAFICO N°9



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Del análisis del presente cuadro se puede apreciar la cantidad total de 9 sentencias dictadas por el **Segundo Juzgado de familia** que representa un 100%; sin embargo, se observa 5 sentencias con internamiento como medida socio educativa que representa el 55.5% y 4 sentencias sin internamiento como medida socioeducativa que representa el 44.44%.

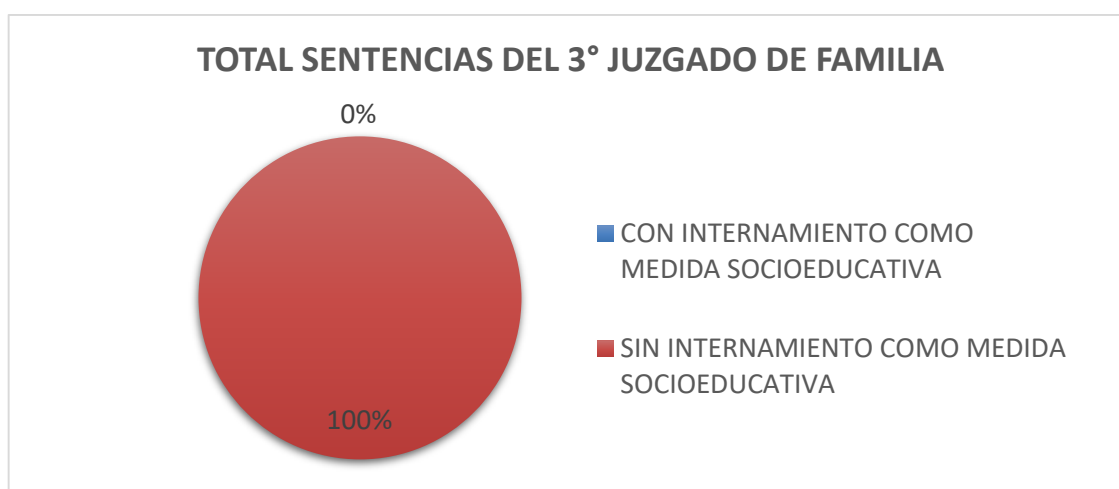
CUADRO N° 10

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 3° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017

3° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	SIN INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	TOTAL SENTENCIAS
SENTENCIAS	0	12	12

FUENTE: legajos de Sentencias-2017 del 3° Juzgado de Familia de Piura, y el Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

GRAFICO N°10



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Del presente cuadro se puede apreciar la cantidad total de 12 sentencias dictadas por el **Tercer Juzgado de Familia** que representa un 100%, asimismo se observa que en ninguna sentencia se dictó internamiento como medida socioeducativa lo que representa un 0%.

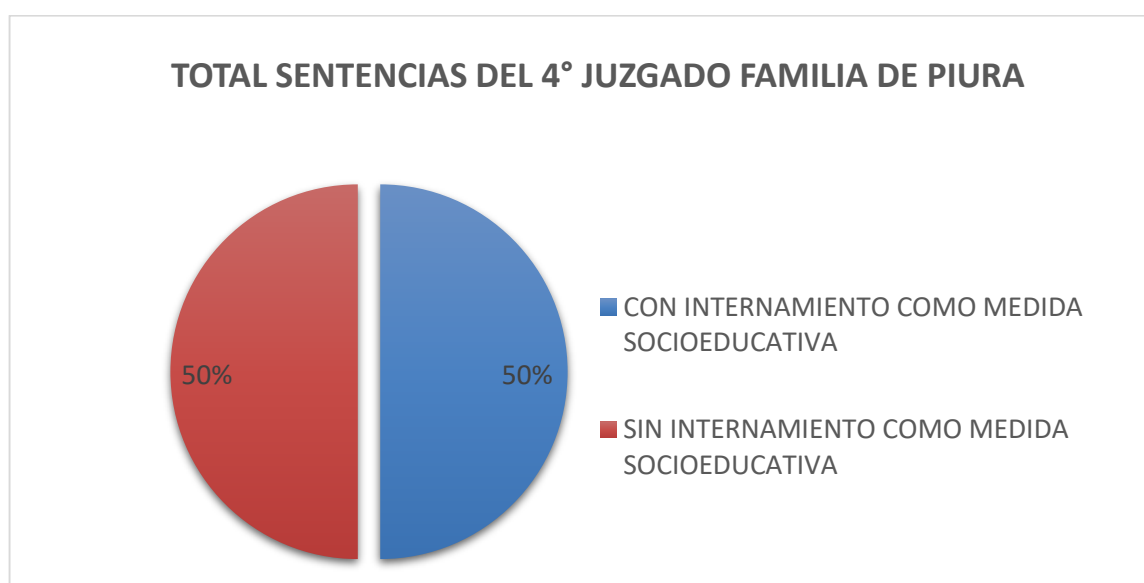
CUADRO N° 11

INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EN EL 4° JUZGADO DE FAMILIA – PERIODO 2017

4° JUZGADO DE FAMILIA DE PIURA	CON INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	SIN INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	TOTAL SENTENCIAS
SENTENCIAS	2	2	4

FUENTE: legajos de Sentencias-2017 del 4° Juzgado de Familia de Piura y el Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

GRAFICO N° 11



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Del análisis del presente cuadro se puede apreciar la cantidad total de 4 sentencias dictadas por el **Cuarto Juzgado de Familia** que representa un 100%; sin embargo, se observa 2 sentencias con internamiento como medida socioeducativa que representa el 50 % y 2 sentencias sin internamiento como medida socioeducativa que representa el 50 %.

COMENTARIO DE LOS CUADROS N° 8,9,10, 11: Para dar comienzo es importante señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.4 establece la necesidad de que se disponga una diversidad de sanciones frente a un hecho punible cometido por un menor de edad para asegurar que se han tratados de manera apropiada para su bienestar, pero sin perder de vista la necesaria proporción que debe guardar la respuesta adoptada, tanto en las circunstancias personales del adolescente en conflicto con la ley penal como con la infracción misma.

Respecto a esta necesaria diversidad de respuestas frente a un hecho punible cometidos por adolescente, el artículo 231° del Código de los Niños y Adolescentes establece tres tipos de sanciones que se puede aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley penal: entre ellas se tiene las sanciones socioeducativas, mandatos y prohibiciones y sanciones privativas de libertad; en ese sentido, queda a facultad del juez establecer la medida más idónea para el infractor previo análisis de las circunstancias en que se dieron, los hechos y la situación judicial de éste.

Es así que sobre las medidas socioeducativas, GERMAN MANCEBO, ISABEL señala⁷⁰, que: “[...] Las medidas socioeducativas poseen naturaleza jurídica “híbrida” pues si bien tienen un aspecto sancionador, fundamentalmente asumen una finalidad pedagógica cuya intención es asegurar en todo momento la educación, reinserción y resocialización del adolescente infractor [...]”.

Atendiendo estas consideraciones, y efectuando el análisis de la información recabada, se puede apreciar en el **CUADRO Y GRAFICO N° 8**, que los jueces del Primer Juzgado de Familia, ha expedido solo 2 sentencias que equivalen el 100% de su total, en las cuales se ordena el internamiento como sanción lo que equivale el 100%; traduciéndose de esta manera que la aplicación de la sanción privativa de libertad se ordena como una medida excepcional; hay que mencionar, además es necesario precisar que del análisis de las sentencias se constató que éstas cumplen con los presupuestos que exige la norma para determinar internamiento como medida socio educativa (artículo 235 CDN), es así que la sanción impuesta calificaría entonces como una medida de último recurso; Por otro parte, el

⁷⁰German Mancebo, Isabel “Menores Infractores/Circuló victimal, San Sebastián, diciembre 2009, p.289

CUADRO Y GRAFICO N° 9 muestra que los jueces del Segundo Juzgado de familia solo han expedido 9 sentencias que equivale el 100% del total de sentencias; de las cuales solo en 5 de ellas se aplica el internamiento como sanción que representa el 55.55%, mientras que las 4 restantes opta por otras sanciones diferentes al internamiento que representan el 44.44%; De manera que se infiere que el internamiento como medida socio educativa ha sido aplicado por dichos jueces como medida ordinaria; sin embargo, deseo subrayar que del análisis a las mencionadas sentencias se advierte que los jueces cumplen con los presupuestos para determinar internamiento como medida socio educativa (artículo 235 CDN), es así que se infiere que dicho juzgado ha venido ordenando el internamiento de forma excepcional.

Por su parte, el **CUADRO Y GRAFICO N° 10**, señala que los jueces del Tercer Juzgado de Familia tienen un total 12 sentencias que equivale al 100%, de las cuales a ninguna se aplicó internamiento como sanción lo que representa el 0%, es así que se advierte que la no aplicación del internamiento por parte de los órganos jurisdiccionales se debe a la ausencia de los requisitos que exige el artículo 215° CDN, por lo que optan por aplicar otras medidas socioeducativas; es así que nos lleva a concluir que el juez de familia de dicho juzgado ha venido aplicando el internamiento como medida de ultima ratio de forma excepcional; pues predomina la aplicación de otras medidas socioeducativas por la de sanción de la privación de libertad. En ese mismo sentido, el **CUADRO Y GRAFICO N° 11**, demuestra que el Cuarto Juzgado de familia tiene 4 sentencias equivalente al 100% del total, de los cuales solo en 2 sentencias se dictó internamiento como medida socioeducativas que representa el 50% mientras la 2 sentencias restantes se optó por otras medidas que representa el 50%; de esta manera se advierte de los documentos analizados que los jueces del mencionado órgano jurisdiccional ha aplicado el internamiento de manera ordinaria y como último recurso ya que ha predominado en gran cantidad la aplicación de otras medidas no privativa de libertad.

En ese sentido, a modo de referencia tenemos la STC. Exp. N° 03247-2008-PHC/TC emitida por el Tribunal Constitucional quien ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en sistema penal juvenil, señala que: *“el artículo 37 de la convención sobre los derechos del niño es posible determina el marco general de un sistema de responsabilidad penal juvenil al establecer que la*

privación de la libertad del niño es posible como una medida de último recurso, pero en establecimiento especiales separados del régimen para los adultos y por el menor tiempo posible, tomando en cuenta sus necesidades especiales”, que sin duda, refiere que el Tribunal Constitucional también ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en sistema penal juvenil.

Por consiguiente, podemos inferir que los jueces de familia de Piura de los cuatro juzgados de familia en materia familia infracción. respecto a la aplicación de sanciones a favor de los adolescentes infractores son respetuosos del cumplimiento del artículo 235° del CDN que establece que la internación es una sanción privativa de libertad de carácter excepcional y que se aplica como último recurso; asimismo del marco internacional que garantizan la excepcionalidad de la privación de la libertad en el caso de adolescentes; todo en razón a la predominación por la aplicación de otras medidas socioeducativas distintas a la sanción de internamiento; es decir la aplicación del internamiento ha venido siendo aplicada como medida de ultima ratio atendiendo a la excepcionalidad de ser un principio que vela porque la detención, el encarcelamiento o la prisión de un adolescente se lleven a cabo como medidas de último recurso (art 37.b) de la CDN.

TERCERO: Sobre los Criterios para emitir internamiento como Medida Preventiva

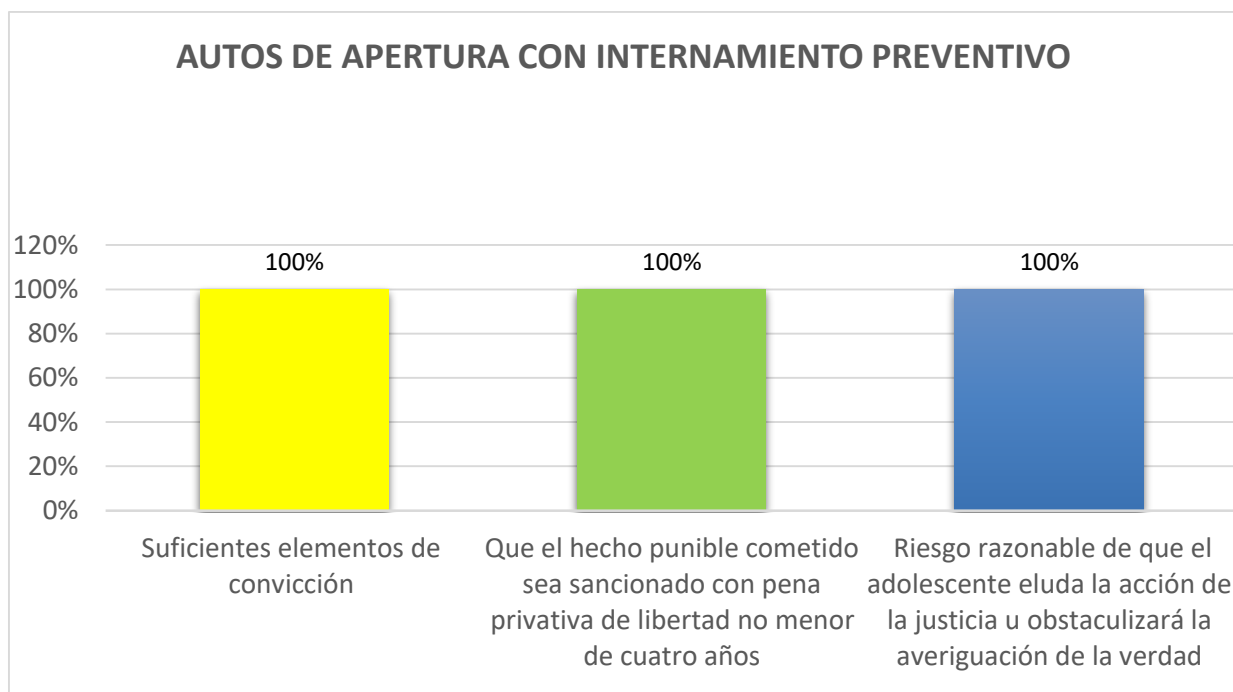
CUADRO N°12

CRITERIOS PARA EMITIR INTERNAMIENTO PREVENTIVO -PERIODO 2017

CRITERIOS PARA DETERMINAR INTERNAMIENTO PREVENTIVO (Artículo 209 CDN)	AUTOS DE APERTURA CON INTERNAMIENTO PREVENTIVO	%
	TOTAL: 2	
<input type="checkbox"/> Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo	2	100%
<input type="checkbox"/> Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años	2	100%
<input type="checkbox"/> Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad	2	100%

FUENTE: legajos de Autoss-2017 de los cuatro Juzgado de Familia de Piura, y el Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

GRAFICO N° 12



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Analizando el presente cuadro se puede observar que los dos 2 únicos autos de apertura con internamiento preventivo dictados en el periodo 2017 ordenados por los Juzgados de Familia de Piura, cumplen en su totalidad con los criterios que exige la norma para dictar la internación preventiva, mismas que están debidamente motivadas y cumplen al 100% con los tres criterios prescritos en el artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes.

CUARTO: Los Criterios para Emitir Internamiento como medida Socio Educativa

CUADRO N° 13

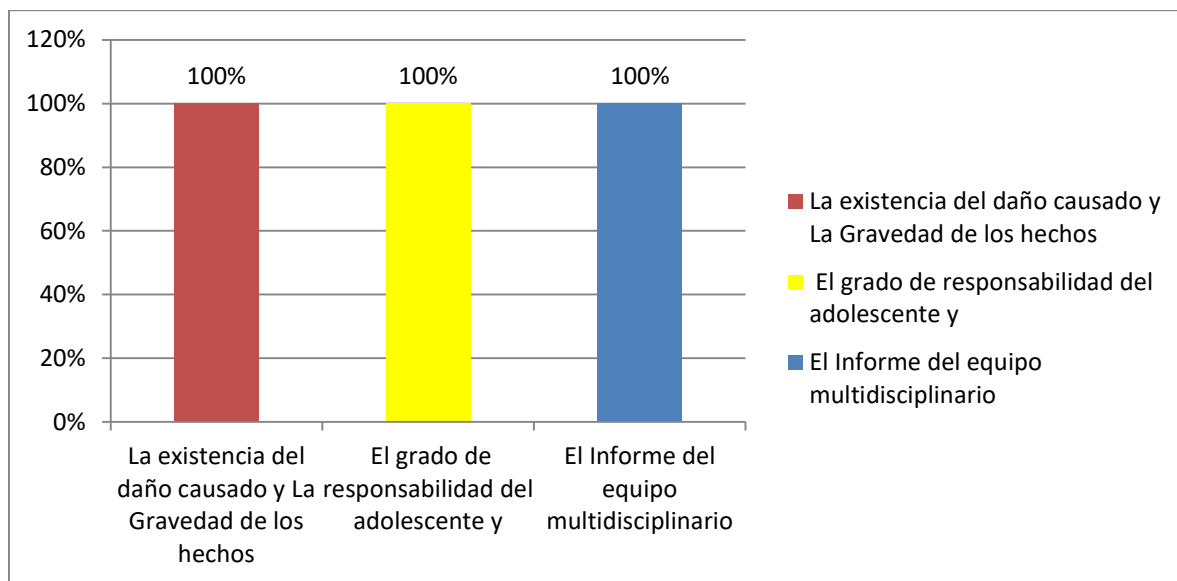
CRITERIOS PARA EMITIR INTERNAMIENTO COMO SANCION -PERIODO 2017

PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR INTERNAMIENTO COMO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA (Artículo 235 CDN⁷¹)	SENTENCIAS CON INTERNAMIENTO COMO SANCION	%
	TOTAL:9	
<input type="checkbox"/> La existencia del daño causado y La Gravedad de los hechos	9	100%
<input type="checkbox"/> El grado de responsabilidad del adolescente y	9	100%
<input type="checkbox"/> El Informe del equipo multidisciplinario	9	100%

FUENTE: legajos de Autoss-2017 de los cuatro Juzgado de Familia de Piura, y el Departamento de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Piura

⁷¹ Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1204, que modifica el código de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución.

GRAFICO N° 13



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Analizando el presente cuadro se visualiza que los Juzgados de familia de Piura dictaron solo un total de 9 sentencias con internamiento como sanción o medida socioeducativa de las cuales se corrobora el cumplimiento de los cuatro criterios específicos establecidos en el artículo 235° del Código de los Niños y Adolescentes, presupuestos exigidos para dictar internamiento como una sanción privativa de libertad;

QUINTO: Respecto a la aplicación de normas nacionales e internacionales al momento de emitir sentencia con medida socioeducativa de internamiento

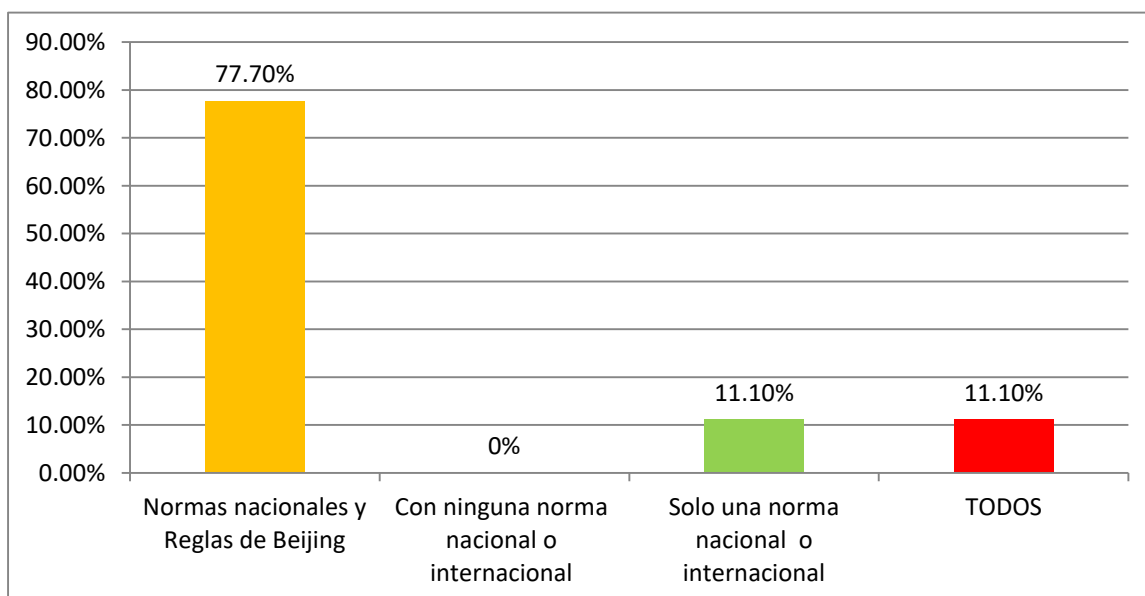
CUADRO N° 14

APLICACIÓN DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA CON MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAMIENTO

CATEGORIA	N° SENTENCIAS	%
Normas nacionales y Reglas de Beijing	7	77.7%

Con ninguna norma nacional o internacional	0	0%
Solo una norma nacional o internacional	1	11.1%
Constitución Política del Perú; Código de los Niños y Adolescentes; Convención sobre los Derecho de Niño; Reglas de Beijing; Directrices de RIAD; Reglas de naciones unidas para la protección de menores privados de su libertad	1	11.1%
TOTAL	9	100%

GRAFICO N° 14



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO: Efectuando el análisis del cuadro precedente, se aprecia la incidencia de un 77.7% de casos en los que el juzgador consideró sólo la aplicación de Normas Nacionales y reglas de Beijín para imponer la medida socioeducativa de Internamiento; en tanto que un 11.1%, los jueces consideraron como criterio sólo con una Norma Nacional o Internacional para imponer la medida socioeducativa de Internamiento, mientras que un 11.1% aplica correctamente tanto Constitución Política del Perú; Código de los Niños y Adolescentes; Convención sobre los Derecho de Niño; Reglas de Beijing; Directrices de RIAD; Reglas de naciones unidas para la protección de menores privados de su libertad. Además de ello, se corroboro que tratándose de autos de internamiento preventivo existe un 0% de autos en la que no se adoptó aplicar ninguna Internacional para imponer la medida preventiva de Internamiento.

COMENTARIO DE LOS CUADROS N° 12 y13: Para dar comienzo al análisis de los gráficos antes descritos, es importante resaltar que respecto a la medida socio educativa de internamiento, esta resulta como la última medida socioeducativa que determina el área jurisdiccional, de acuerdo al artículo 235° Código del Niño y el Adolescente, de la misma manera tratándose de un internamiento preventivo, este también exige que la internación preventiva tenga carácter excepcional especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y que la misma sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa, tal como lo prescribe los artículo 209° del Código del niño y el Adolescente.

Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985 e incluidas en la resolución N° 40/33, respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, que en su artículo 17, el mismo que trata sobre Principios Rectores de la Sentencia y la Resolución, en el primer acápite inciso c) establece que *“sólo se impondrá la privación de libertad personal en caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”*; de la misma manera , las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, en su anexo, tema V, que habla de la Política Social, en el acápite 46, se señala que *“Sólo deberá*

recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los propios intereses del joven.”; y toda norma que a nivel Internacional buscan armonizar los procedimientos Jurisdiccionales teniendo como base fundamental las Declaración Universal de los Derechos del Niño promulgado por las Naciones Unidas, y la Convención Interamericana de los Derecho Humanos, quienes velan por la seguridad de todo adolescente.

En ese sentido, a modo referencia, se tiene la sentencia recaída en la sentencia en el expediente N° 00174-2011-0-1903, expedido por el Segundo Juzgado de familia de Maynas, describe lo siguiente: “debe señalarse que de conformidad con el art. 236° del código de los niños y adolescentes, la internación solo podrá aplicarse cuando a) se trata de acto infractor doloso que se encuentre tipificado en el Código Penal y cuya pena sea mayor de cuatro (04) años ; b) por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; c) por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socioeducativa impuesta; lo cual, debe armonizar se con lo señalado en el art. 37° de la Convención de los Derechos del Niño, que ha precisado los parámetros mínimo que los estados deberán respetar para el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal juvenil, donde señala que la detención, encarcelamiento o prisión de un niño se llevara a cabo de conformidad con la ley y se utilizara tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda , y las medidas que se adopten deben tener un fin garantista tendiente a la integración del niño adolescente a la sociedad como parte de su derecho fundamental su libre desarrollo que comprende su formación física, mental, espiritual, moral, psicológica y social a fin de que esta medida excepcional no afecte su proyecto de vida, habiéndose en el fundamento 27 vertido por el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el expediente número 003389-2009-PHC/TC indicado que ordenar el internamiento de un niño, niña o adolescente en un centro especializado, alejado de su domicilio y lejos de su familia, no solo viola el art. 4° de la Constitución Política del Estado, sino que afecta el propio objeto y propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, la Casación 3251-2017, Sullana, la Corte Suprema de Justicia de la República Sala Transitoria de la República, refiere que: “ Que, siendo ello así, **corresponde evaluar las circunstancias de cada caso, como son la personalidad del adolescente, salud emocional, nivel educativo, familiar y sociocultural, etc. conforme al artículo 230 del**

Código de los Niños y Adolescentes; que si bien la Sala de Vista pone énfasis en desarrollar la excepcionalidad de la medida socio-educativa de internación; sin embargo, no establece qué circunstancias rodean al menor infractor que lo haga merecedor de dicha excepcionalidad máxime si la conducta desplegada por este se encuentra tipificada por el artículo 176-A del Código Penal, la reprime con pena no menor de siete ni mayor de diez años, siendo ello así es menester evaluar lo precedentemente mencionado a los efectos de emitir un pronunciamiento acorde y con ello proceder a estimar o desestimar la demanda; por lo que corresponde amparar la causal procesal contenida en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú...”

De conformidad con lo señalado líneas arriba, y en concordancia el análisis de la información recabada en el archivo de los juzgados, se puede apreciar del **CUADRO Y GRAFICO N° 12**, que el total de autos con internamiento preventivo fue de 2 casos, mismos que fueron dictados por los jueces del Cuarto Juzgado de Familia de Piura, en donde se corrobora que la internación preventiva estaba debidamente motivada, esto en razón de que se cumplió en un 100% con la concurrencia de los tres presupuestos tales como a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad, criterios prescritos en el artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes.

Por su parte, el **CUADRO Y GRAFICO N° 13**, señala que los jueces de los juzgados de familia de Piura ordenaron un total de 9 sentencias con internamiento como sanción o medida socioeducativa de las cuales se observa que los jueces del 1JFP de las dos (02) sentencias que ordenan internamiento en ambas se cumple los cuatro presupuestos que exige la norma; asimismo, los jueces del 2JFP cumple con dichos presupuestos en sus seis (05) sentencias dictadas y finalmente los jueces del 4JFP cumple en sus dos (02) sentencias con los presupuestos que la normatividad exige al Juez de familia del Distrito de Piura al emitir sentencia; verificando de esta manera que las sentencias emitidas por los jueces de familia cumplen con los presupuestos exigidos por el artículo 235° CDN para dictar internamiento como una sanción privativa de libertad, igualmente, se corroboro que los

jueces de familia de Piura conocen a cabalidad cuales son los presupuestos para aplicar la medida socioeducativa de internamiento estableciendo de esta manera que la sanción como una medida excepcional mas no ordinaria.

3.1.2 VALIDACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LAS VARIABLES

Después de haber realizado la probanza de la hipótesis, pasaré a contrastar la investigación a fin de llegar a una conclusión y validar si la misma ha podido ser probada en su integridad, se concluye que no existe trasgresión al principio de excepcionalidad en la aplicación del internamiento como medida socio educativa o media coercitiva personal durante el periodo 2016 al 2017 por parte de los Jueces de Familia de Piura.

3.1.2.1 Variable Independiente

- a) V1: Implica la trasgresión del “Principio de Excepcionalidad”, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de ultima ratio.**

Después de haber consultado en la doctrina nacional, como internacional, analizando, asimismo, nuestra legislación nacional, en cuanto al tema de internamiento de adolescentes, y desarrollado la información y sentencias recabadas de los juzgados de familia de Piura, podemos concluir que el cumplimiento del principio de excepcionalidad está íntimamente ligado al principio de interés superior del niño lo que con lleva a determinar que la privación de la libertad del niño solo es factible como una medida de último recurso, toda vez que se ha podido identificar los siguientes factores y posturas:

- a) En la aplicación y ejecución de las sanciones destinadas a los adolescentes en conflicto con la ley penal se valora principalmente el interés superior del niño incluso por encima de la gravedad de los hechos; en tal sentido, para la aplicación y ejecución se deberá tener en cuenta los criterios técnicos elaborados por equipos profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas (psicología, pedagogía, etc.), ya que el juez por sí mismo, no dispone de suficientes elementos de juicio para poder escoger solución más adecuada a la problemática concreta del adolescente; es así que este principio es el que posterga la gravedad del hecho punible a un plano

secundario, situación distinta de la ocurre en el sistema penal de adultos ya que el delito cometido es precisamente el centro de la determinación de la pena, en este sentido, en el sistema penal dirigido a los adolescentes lo importante no es tanto el ilícito cometido sino la medida que más le interesa para sus necesidades educativas (García Huayama, 2016).

- b) Cabe mencionar, que el Tribunal Constitucional también ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en un sistema penal juvenil, (N° 03247-2008-PHC/TC , 2008) donde señala que: “...*el artículo 37 de la convención sobre los derechos del niño es posible determina el marco general de un sistema de responsabilidad penal juvenil al establecer **que la privación de la libertad del niño es posible como una medida de último recurso** ...*”.
- c) De igual manera, la sentencia recaída en el expediente N° 00174-2011-0-1903-JR-JP-02, expedido por el Segundo Juzgado de Familia de Maynas, describe lo siguiente: “... *lo cual debe de armonizarse con lo señalado en el art. 37° de la Convención de los Derechos del Niño, que ha precisado los parámetro mínimo que los Estados deberán respetar para el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal juvenil, donde señala que la detención, encarcelamiento o prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como una medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda, y las medidas que se adopten deben tener un fin garantista tendiente a la integración del niño o adolescente a la sociedad como parte de su derecho fundamental a su libre desarrollo que comprende su formación física, mental, espiritual, moral, psicológica y social a fin de que esta medida excepcional no afecte su proyecto de vida...*”
- d) Respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, **Reglas de Beijing** en su artículo 17, el mismo que trata sobre Principios Rectores de la Sentencia y la Resolución, en el primer acápite inciso c) establece que “*sólo se impondrá la privación de libertad personal en caso de que el menor sea condenado por un acto*

grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”⁷²

- e) Por otro lado, respecto a la Medida Socioeducativa de Internamiento, **Directrices de Riad⁷³**, refiere en su anexo, tema V, que habla de la Política Social, en el acápite 46, se señala que *“Sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los propios intereses del joven.”*
- f) Asimismo, la **Convención sobre los Derechos del Niño⁷⁴** entiende que la Medida Socioeducativa de Internamiento, es un Instrumento Internacional que recoge sobre Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 37, inciso b) refiere *“... La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevara a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda...”*
- g) Es así que, en cuanto a la variable independiente y de acuerdo con el objetivo general de investigación se analizó y determino que el internamiento como sanción o medida preventiva ordenado por los Jueces de Familia del Distrito Judicial de Piura durante el periodo del año 2017 ha venido siendo aplicada como una medida excepcional, razón por la cual se considera que las medidas restrictivas de libertad personal tienen carácter excepcional (como último recurso), y son ordenadas en el menor tiempo posible; es así que se llega a la conclusión que dicha medida se impone con respeto al principio de proporcionalidad y excepcionalidad pues se corrobora que existan suficientes elementos de convicción. En ese sentido debe traerse a consideración que, tratándose de la prisión preventiva, la Corte IDH ha destacado que ésta es la medida más severa que se le puede aplicar a quien se acusa de infringir una ley penal,

⁷² Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, aprobadas por la asamblea general de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985 e incluidas en la resolución N° 40/33

⁷³ Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

⁷⁴ adoptada (abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989)

entiéndase un adolescente infractor, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática⁷⁵. Además, ha señalado que la regla de la excepcionalidad de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma prevaleciente debe ser la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva(Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas., 2004)⁷⁶.

3.1.2.2 Variable Dependiente

b) V2: El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017.

Respecto a esta variable, después de haber realizado todo el análisis, hasta obtener una unidad de criterios, sobre todo en la doctrina; se ha podido llegar a determinar que, en el tema de internamiento en adolescentes, se advierte que el juez de Familia ordena el internamiento, por las siguientes razones:

- a) De tratarse de un internamiento como medida preventiva, deberá cumplir con lo prescrito en el artículo **209° del Código De Niños y Adolescentes**, Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1204, publicado el 23 septiembre 2015, tales como a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que el hecho punible cometido sea

⁷⁵ Corte IDH. Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228 y Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.

⁷⁶ Según la Corte IDH, estas medidas sustitutorias pueden incluir, inter alia, "la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones"

sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad; asimismo, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los literales b), c), d) y e) del artículo 235° o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa.

- b) Por otro lado, tratándose de un internamiento como sanción o medida socioeducativa, el juez debe cumplir con todo lo señalado en el artículo 235° **del Código de Niños y Adolescentes, donde cita lo siguiente:** La internación es una sanción privativa de libertad de carácter excepcional y se aplica como último recurso, siempre que se cumpla cualquiera de los siguientes presupuestos: a) Cuando se traten de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor de seis años, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas; b) Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y reiteradamente las sanciones de mandatos y prohibiciones o las privativas de libertad impuestas distintas a la de internación; c) La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos graves en un lapso que no exceda de dos años; d) Cuando según el informe preliminar del equipo multidisciplinario, el adolescente infractor sea considerado de alta peligrosidad, en atención a sus características, personalidad, perfil y demás circunstancias y rasgos particulares.
- c) Asimismo, deberá tomarse en cuenta el marco normativo internacional, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas de Beijing; Directrices de RIAD; Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad; y con ello fundamentar correctamente para imponer una debida aplicación en la emisión de una sentencia con Medida Socioeducativa de Internamiento.
- d) Cabe mencionar, además que el comité sobre los Derechos del Niño que en la observación general N° 10, resalta que: “... *la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino*

también a la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y las necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad, en particular a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no está en armonía con los principios básicos de la justicia de menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la convención... ”.

- e) De esta manera, se advierte que los Juzgados de Familia de Piura conocen a cabalidad cuales son los presupuestos para aplicar internamiento sea como medida socioeducativa o medida preventiva, estableciendo de esta manera que la sanción a aplicar ha sido dada como una medida excepcional mas no ordinaria. En esa misma línea se subraya el carácter excepcional del internamiento, haciendo referencia a un especial examen del sub principio de necesidad al aplicar el test de proporcionalidad el cual ciertamente ha venido siendo aplicado en todos los casos en los que se decide el internamiento preventivo. Por otro lado, los jueces de familia de Piura han venido cumpliendo con la obligación de aplicar aquellas sanciones que satisfagan con mayor claridad el interés superior del niño. Por ello, al evitar el internamiento preventivo en sus autos de apertura, se disminuyen la probabilidad desde aplicar el internamiento como sanción penal.

3.2. PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017, implica la trasgresión del principio de excepcionalidad, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de ultima ratio.

Tomando en cuenta lo comentado por la doctrina especializada, lo regulado en el derecho positivo tanto a nivel nacional como internacional, del análisis de la información y del estudio de las sentencias judiciales recabada de los Juzgados de Familia de Piura, podemos afirmar respecto a la hipótesis planteada lo siguiente:

Que, respecto a la doctrina de la protección integral apoyada con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se está determinando uniformización de criterios, misma que se ha

visto reflejada en la normatividad o legislación nacional pues con la **Ley N° 27337**, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, regula en sus capítulos III, IV, V, VI y VII del Título II del Libro IV, lo concerniente al Adolescente Infractor de la Ley Penal, siendo dicha norma modificada mediante **Decreto Legislativo N° 1204** (publicado el 23 de setiembre del 2015), Decreto Legislativo que modifica el Código de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución, en el cual, entre otras regulaciones, se establecen modificaciones a las medidas socioeducativas y a su ejecución, ampliando el plazo de duración de la sanción de internación; posteriormente, con el **Decreto Legislativo N° 1348**, publicado el 07 enero 2017, se aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes como norma integral, sistemática, autónoma y especializada en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Que respecto al reconocimiento de la sanción a aplicarse a los adolescentes que vulneran las normas penales, el Código de Niños y Adolescentes distingue dos grupos: quienes son menores de 14 años y quienes tienen entre 14 y 18 años. Respecto a los primeros, nuestra legislación únicamente contempla las llamadas **medidas de protección**, como podría ser disponer del cuidado de él o de la menor en su propio hogar, su participación en un programa con atención educativa o su incorporación a una familia sustituta. Todo ello siempre con la finalidad de proteger al menor y de cautelar sus derechos. Respecto a lo segundo, es decir quienes tienen entre 14 y 18 años, lo que nuestro ordenamiento prevé son las llamadas **medidas socioeducativas**, las que se imponen en caso de que el menor o la menor realizarán una conducta considerada un delito en nuestra legislación penal, como puede ser un homicidio, un robo, un secuestro, entre muchos otros.

Que, al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en su artículo 37. b) que los Estados partes velarán porque la detención, el encarcelamiento o la prisión de un adolescente se lleven a cabo como medidas de último recurso. Lo anterior constituye un reconocimiento de que los adolescentes son personas en desarrollo respecto de quienes los Estados están obligados a adoptar medidas especiales de protección, según el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El principio de excepcionalidad derivado de la norma anterior implica tanto la excepcionalidad de la privación de la libertad de forma

preventiva o como sanción, como la excepcionalidad de la aplicación del sistema de justicia juvenil o judicialización.

En particular su aplicación debe tener un carácter excepcional tal como lo señalan las múltiples normas internacionales que también garantizan la excepcionalidad de la privación de la Libertad en el caso de adolescentes, tales como las reglas 13 y 19 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”)⁷⁷ la regla 6 de las Reglas Mínimas sobre medidas no privativas de la Libertad (“reglas de Tokio”)⁷⁸ y la regla 17 de las Reglas Mínimas para la protección de los Menores Privados de Libertad (“Reglas de la Habana”).

Que, según lo señalado por el Dr. Juan Carlos García Guayama en el Libro Estudios de Justicia Penal Juvenil en el Perú, refiere que: “... *es claro que los principios que rigen la aplicación de la sanción privativa de la libertad, son como se mencionó, la excepcionalidad y la máxima brevedad posible. **la excepcionalidad debe traducirse en el respeto del principio de proporcionalidad entre la sanción y la gravedad del delito imputado y el grado de culpabilidad del adolescente.** Los delitos que se imputen a los adolescentes. Los delitos que se imputen a los adolescentes deben presentar cierto grado de gravedad, conforme a la jerarquía del bien jurídico afectado. En tanto que la máxima de la brevedad posible se refiere a la consideración relativa de la duración de la pena en función del tiempo vivido por un adolescente, que se diferencia de la escala temporal aplicada a los adultos, lo cual conduce a determinar un tope preciso a las penas privativas de la libertad en el caso del adolescente.* (el subrayado y negrita es nuestro).

Respecto a la motivación de la sentencias y autos de internamiento se tomara en cuenta la Casación 3251-2017, Sullana, la Corte Suprema de Justicia de la República Sala Transitoria de la República, refiere que: “ Que, siendo ello así, **corresponde evaluar las circunstancias de cada caso, como son la personalidad del adolescente, salud emocional, nivel educativo, familiar y sociocultural, etc. conforme al artículo 230 del Código de los**

⁷⁷ “... 13.1 Sólo se aplicará la prisión Preventiva como último recurso (...)” “19.1 el confinamiento de menores en establecimiento penitenciarios se utiliza en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible”.

⁷⁸ “6.1 En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso (...)”.

Niños y Adolescentes; que si bien la Sala de Vista pone énfasis en desarrollar la excepcionalidad de la medida socio-educativa de internación; sin embargo, no establece qué circunstancias rodean al menor infractor que lo haga merecedor de dicha excepcionalidad máxime si la conducta desplegada por este se encuentra tipificada por el artículo 176-A del Código Penal, la reprime con pena no menor de siete ni mayor de diez años, siendo ello así es menester evaluar lo precedentemente mencionado a los efectos de emitir un pronunciamiento acorde y con ello proceder a estimar o desestimar la demanda; por lo que corresponde amparar la causal procesal contenida en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú...”

Que, el presente trabajo de investigación resulta importante señalar las diversas posturas de la doctrina nacional, así como la postura del sistema de justicia a través de las diversas sentencias y jurisprudencias, donde se advierte que los jueces de familia, en un caso determinado, deberán analizar los factores de determinación que expone la ley en los artículos 235° y 209° del Código del Niño y Adolescentes (la existencia del daño, la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente, y el informe del equipo multidisciplinario), tal como se señalan en las siguientes:

- a) En la STC. Exp. 0084-2013-HC/TC, establece que: “Insuficiencia en la motivación, en relación a la aplicación de una medida socio educativa de internamiento; pero además se aprecia también un supuesto de motivación incongruente, pues la ausencia de valoración de las pruebas antes aludidas contratas o es incoherente con la invocación, en la parte final de la sentencia, del principio de interés superior del niño y la Doctrina de la Protección Integral, que buscan precisamente no sancionar al adolescente sino prevenir que vuelva a incurrir en actos similares y lograr un cambio en su conducta”
- b) En la STC. Exp. N° 03386-2009-PHC/TC: el Tribunal Constitucional “*considera indispensable destacar que la medida de internamiento Es la medida más severa que se le puede aplicar a un adolescente que se le imputa la comisión de una infracción penal, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad*”. (...)

“considera que ordenar el internamiento de un niño, niña o adolescente en un centro especializado, alejado de su domicilio y lejos de su familia, no solo viola el artículo 4º de la Constitución, sino que afecta el propio objeto; en concordancia artículo 37, inciso b) propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño, Es decir, sólo en casos excepcionales se permite una privación de la libertad pero bajo un régimen especial de acuerdo con la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales (reglas de Beijing, Directrices de Riad y las Reglas de la ONU para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

- c) En la STC. Exp. N° 03247-2008-PHC/TC emitida por el Tribunal Constitucional quien ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en sistema penal juvenil, señala que: *“el artículo 37 de la convención sobre los derechos del niño es posible determina el marco general de un sistema de responsabilidad penal juvenil al establecer que la privación de la libertad del niño es posible como una medida de último recurso, pero en establecimiento especiales separados del régimen para los adultos y por el menor tiempo posible, tomando en cuenta sus necesidades especiales”*, que sin duda, refiere que el Tribunal Constitucional también ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en sistema penal juvenil.

Es así que, respecto a la jurisprudencia, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional por medio de la STC antes citadas se ha determinado que **la medida de internamiento** es la medida más severa que se le puede aplicar a un adolescente al que se le imputa la comisión de una infracción penal, motivo por el cual **su aplicación debe tener un carácter excepcional y como una medida de último recurso**, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad; por lo que el juez debe tomar las medidas correctivas del caso para que contrarreste dichos criterios acaecidos en los procesos de adolescentes infractores. De esta manera, lo anterior permite, inferir que la medida de internamiento ha sido aplicada de manera excepcional por los jueces de los Juzgados de Familia de Piura durante el periodo 2017; es decir su aplicación viene siendo dada como medida de ultima ratio mas no como una medida ordinaria.

Que, en atención a los fundamentos señalados precedentemente, así como del análisis y evaluación de los cuadros y Gráficos N° 1, 2 y 3 se ha podido advertir un porcentaje del 2% del total de ingresos en los Juzgados de Familia de Piura en el periodo 2017 sobre materia de familia infracción (97% materia familia civil y 1% materia familia- tutelar). Asimismo, se obtuvo cerca del 1% respecto de la producción total tanto de autos de apertura como sentencias emitidos por los citados juzgados, lo cual es novedoso porque determinamos que en el distrito judicial de Piura se viene aplicando el principio de intervención mínima del proceso de adolescentes infractores contra la ley penal, en donde los órganos de derecho es decir los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial están considerando que antes del inicio de un proceso judicial que conlleva la exposición del adolescente infractor al ambiente difícil de aquel y la subsecuente imposición de una medida socioeducativa, debe descartar la procedencia de aplicación de cualquier otro mecanismo destinado a lograr la reeducación del infractor tras la comisión de la conducta reprochable, de acuerdo a la comprobación de la hipótesis de la presente investigación.

En la misma perspectiva, del análisis de los cuadros y gráficos N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se ha podido observar que los jueces de los cuatro juzgados de familia en materia familia infracción de Piura en un 100% están convencidos que la medida socioeducativa internamiento se debe aplicar como última ratio agotando todos los mecánicos procesales a favor del adolescente infracción y teniendo como base primordial el Interés superior del Niño; esto en razón de que la aplicación de sentencias se ha venido dando como una medida excepcional mas no como medida ordinaria pues de la producción de 47 autos de apertura que representa el 22% (cuadro N° 3) solo en 2 casos se ordenó el internamiento como medida preventiva; por otro lado, respecto de la producción de 24 sentencias que representa el 26% de la producción total de todos los juzgados de familia de Piura (cuadro N° 3), solo se dio internamiento como medida socioeducativa en 9 casos; pues en otros se optó por la aplicación de otras medidas socioeducativas por la de sanción de la privación de libertad; es así que nos lleva a determinar que el internamiento sea ordenado como medida preventiva o sanción (medida socioeducativa) siempre será de carácter excepcional y se aplicara como último recurso para el caso de adolescentes conforme a la comprobación de la hipótesis en cuanto a la aplicación de la medida de internamiento como una de última ratio.

Al respecto, se puede inferir que el internamiento determinado como medida preventiva por los Juzgados de Familia de Piura en un 100% es aplicado como una medida excepcional, misma que cumple con estar debidamente motivado, toda vez que constituye una medida cautelar alternativa, excepcional, a ser aplicada eventualmente en casos de ilícitos muy graves, limitada en el tiempo y breve. En palabras de Amoretti Pachas, estos principios implican que: "...la privación de la libertad queda justificada como última ratio, porque solo puede ser dictada cuando fuera absolutamente indispensable y necesaria en un proceso penal, siempre que no existan otros mecanismos menos radicales y, que de ninguna manera puede convertirse en una regla general ni mucho menos ser obligatoria, debiéndose adoptar únicamente cuando sedé cumplimiento a los fines que la justifican..."(AMORETTI PACHAS, 2008); es decir, que el carácter excepcional de la internación preventiva hace indispensable que solamente dure mientras subsistan los motivos que conllevaron a imponerla, que conforme a la cláusula *rebus sic stantibus* hace necesaria la reforma de la medida cautelar privativa de libertad cuando se alteren las circunstancias tomadas en consideración para su adopción, en tal sentido, el juez de oficio o a solicitud de parte, podrá reformar la internación preventiva cuando considere que han variado las condiciones que en su momento justificaron dicha medida, disponiendo la inmediata libertad del adolescente o una medida menos gravosa a la internación preventiva; en tanto que el internamiento como medida socioeducativa viene siendo aplicada como medida de ultima ratio atendiendo el carácter excepcional en un 100%; asimismo, se ha determinado del marco internacional que garantizan la excepcionalidad de la privación de la libertad en el caso de adolescentes; hay predominación por la aplicación de otras medidas socioeducativas distintas a la sanción de internamiento; por lo que la excepcionalidad viene hacer un principio que vela porque la detención, el encarcelamiento o la prisión de un adolescente se lleven a cabo como medidas de último recurso (art 37.b) de la CDN.

De otro lado, se aprecia que los jueces de familia de Piura pese a conocer cuáles son los criterios en su totalidad para emitir una sentencia y medida preventiva aplicando internamiento, ninguna sentencia cito todas las Normas Nacionales e Internacionales (la **Constitución Política del Perú; Código de los Niños y Adolescentes; Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas de Beijing; Directrices de RIAD; Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad**); con ello fundamentar correctamente para imponer una debida aplicación en la emisión de una sentencia con

Medida Socioeducativa de Internamiento; advirtiéndose de esta manera un desinterés por parte de los operadores del derecho en la ciudad de Piura en citar y fundamentar con normas internacionales que la medida de internamiento en favor de los adolescentes infractores se lleven a cabo como medida de último recurso

Dicha investigación, apunta también a corroborar si la emisión y aplicación de sentencia o autos de apertura a favor del adolescente infractor se realiza cumpliendo a cabalidad con los criterios y presupuestos para determinar internamiento sea como sanción o medida preventiva; así pues se ha podido inferir a través de los **GRÁFICOS Y CUADROS N° 12 Y 13**, que el total de autos con internamiento preventivo durante el periodo 2017, fue solo de 2 casos, asimismo, se evidencia del análisis de las sentencias y autos recabados de los archivos de los respectivos juzgados que la internación preventiva estaba debidamente motivada, esto en razón de que se cumplió en un 100% con la concurrencia de los tres presupuestos tales como a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad, criterios prescritos en el artículo 209° del Código de los Niños y Adolescentes; asimismo, tratando de un internamiento aplicado como medida socioeducativa, este también exige que la internación preventiva tenga carácter excepcional especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y que la misma sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa, tal como lo prescribe el artículo 235° del Código del Niño y el Adolescente; en virtud de ello, las 9 sentencias emitidas durante el periodo 2017, en ambas se ha cumplido en un 100% con cada uno de los presupuestos para determinar internamiento como medida socio educativa (Artículo 235 CDN) .

De allí pues, que dicha investigación a través del análisis de las sentencias y autos de apertura, nos lleva a determinar también que los Juzgados de Familia de Piura citan solo como normas de aplicación en sus actos procesales el Código de los Niños y Adolescente y las Reglas de Beijing para la imposición de una medida socioeducativa de Internamiento que representa el **77.7 %**; siendo lo correcto que se aplique tanto las Normas Nacionales como

Internacionales para el internamiento de un adolescente infractor; es decir se cite tanto la Constitución Política del Perú, Código de los niños y adolescente, Código Civil y la Convención sobre los Derechos del Niño, Directrices de RIAD y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Finalmente, la probanza de nuestra hipótesis a través del análisis de los documentos recabados de los juzgados de familia de Piura, determino que no se produce la trasgresión del principio de excepcionalidad, por parte de los jueces encargados de los Juzgados de familia de Piura, ya que de acuerdo a lo resuelto y ordenado por los mencionados juzgados en sus actos procesales (autos de apertura y sentencias) se corrobora que durante el periodo 2017 se aplicó el internamiento (medida socioeducativa o preventiva) estrictamente como medida excepcional mas no como medida ordinaria y eso también concurre con los autos de apertura, además, se verifico que los Juzgados han cumplido de los criterios y presupuestos para determinar internamiento sea como sanción o medida preventiva, de esta manera se comprueba que el internamiento ha sido ordenado como medida de ultima ratio y debidamente fundamentado, quedando confirmada que la hipótesis planteada primigeniamente no se condice con la probanza de esta investigación.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Los jueces de Familia de Piura en sus actos procesales (autos de apertura y sentencias) durante el periodo 2017 aplicaron el internamiento (medida socioeducativa o preventiva) estrictamente como medida de coerción excepcional y proporcional en su uso mas no como medida ordinaria y eso también concurre con los autos de apertura.

SEGUNDO: Los jueces de Familia de Piura han cumplido con los criterios y presupuestos para determinar internamiento sea como sanción o medida preventiva (artículos 209° y 235° del CDN), de esta manera se comprueba que el internamiento ha sido ordenado como medida de ultima ratio y debidamente fundamentado, quedando confirmada que la hipótesis planteada primigeniamente no se condice con la probanza de esta investigación

TERCERO: Los jueces de familia de Piura han venido cumpliendo con la obligación de aplicar aquellas sanciones que satisfagan con mayor claridad el interés superior del niño. Por ello, al evitar el internamiento preventivo en sus autos de apertura, se disminuyen la probabilidad desde aplicar el internamiento como sanción penal.

CUARTO: Los jueces de Familia de Piura pese a cumplir con los criterios exigidos por ley para determinar internamiento como medida preventiva, así como medida socioeducativa; en su fundamentación no se cita todo el marco internacional de resguardo que tiene un adolescente; tales como la Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas de Beijing; Directrices de RIAD; Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad.

QUINTO: De acuerdo a la producción total en materia familia infracción se verifico que en los jueces de los juzgados de familia se emitieron **20 autos finales que representa** un 22%, correspondientes a autos finales de prescripción, lo que nos lleva a determinar que los jueces de familia no están adoptando las medidas correspondientes que determinen que el adolescente que infringe la ley penal reciba todas las medidas o reglas de conducta necesarias para regular el desarrollo social del adolescente, buscando así impedir o evitar que el adolescente infractor continúe en contacto con factores que se entiendan contribuyan al incremento de su conducta ilícita, por el contrario permiten que la acción penal prescriba al

haber transcurrido con exceso el plazo dispuesto en la norma especial materia de niños y adolescentes , tras el cual se hace inoperante su poder punitivo y muestran al adolescente un débil sistema de justicia.

SEXTO: No resulta válido privar la libertad de un menor de edad bajo el único argumento de estar “fuera del control de sus padres” o debido al “ausentismo escolar”, pues estos fundamentos contra el menor de edad se establecen simplemente en razón de su condición (*status offences*) y, en general no debe dictarse internamiento preventivo alegando razones que no tienen carácter estrictamente procesal; verbigracia, la necesidad de educación, adicción a drogas, garantizar el sustento de adolescente o protegerlo frente a influencias nocivas.

SEPTIMO: La internación como medida preventiva de un adolescente solo debe proceder para el resguardo de una finalidad procesal concreta (asegurar el proceso) y cuando mediante otro tipo de medidas cautelares no se logren los fines procesales buscados con la limitación de libertad. Sólo estos fines procesales, es decir, los relacionados con la existencia de indicios racionales de la comisión de una infracción a la ley penal y el riesgo de obstruir o eludir la acción de la justicia pueden hacer proceder esta medida extrema.

OCTAVO: El Internamiento como medida socioeducativa aplicado en favor de un adolescente, debe ser siempre de naturaleza excepcional y como una medida de último recurso, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad.

NOVENO: Las últimas modificaciones en materia de justicia Penal juvenil han constituido fundamentalmente en el incremento de la gravedad de las sanciones penales especialmente en el caso del internamiento, que parcialmente afecta el principio de excepcionalidad de la aplicación de la medida de internamiento.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Regular un estándar más riguroso en la aplicación del internamiento que prevalezcan las medidas alternativas con las que dispone el juez de familia con la finalidad de asegurar que los adolescentes en conflicto con la ley penal tengan un tratamiento proporcional y razonable a la infracción cometida

SEGUNDO: La Corte Superior de Justicia de Piura en coordinación con la administración de los Juzgados de familia de Piura se exija que todos los procesos en materia familia infracción se prioricen y se desarrollen dentro del plazo legal, evitándose esta manera la configuración de la prescripción que priva al adolescente de una medida socio educativa o sanción para el aprendizaje de algún oficio o para la internalización de algún valor ético.

TERCERO: Los Jueces de Familia de Piura citen en las sentencias y autos de apertura que sobre el internamiento normatividad internacional, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas de Beijing; Directrices de RIAD; Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad.

CUARTO: Elaborar políticas de nivel regional que comprometan a empresarios; en la creación de espacios laborales y ocupacionales que acojan a adolescentes infractores rehabilitados.

QUINTO: Las Universidades Públicas y privadas de la región Piura deben centrar su interés en la implementación de facultades, escuelas y carreras en especialidades en prevención y tratamiento de niños y adolescentes infractores penales.

SEXTO: La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, conjuntamente con el Colegio de Abogados deben aunar esfuerzos para proporcionar acciones de capacitación, actualización y especialización de los operadores del derecho, especialmente en temas relacionados en los adolescentes infractores de la ley penal con medida socioeducativa de Internamiento, con el objetivo de solucionar el problema de afectación en la medida socioeducativa de Internamiento de los adolescentes infractores por la comisión de incumplimientos o desconocimiento en la aplicación normativas.

SEPTIMO: Los organismos y entes de control del Poder Judicial deben adoptar disposiciones jurídicas estrictas para garantizar que cuando se prive a un adolescente de su libertad, los juzgadores revisen periódicamente si los motivos que originariamente fundaron la internación preventiva aún subsisten. Si la resolución es denegatoria, dicha autoridad en su decisión deberá expresar las circunstancias concretas que permitan presumir fundadamente, que persiste el peligro de fuga o enunciar las medidas probatorias que resten cumplir su imposibilidad de producirlas con el niño imputado en libertad

BIBLIOGRAFÍA

GARCIA HUAYAMA, JUAN CARLOS, SOLAR VILLALTA, ANA MARIA, JASTMAC NADEIRA MERINO GUERRERO, MARIA ELVIRA DEL ROSARIO ALVARADO REYES, JUANA ELVIRA ALVARADO REYES, CHRISTIAN HERNANDEZ ALARCON, “Estudios de justicias Penal Juvenil en el Perú, Grupo Editorial Lex & Iuris

HERNANDEZ ALARCON, Christian “Salidas alternativas y Justicia Restaurativa” Gaceta “Penal y procesal” tomo 35 (mayo 2012) P. 232-252

ORNOSA FERNÁNDEZ, María Rosario “Derecho Penal de Menores” editorial Bosch S.A, 2007

D’ ANTONIO, Daniel Hugo, “ El menor ante el delito”, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma Buenos Aires- Argentina 2004

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en el informe “justicia juvenil y derechos humanos en las américas” de del 13 de julio del 2011.

PLACIDO VILCACHAGUA, Alex F. “manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Instituto pacifico, lima 2015, 905 paginas.

DEL RIO LABARTHE, Gonzalo: “La prisión preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal. Presupuestos, procedimiento y duración”, *Revista Actualidad Jurídica*, N° 160, marzo del 2007, p. 160.

AMORETTI PACHAS, Mario. *Prisión Preventiva*. Magna Editores, Lima, septiembre del 2008. p. 127.

CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas*

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (en adelante “la Corte Interamericana” o “la corte IDH”)

CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES- LEY N° 27337

BRAVO GAMARRA, Daysi. “Adolecente infractor en el Perú”, Juristas Editores, Lima 2014.302 pág.

CHUNGA LAMONJA, Fermín G. “Adolescentes Infractor y la ley penal”, Editores Grijley, Lima 2007,293pag.

HERRERA ZURITA, Luis German; “La Ineficacia de las Medidas Socioeducativas aplicadas al adolescente infractor, ocasiona reincidencia en el cometimiento de delitos en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, en el primer semestre del año 2009”, en el repositorio de la UNIVERSIDAD Técnica de Ambato, Ambato Ecuador, 2010, p.23.

BAÑOL BETANCUR, Alejandro “Justicia Restaurativa, una dinámica social” Librería Jurídica Sánchez, Primera Edición, Medellín, 2006.

CARRANZA Elías y MAXERA Rita, “El Control Social sobre niños, niñas y adolescentes en América latina” en La Niñez y La Adolescencia en conflicto con la Ley Penal. Un nuevo Derecho Penal Juvenil, Un derecho para la Libertad y Responsabilidad PNUD, El Salvador, 1995.

LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MENORES (Reglas de Beijing) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985, Las Reglas de Beijín, (RB)

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CIDN) del 20 de noviembre de 1989. Especialmente los artículos 12, 37 y 40.

LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD, adoptada en la Asamblea General en su resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990. (RNUPMPL).

DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL (directrices de Riadh) Adoptadas y Proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990 (DR)

REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD (reglas de Tokio) adoptadas por Resolución 45/110 de la Asamblea General.

APÉNDICE

Honorio Jose Espinoza Donayre

C = PE

Signature Date and time:
21/08/2009 12:01:42



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 03386-2009-PHC/TC
LA LIBERTAD
SANTOS EULALIA ARMAS MEDINA
A FAVOR DE E.M.C.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Santos Eulalia Armas Medina, en representación de su hija adolescente E.M.C.A., contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 146, su fecha 13 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de abril de 2009, la demandante interpone demanda de hábeas corpus a favor su hija adolescente E.M.C.A., contra el juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad, don Javier Lara Ortiz, por vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y de defensa (fojas 13 a 15).

Refiere que mediante la resolución judicial N° 1 del 11 de abril de 2009 (fojas 6 a 7), el juez demandado dispone la medida socioeducativa de internamiento preventivo contra E.M.C.A. por su presunta autoría en el robo de un vehículo de taxi, lo cual constituye en una infracción penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado (fojas 7). Tomando como base lo establecido en los artículos 208° y 209° del Código de los Niños y Adolescentes, el juez determinó que el internamiento preventivo sea cumplido en la ciudad de Lima (fojas 7). Esta medida fue confirmada por la Primera Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (fojas 9 a 11), mediante resolución del 17 de abril de 2009.

Sostiene la demandante que la referida resolución ha sido emitida sin tomar en cuenta que su hija es una adolescente de catorce años de edad, estudiante del tercer año de secundaria, sin antecedentes policiales, penales y judiciales, y que tiene domicilio



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

conocido en la ciudad de Trujillo. De forma complementaria, afirma que su hija abordó el taxi sin saber que este era robado cuando fue intervenida por la Policía Nacional (fojas 14). A su vez, denuncia que al momento de presentar la demanda de hábeas corpus, habían transcurrido doce días sin que se haya tomado las declaraciones de su hija ni de ella como madre (fojas 14), por lo que demanda la nulidad de la resolución judicial N° 1 que ordena su internamiento y la puesta en libertad de su hija.

El 28 de abril de 2009, el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo declara improcedente la demanda (fojas 110 a 114) por considerar que la pretensión de doña Armas Medina implica la realización de actos de investigación que le corresponden al juez penal, lo cual no es susceptible de realizar en un proceso de hábeas corpus (fojas 113).

Esta decisión es confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante resolución del 13 de mayo de 2009 (fojas 146 a 149), afirmando que no se advierte una violación al debido proceso por parte del juez penal y que se ha tomado en cuenta el interés superior del niño en todas las etapas del procedimiento (fojas 148). En el recurso de agravio constitucional (fojas 155 a 157), la demandante se ratifica en el contenido de su demanda.

FUNDAMENTOS

§1. Delimitación de la controversia

1. De acuerdo con los hechos que han quedado expuestos en los antecedentes, en el presente caso la controversia exige determinar si lo actuado por la Primera Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, al confirmar la medida de internamiento preventivo de la adolescente por robo agravado, estuvo de acuerdo con los derechos a la tutela procesal efectiva y de defensa reconocidos en los incisos 3) y 14) del artículo 139° de la Constitución y con el Código de los Niños y Adolescentes, especialmente en lo dispuesto en el artículo 212°, relativo a la práctica de las diligencias judiciales.
2. De forma complementaria, este Tribunal Constitucional estima necesario analizar si la decisión del juez de disponer que la adolescente cumpla con la medida de internamiento preventivo en el Centro Juvenil Santa Margarita de la ciudad de Lima, cuando está demostrado que tiene su domicilio en la ciudad de Trujillo, está acorde con la doctrina de protección integral y del interés superior del niño reconocido en el artículo 4° de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño¹.

¹ Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 25278 del 3 de agosto de 1990.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Si bien esto no ha sido solicitado por la demandante, este Tribunal puede pronunciarse sobre este aspecto en virtud del principio de suplencia de queja, el cual se encuentra implícito en nuestro derecho procesal constitucional por medio de los artículos II y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. A través de la suplencia de la queja, este Colegiado puede efectuar correcciones sobre el error o la omisión en la que incurre el demandante en el planteamiento de sus pretensiones, tanto al inicio del proceso como en su decurso.

Por lo tanto, este Tribunal deberá analizar el contenido del artículo 211° del Código de los Niños y Adolescentes y determinar si su aplicación constituye en una violación al inciso 17) del artículo 25° del Código Procesal Constitucional, referido al derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena, lo cual constituye en un hábeas corpus correctivo.

§2. El debido proceso y el derecho a la tutela procesal efectiva

4. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1) que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y ser objeto de protección, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus.
5. El artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la tutela procesal efectiva. En tal sentido, es posible inferir que el presente proceso constitucional procede siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la libertad individual, o sobre algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vulneración repercuta sobre la referida libertad.
6. El derecho a la tutela procesal efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución. Como este Tribunal ha establecido anteriormente, si bien la tutela procesal efectiva aparece como principio y derecho de la función jurisdiccional², es claro que se trata de un derecho

² Ver: Tribunal Constitucional. Exp. N° 04080-2004-AC/TC. Sentencia del 28 de enero de 2005. Fundamento 14.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales un derecho a favor de toda persona para: (i) acceder de manera directa o a través de representante ante los órganos judiciales; (ii) ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley; (iii) obtener una decisión razonablemente fundada en derecho; y (iv) exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida.

A su vez, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.

7. En el presente caso, la demandante considera que la actuación del juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza resulta violatoria del derecho a la tutela procesal efectiva de su hija, dado que al momento de presentar la demanda no se le había tomado declaración en el proceso que se le seguía ante el sistema de administración de justicia especializada en el niño y el adolescente, lo cual constituiría en una directa violación de lo dispuesto en el artículo 139°, inciso 3° de la Constitución; así como del derecho de defensa reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la Carta.
8. Sin embargo, lo que la demandante no toma en cuenta es que mediante resolución de fecha 11 de abril de 2009, es decir, el mismo día que en que se ordenó la medida socioeducativa de internamiento preventivo, el juez demandado ordenó la suspensión y reprogramación de la diligencia para la toma de la declaración judicial de E.M.C.A. dado que la adolescente se presentó a la audiencia sin la presencia de un abogado defensor (fojas 77).

Mediante el Oficio N° 527-2009-0209-2009-JM-FA-MBJLE-RACHR, del 11 de abril de 2009 (fojas 97), se programó para el 15 de mayo de 2009 la diligencia única de esclarecimiento de los hechos prevista en el artículo 212° del Código de los Niños y Adolescentes.

Con posterioridad a la resolución del juez que posterga la diligencia para la toma de la declaración de E.M.C.A., doña Armas Medina presentó un escrito, de fecha 14 de abril de 2009, solicitando que se reconozca a don William Vega Cruzado



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

como el abogado defensor de su hija (fojas 95), siendo dicha petición aceptada mediante la resolución N° 2 del 15 de abril de 2009 (fojas 96).

9. Con base a lo actuado en dicho proceso, este Tribunal puede concluir que el juez demandado ha actuado observando el interés superior del niño, puesto que si hubiera realizado la toma de declaración de la adolescente E.M.C.A. sin la presencia de un abogado defensor, habría incurrido en una violación directa del artículo 139°, incisos 4) y 13) de la Constitución, referido al derecho a la tutela procesal efectiva y a la defensa. Asimismo, dado que la persona procesada es una adolescente, hubiese contravenido el artículo 4° de la Constitución, el cual reconoce la obligación especial del Estado de proteger al niño.
10. Desestimada dicha pretensión, corresponde a este Tribunal determinar si es que la reprogramación de la diligencia para la toma de declaración de la adolescente se efectuó de acuerdo con lo establecido en la ley. Con relación a las diligencias y el plazo para sus realizaciones, el artículo 212° del Código de los Niños y Adolescentes establece lo siguiente:

Artículo 212.- Diligencia

La resolución que declara promovida la acción señalará día y hora para la diligencia única de esclarecimiento de los hechos, la que se realizará dentro del término de treinta días, con presencia del Fiscal y el abogado. En ella se tomará la declaración del agraviado, se actuarán las pruebas admitidas y las que surjan en la diligencia, el alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del abogado defensor y su autodefensa.

De la norma glosada se advierte claramente que el juez competente puede programar, hasta dentro de un plazo de treinta días, la diligencia única de esclarecimiento de los hechos luego de promovida la acción penal. El propio Código determina que en esta audiencia se procederá a tomar la declaración de la persona procesada, con la presencia de su abogado. Por lo tanto, dado que la adolescente E.C.M.A. no contaba con un defensor de oficio en la audiencia que se iba a realizar el 11 de abril de 2009, la reprogramación para el 15 de mayo de 2009 no contraría lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, especialmente si se toma en cuenta que la demandante sólo pudo acreditar un abogado defensor el 15 de abril de 2009.

11. Siendo ésta una facultad establecida por la ley, este Tribunal Constitucional no podría concluir que la Sala demandada ha cometido una violación al debido proceso ni a la tutela procesal efectiva por haber actuado en el marco de lo establecido en el artículo 212° del Código de los Niños y Adolescentes.
12. Es por ello que, dado que la reclamación de la demandante no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

aplicación el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser rechazada en ese extremo.

§3. El Código de los Niños y Adolescentes, el cumplimiento de las medidas de internamiento y la doctrina de protección integral

13. Como este Tribunal ha establecido anteriormente³, un sistema de responsabilidad penal juvenil es compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, siempre y cuando dicho sistema tenga una naturaleza garantista y sus disposiciones guarden conformidad con la doctrina de protección integral reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política.
14. En ese sentido, el artículo 37º de la Convención sobre los Derechos del Niño ha precisado los parámetros mínimos que los Estados deberán respetar para el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal juvenil. En estas situaciones, la Convención establece de forma clara, expresa y manifiesta que la privación de la libertad debe ser la medida de último recurso. En lo que concierne al caso que nos ocupa, se debe resaltar los siguientes principios, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano:
 - a) Ningún niño o niña será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.
 - b) Todo niño o niña privado de su libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales.
15. Si bien se permite la privación de la libertad del niño y adolescente en colisión con la ley penal como una medida excepcional, la adecuada implementación de un sistema de responsabilidad penal juvenil debe contar un mecanismo garantista que tenga como eje la reintegración del niño y adolescente a la sociedad. Ninguna medida de internamiento podrá implicar la denegatoria en el acceso al estudio o al servicio básico de salud y nutrición del niño y adolescente y, mucho menos, el quiebre del vínculo familiar.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En nuestro país, el Libro IV del Código de los Niños y Adolescentes regula el sistema de administración de justicia especializada en el niño y el adolescente, estableciendo un procedimiento especial determinando en el caso de infracción a la ley penal.

16. Como ha quedado demostrado en el proceso, doña Armas Medina solicita la nulidad de la Resolución N° 1 del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza, la cual fue confirmada por la Primera Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante resolución del 17 de abril de 2009 (fojas 9 a 11).

Si bien la demanda es improcedente en el extremo que solicita la libertad por violación de los derechos a la tutela procesal efectiva y de defensa, se debe analizar la resolución del juez que ordena la medida socioeducativa de internamiento preventivo contra E.M.C.A. en el Centro Juvenil Santa Margarita de la ciudad de Lima, encargándose su custodia temporal al Hogar la Niña de la ciudad de Trujillo hasta que se viabilice su traslado oficial (fojas 7).

17. Es pertinente reiterar que la investigación penal se origina por el robo de un taxi en la ciudad de Trujillo en el cual se presume la responsabilidad penal de la adolescente E.M.C.A. junto con otros implicados, de acuerdo con la solicitud de apertura del proceso de contenido penal presentada por la Fiscalía Provincial Mixta de La Esperanza, de fecha 10 de abril de 2009 (fojas 68 a 75).

De forma complementaria, se ha acreditado en el proceso que E.M.C.A. es menor de edad (fojas 5), que vive con sus padres, que tiene su domicilio en la ciudad de Trujillo (fojas 82), y que es una estudiante de tercer grado de secundaria con buenas notas y buen desempeño académico (fojas 83 a 84).

18. El artículo 209° del Código faculta al juez a imponer la medida de internamiento preventivo, siempre y cuando concurran los siguientes hechos: (i) que existan suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o partícipe de la comisión del acto infractor; (ii) que exista un riesgo razonable de que el adolescente eludirá el proceso; y (iii) que haya un temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. A su vez, el artículo 211° del Código regula lo relativo a las medidas de internación preventiva, consagrando lo siguiente:

Artículo 211.- Internación.-

La internación preventiva se cumplirá en el Centro de Observación y Diagnóstico del Poder Judicial, donde un Equipo Multidisciplinario evaluará la situación del adolescente. El Estado garantiza la seguridad del adolescente infractor internado en sus establecimientos.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

19. Como se puede constatar, el artículo 211° del Código simplemente determina que la medida de internación preventiva se llevará a cabo en el Centro de Observación y Diagnóstico del Poder Judicial, sin establecer un parámetro mínimo que permita determinar en qué centro se cumplirá con dicha medida y bajo qué condiciones se efectuará.
20. Sobre este aspecto, el Tribunal considera que debe existir un estándar más riguroso en la aplicación de medidas de internamiento, en el que prevalezca las medidas alternativas a la internación de las que dispone el juez, con la finalidad de asegurar que los adolescentes en conflicto con la ley penal tengan un tratamiento proporcional y razonable a la infracción cometida.
21. En el escrito de contestación de la demanda de hábeas corpus, de fecha 24 de abril de 2009, el juez demandado justifica su decisión de enviar a la adolescente a la ciudad de Lima aduciendo que en Trujillo no se cuenta con un centro de internamiento para adolescentes mujeres (fojas 106), habiendo solo el Hogar de la Niña para su custodia temporal.

Por lo tanto, se puede concluir que el juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza ordenó la medida cuestionada al amparo del artículo 211° del Código de Niños y Adolescentes.

22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”⁴.
23. Sobre este punto, frente a los niños y adolescentes privados de su libertad, la posición de garante del Estado adquiere una mayor responsabilidad. Los artículos 6° y 27° de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar, “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”, lo que abarca su formación física, mental, espiritual, moral, psicológica y social a fin de que esta medida excepcional no afecte su proyecto de vida.
24. Este Tribunal considera indispensable destacar que la medida de internamiento es la medida más severa que se le puede aplicar a un adolescente que se le

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso “Instituto de Reeducción del Menor” vs. Paraguay*, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, párr. 159; y *Caso de las Penitenciarías de Mendoza*, resolución del 18 de junio de 2005, párr. 7.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

imputa la comisión de una infracción penal, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad.

25. En el caso concreto, el traslado de la adolescente E.M.C.A. de la ciudad de Trujillo a la ciudad de Lima constituye una práctica habitual por parte de los jueces encargados de aplicar la justicia penal juvenil⁵. Sin embargo, este Tribunal advierte que ni los jueces, ni los organismos de la sociedad civil encargados de velar por los derechos del niño, han estudiado con el debido cuidado el impacto que este tipo de traslados tiene sobre el niño y su familia.
26. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo “la ubicación de los Centros Juveniles en algunas ciudades del país origina que existan zonas en las que en el caso de que un adolescente deba ser internado en un centro juvenil por una orden judicial, éste se encuentre situado a una distancia considerable, lo que origina que las visitas que sus familiares realicen sean escasas, rompiendo de esa forma, el mantenimiento del vínculo familiar. En dichos supuestos, el derecho a la unidad familiar del adolescente se ve seriamente restringido”⁶.
27. Se aprecia pues que la Defensoría del Pueblo, al concluir que este tipo de medida afecta la unidad familiar, se ha limitado a efectuar una escueta reseña del problema pero no formula una propuesta concreta e integral para resolver una situación que no solo afecta los derechos del niño reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, sino que demuestra la inexistencia de una política pública específica sobre la materia que sea acorde con la doctrina del interés superior del niño.
28. Atendiendo a ello, este Tribunal considera que ordenar el internamiento de un niño, niña o adolescente en un centro especializado, alejado de su domicilio y lejos de su familia, no solo viola el artículo 4º de la Constitución, sino que afecta el propio objeto y propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Considerando que el inciso 17) del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que procede el hábeas corpus para la protección del derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena, la presente demanda deberá ser fundada en este extremo.

⁵ Ver: Defensoría del Pueblo, *La situación de los adolescentes infractores de la ley penal privados de libertad*. Lima, Informe Defensorial N° 123, 2007.

⁶ *Ibidem*, p. 72.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

29. Si bien en el caso concreto el juez demandado ha actuado conforme a lo dispuesto en el artículo 211º del Código de los Niños y Adolescentes, la práctica de los jueces ha sido errónea y demuestra un rezago de la doctrina de situación irregular, puesto que decidir en qué ciudad se deberá cumplir la medida de internación supone considerar al niño y adolescente como un objeto y no como un sujeto de derecho.

30. Por lo tanto, este Tribunal debe declarar fundada la demanda de hábeas corpus en lo referido a que la Resolución del 17 de abril de 2009 de la Primera Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirma la resolución del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza de ordenar el cumplimiento de la medida de internación de E.M.C.A. en el Centro Juvenil Santa Margarita de la ciudad de Lima, vulnera el artículo 4º de la Constitución aplicable a los niños y adolescentes privados de su libertad.

Por lo tanto, este Tribunal debe ordenar el traslado inmediato de la adolescente E.M.C.A. a la ciudad de Trujillo, a fin de que pueda cumplir con la medida de internamiento en la ciudad donde habitan y residen tanto ella como sus padres.

31. Adicionalmente, debe disponer que en el caso que el juez competente imponga a E.M.C.A. una medida socioeducativa de privación de la libertad, contemplada en los artículos 235º, 236º y 237º del Código de los Niños y Adolescentes, esta medida será cumplida en la ciudad de Trujillo.

32. Finalmente, este Tribunal deberá ordenar a los jueces competentes que imparten justicia especializada en el niño y el adolescente se abstengan de imponer medidas de internamiento o medidas socioeducativas que impliquen el traslado del niño a una ciudad ajena a su domicilio y entorno familiar.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **FUNDADA** la demanda, porque se ha acreditado que la decisión del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad, de ordenar el cumplimiento de la medida de internamiento preventivo de la adolescente E.M.C.A. en el Centro Juvenil Santa Margarita de la ciudad de Lima, viola el artículo 4º de la Constitución aplicable a los niños y adolescentes privados de su libertad.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Declarar **NULA** la Resolución del 17 de abril de 2009 de la Primera Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el extremo que confirma la orden de traslado de la adolescente E.M.C.A. a la ciudad de Lima para cumplir con la medida de internamiento prevista en el artículo 211° del Código de los Niños y Adolescentes.
3. **ORDENAR** al juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza y a la Gerencia de los Centros Juveniles del Poder Judicial, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia, el traslado de la adolescente E.M.C.A. a la ciudad de Trujillo para que cumpla con la medida de internamiento en dicha ciudad.
4. **ORDENAR** al juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito La Esperanza y a la Gerencia de los Centros Juveniles del Poder Judicial que, en el caso que se le imponga a la adolescente E.M.C.A. una medida socioeducativa de privación de la libertad, contemplada en los artículos 235° 236° y 237° del Código de los Niños y Adolescentes, esta sea cumplida en la ciudad de Trujillo.
5. **EXHORTAR** a la Presidencia del Poder Judicial para que instruya a la Gerencia de los Centros Juveniles del Poder Judicial que disponga a todos los jueces competentes para impartir justicia especializada en el niño y el adolescente, de abstenerse de imponer medidas de internamiento o medidas socioeducativas que impliquen el traslado del niño a una ciudad ajena a su domicilio y entorno familiar.
6. Que constituye principio de interpretación constitucional que las medidas de internamiento preventivo deberán aplicarse en los términos establecidos en el Fundamento N° 32 de la presente sentencia.
7. **NOTIFICAR** a la Defensoría del Pueblo para que realice el seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia.
8. Declarar **IMPROCEDENTE** en lo demás que contiene la demanda de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

Lo que certifico:

la presente resolución en la fecha al haberse encontrado los trabajadores del Poder Judicial en Huelga a partir del 24 de Octubre de 2017, reiniciando sus labores el 02 de Noviembre de 2017.

Moisés. Ovario. Paredi

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
Cuarto Juzgado de Familia de Piura

JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 05060-2017-0-2001-JR-FP-04

MATERIA : INFRACCION CONTRA EL PATRIMONIO

ACUSADO : ESPINOZA ORTIZ JACKELINE ROSARIO

DEFENSORA : ARAUJO CASTILLO LUZ ELENA

MANDANTE : PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL DE, FAMILIA DE PIURA

ACTUADOR : ORTIZ RODRIGUEZ, MARCOS JOEL

PREVIADO : REYES FARFAN, OSCAR ARMANDO

AUTO DE PROMOCION DE LA ACCION PENAL

Resolución Nro. Uno (01)
del 27 de noviembre de
2017 mil diecisiete.-

AUTOS Y VISTOS.- con la denuncia penal No. 34-2017-MP-1°FPF, remitida por la Fiscalía de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Piura y demás recaudos que se acompañan; **Y CONSIDERANDO:**

LOS HECHOS:

La Representante del Ministerio Público solicita que se promueva acción penal a favor del adolescente **MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ** (17), nacido el 02 de julio de 1999, hijo de José Hilario Ortiz Gonzáles y doña Milagros Rodríguez Chero; por la presunta infracción contra el Patrimonio: **ROBO AGRAVADO SEGUIDO DE MUERTE**, en calidad de **AUTOR conjuntamente con personas adultas**, en agravio de **OSCAR ARMANDO REYES FARFAN** (23); existiendo elementos de convicción sobre la responsabilidad del adolescente en los hechos que se investigan, por lo que la presente infracción debe ser investigada y profundizada a nivel judicial. Se le imputa, al adolescente **MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ** que el día 09 de abril de 2016, en horas de la noche conforme actas de intervención policial se tomó conocimiento de la muerte de Oscar Armando Reyes Farfán, habiéndosele encontrado a un costado de la plataforma del Asentamiento Humano Las Dunas – Ciudad del Sol – 26 de Octubre, tendido en el suelo con un impacto de arma de fuego en la cabeza y que al ser trasladado al Hospital Santa Rosa se diagnosticó “persona sin signos vitales”. Se obtiene información de los vecinos del lugar, quienes señalaron como presunto responsable al adulto Julio Navarro Díaz, así también que el agraviado habría sido víctima de robo de sus pertenencias y que al oponer resistencia fue victimado. El certificado de necropsia emitido, establece que la causa de fallecimiento del agraviado ha sido: *laceración encefálica múltiple. Fractura craneal múltiple. Herida contusopunzante en cabeza. Agentes causantes: proyectil de arma de fuego.* El testigo Federico Francisco Mogollón Calderón rindió declaración señalando que ese día (09 de abril de 2016) pasaba por el callejón entre al A.H. las Dunas y el A.H. Ciudad del Sol y vio que “Peche”, “BUCHÉ”, “Desmuelado”, y “Negro Andy” tenían contra la pared a Oscar Reyes Farfán, lo estaban pateando, metiendo puñetes y le rebuscaban entre las ropas hasta que Oscar cae al

[Firma]
Juez
Cuarto Juzgado de Familia de Piura

[Firma]
Abog. Luz Elena Araujo Castillo
SECRETARIA JUDICIAL
Cuarto Juzgado de Familia de Piura

lo y pide auxilio y le segúan pegando, el "Peché", el "BUCHE" y el "Negro Andy" lo matan a Oscar y Julio le da dos disparos, cerca de ellos había un rúm de ladrillos, en donde "Peché" coge un ladrillo y le tira a Oscar en la cabeza, rematándolo en el suelo. Además informó que: el Desmuelado se llama Julio Navarro Díaz, "Peché" se llama Wilmer Sánchez Albercá, "BUCHE" se llama JOEL ORTIZ RODRIGUEZ y el "Negro Andy" se llama Anderson Paiva Calle. Sobre las características de JOEL ORTIZ RODRIGUEZ dijo que es de textura delgada, medio pelucón, tez trigueña, no habla muy bien; que el BUCHE está en el Centro Juvenil por droga y que apreció los hechos a una distancia de cinco a ocho metros donde había alumbrado público. También refiere el testigo que cuando Oscar ya estaba tirado en el piso herido de bala, JOEL MARCOS RODRIGUEZ, a quien le dicen el BUCHE también le lanzó piedras a Oscar, desde una corta distancia de dos metros aproximadamente, le tiraba piedras a la cabeza conjuntamente con Gerónimo.

DEL JUZGAMIENTO JURÍDICO:

Los hechos a investigar tipifican la infracción a la ley penal CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO SEGUIDO DE MUERTE, de conformidad con el artículo 189° del Código Penal concordando con los incisos 2), 3) y 4) del primer y último párrafo del citado artículo que establece el tipo base del ilícito, el primero de ellos señala que constituye robo: "el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para provecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física"; el segundo de los artículos prevé agravantes y sanciona con "pena no mayor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: inciso 2) durante la noche, inciso 3) a mano armada, inciso 4) con el concurso de dos o más personas, la pena será de cadena perpetua cuando (...) como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima (...)". Por su parte el artículo 23° del Código Penal señala como co-autor al que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente; presupuesto que se reúne en el presente pues en los hechos participó el adolescente que fue intervenido e identificado, junto con otros adultos. Resultando aplicables los dispositivos legales en concordancia con el artículo 207 y 184 del Código de los Niños y de los Adolescentes;

DE LA CAUSA PROBABLE:

De la revisión de los actuados se refleja una causa probable dado que ha quedado establecido que existen elementos razonables de la comisión de la infracción materia de investigación, que vincula al adolescente, quien han sido debidamente individualizado y verificándose que la infracción penal no ha prescrito; a lo que se agrega que la conducta investigada posee vicios de antijuricidad pues colisiona con las normas sociales de convivencia que impone el Derecho, no asistiéndole ninguna causa legal de justificación, siendo así concurren los requisitos para iniciar la promoción de la acción correspondiente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 208° y 212° del Código de los Niños y Adolescentes, en cuyo proceso se acopian las pruebas para ratificar o desvirtuar la sindicación hecha por el Representante del Ministerio Público, sin que ello importe vulnerar el principio de presunción de inocencia que le asiste a toda persona.

DEL PEDIDO DE INTERNAMIENTO:

El artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes establece que la internación preventiva, debidamente motivada, sólo puede decretarse, a partir de los primeros recaudos, siempre que sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo; b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro

[Firma]
Jefe de la Unidad de Investigación
Código de los Niños y Adolescentes
Código Penal

[Firma]
Abog. Aux. de Trabajo Castillo
SECRETARÍA JUDICIAL
Código de los Niños y Adolescentes
Código Penal

c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia u obstaculizará la averiguación de la verdad. El Juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de los numerales b), c), d) y e) del artículo 235 o si hubiere mediado violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre catorce y menos de dieciséis años, y sólo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa.

En ese sentido, en relación al primer requisito se puede apreciar los siguientes elementos de convicción: i) un CD en el que se encuentra grabado un video de la persona del adolescente Joel Marcos Ortiz Rodríguez en la cual señala como autor del disparo del agraviado a la persona de Julio Navarro Diaz, alias "desmuelado", habiendo participado también Anderson Stibar Paiva Calle, alias "negro Andy", Julio Aguilar, alias "Loco julio", quien fue el que remató al agraviado tirándole ladrillos en la cara cuando el fallecido se encontraba en el suelo tirado; ii) la declaración testimonial de Federico Francisco Mogollón Calderón ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Piura, quien manifestó que el 09 de abril de 2016 pasaba por el callejón entre el AA.HH. Las Dunas y el A..HH. Ciudad del sol y vio que "Peche", "Buche", "Desmuelado" y "Negro Andy", tenían contra la pared a Oscar Reyes Farfán (agraviado), lo pateaban, metiendo puñetes y le rebuscaban entre las ropas, hasta que Oscar cae al Suelo y pedía auxilio y le seguían pegando; y el desmuelado que es Julio Navarro corrió a su casa ingresando y saliendo rápidamente con una bolsa negra en las manos, mientras el testigo estaba escondido detrás de unos arbustos, Julio le dispara dos veces al agraviado. Además el testigo informa que el "Buche" se llama Joel Ortiz Rodríguez, que es de contextura delgada, medio pelucón, tez trigueña, no habla muy bien y está en el Centro Juvenil por droga; iii) de las indagaciones realizadas por la policía, los vecinos señalan que el agraviado habría sido víctima de robo de sus pertenencias que al poner resistencia fueron victimados, situación que también se confirma con la declaración del hermano del occiso, quien señaló que cuando encontró a su hermano no tenía celular ni su billetera; en relación al segundo requisito tenemos que el artículo 188 del Código Penal señala que constituye robo "el que se apodera ilegítimamente de un bien inmueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; por su parte los numerales 2), 3) y 4) del primer párrafo y último párrafo del artículo 189 del acotado código, prevé agravantes y sanciona con "pena no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: inciso 2) durante la noche, inciso 3) a mano armada, inciso 4) con el concurso de dos o más personas, la pena será de cadena perpetua cuando (...) como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima (...)" ; asimismo, el artículo 23° del Código Penal señala como co autor al que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente, y en este caso, la conducta del adolescente se subsume en este dispositivo legal puesto que conjuntamente con cuatro personas adultas no intervenidas participaron de la sustracción y se apoderaron de la billetera y teléfono celular del agraviado, empleando violencia física contra el occiso; en relación al tercer requisito, queda probado que el adolescente eludirá la acción de la justicia, puesto que a la fecha no ha rendido su declaración a nivel Fiscal, acogiendo al silencio, conducta que implica obstrucción al esclarecimiento de los hechos, a ello debe agregarse, que al no tener un control por parte de sus progenitores, puesto que actualmente se encuentra internado en el Centro Juvenil Miguel Grau por otra infracción a la ley penal, no se tiene la seguridad que el adolescente pueda ser ubicado en su domicilio y acuda a las citaciones que se realicen a nivel judicial.

Por tales consideraciones, la señora Juez del Cuarto Juzgado de Familia, **RESUELVE:**

PROMOVER INVESTIGACION a favor del adolescente **MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ** (17); por la presunta Infracción contra el Patrimonio: **ROBO AGRAVADO SEGUIDO DE MUERTE**, en calidad de **COAUTOR**, en agravio de **OSCAR ARMANDO REYES FARFAN**; en consecuencia: y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 208 del Código de los Niños y Adolescentes

Abog. Luz María Castillo
SECRETARIA JUDICIAL
Cuarto Juzgado de Familia
Corte Superior de Justicia de Piura

DISPÓNGASE el INTERNAMIENTO PREVENTIVO DE MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ (17), en el Centro Juvenil Miguel Grau de ésta ciudad, oficiándose para tal

RECÍBASE:

la Declaración del adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ (17), en presencia de la señora Jueza, de la señora Fiscal de Familia, de sus padres y de su abogado defensor, el día **VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017** a las **NUEVE DE LA MAÑANA**, la misma que se llevará a cabo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Social "Miguel Grau" de Piura

CITAR A LA DILIGENCIA ÚNICA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, que se llevará a cabo luego de recabada la declaración del adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ; a llevarse a cabo el día **VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017**.

PRACTIQUESE las siguientes diligencias:

- REALIZESE** un informe educativo del adolescente investigado por parte del docente asignado al Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Piura, debiendo remitir a este juzgado el informe correspondiente teniendo en consideración la naturaleza del presente proceso.
- OFICIESE** a la RENIEC- PIURA para que remita a este despacho la partida de nacimiento del adolescente investigado;
- PRACTIQUESE** un informe social en el domicilio del mencionado adolescente, ubicados en A.H. Paredes Maceda - Piura Maz B. - 10 lote 06, distrito 26 de Octubre (referencia: a una cuadra del paradero Sol de Piura)
- RECABESE** los antecedentes por infracciones a la ley penal que registre el adolescente investigado tanto de los Juzgados de Familia de Piura como del Juzgado Mixto de Castilla;
- OFICIESE Y NOTIFIQUESE** y con tal fin.-

[Firma manuscrita]
Juzgado de Familia de Piura
Cada 2017

[Firma manuscrita]
Abogado Defensor de Castilla
SECRETARÍA JUDICIAL
Centro Juzgado de Familia
Cada 2017

1° JUZGADO DE FAMILIA

EXPEDIENTE : 03286-2017-0-2001-JR-FP-01
MATERIA : INFRACCION CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
JUEZ : DIAZ OLIVA RUTH LUCESMITH
ESPECIALISTA : JOHANA SIOMARA SAAVEDRA MONDRAGON
MINISTERIO PÚBLICO : PRIMERA FISCALIA DE FAMILIA,
INFRACITOR : ORTIZ RODRIGUEZ, MARCOS JOEL
AGRAVIADO : SOCIEDAD Y DEL ESTADO,

RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE (11)

Piura, veinticinco de octubre del dos mil diecisiete.

La magistrada del Primer Juzgado de Familia de Piura, quien se avoca al conocimiento de la presente causa, ejerciendo justicia en nombre de la Nación, ha expedido la siguiente:

SENTENCIA

Sobre los Presunto Infractor:

1. El presente proceso seguido a favor del adolescente: **MARCO JOEL ORTIZ RODRIGUEZ**, con N°. de su DNI 77035159, de 17 años de edad, nacido el 02 de Julio de 1999, sus padres se llaman JOSE HILARIO ORTIZ GONZALES de ocupación chatarrero y **MILAGROS RODRIGUEZ CHERO** no vive con su persona, sus padre se encuentran separados; Soltero, con segundo de secundaria, no estudia actualmente; domiciliado en el AAHH Luis Paredes MacedaMz. B Lt. 06, trabajaba cargando bultos en Sullana; actualmente no trabaja, tiene un tatuaje en el brazo derecho, indica que son dibujos de la cultura maya, no señas ni cicatrices en el cuerpo; no sufre de enfermedad alguna, no consume bebidas alcohólicas, no fuma, no consume drogas, es la primera vez que se encuentra investigado.

Imputación y Pretensión del Fiscal:

2. La Representante del Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal en dictamen¹ opina que: se encuentra acreditada en los actuados la responsabilidad del adolescente **MARCO JOEL ORTIZ RODRIGUEZ**, en la comisión del acto de infracción a la Ley Penal contra la Salud Pública-**Tráfico Ilícito de Drogas**, en la modalidad de **Micro comercialización**, en agravio de la **SOCIEDAD-ESTADO**, por lo que se le debe imponer la **MEDIDA**

Ruth Lucésmith Díaz Oliva
Jueza Suplenmencia
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

¹ Pagina 131 a 141.

Johana Siomara Saavedra Mondragon
Secretaría Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia

SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACION POR EL PLAZO DE DOCE MESES; así mismo se fije una reparación a favor del agraviado la suma de MIL NUEVOS SOLES.

3. Se le imputa al adolescente el haber sido intervenido por personal policial del escuadrón verde, en circunstancias que realizaban labores propias del servicio, siendo que tomaron en conocimiento que una de las intersecciones del AAHH Luis Paredes Maceda, en un domicilio signado con la Mza B 10 Lote 06, se estaría micro comercializando drogas, al llegar a dicho punto se observó a un sujeto realizando un pase de drogas (ketes), los sujetos al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga en diferentes direcciones, logrando intervenir en el frontis de dicho domicilio a una persona de sexo masculino (presunto vendedor), siendo identificado como **MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ**; a quien al realizarse el registro personal se le encontró en el bolsillo delantero de la casaca una bolsa pequeña de plástico color negra tipo chequera conteniendo en su interior **DOSCIENTOS (200)** envoltorios de papel cuaderno cuadriculado tipo ketes conteniendo una sustancia pulverulenta, color parduzca, con olor y características al parecer alcaloide cocaína (**PBC**).

Pretensión de la Defensa:

4. El abogado de la defensa del adolescente infractor **MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ** indica en sus alegatos²: "solicita se le tenga en cuenta y se imponga una sanción proporcional al hecho atribuido y aceptado por el adolescente investigado en merito a que este ha colaborado durante el proceso desde el momento de las diligencias preliminares al aceptar su responsabilidad y brindar información respecto de la persona que lo captó para la realización de este ilícito, deberá tomarse además el estado de necesidad que ha expuesto por el cual atravesaba debido a la avanzada edad de su señor padre aunado al desempleo del mismo y al padecimiento de una enfermedad que el menor ha referido, también su condición personal del adolescente el cual es agente primario su inmadurez y su adicción también que lo ha llevado por el camino equivocado para ser captado para la venta de drogas y ahora estar inmerso en el presente proceso penal, además de haber adecuado también el tipo penal imputado del 296 al 298 del Código Penal debe tenerse en cuenta que este ultimo tipo penal es de menor intensidad lesiva al bien jurídico protegido, por ende en virtud de la proporcionalidad solicitan una

Ruth Lucasmith Diaz Ortiz
Jueza Suplen Jurisdicción
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

²Página 114

Johana Gloria Casapita Mondragon
Secretaria Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura



medida menos gravosa a la de internamiento como es una medida socioeducativa en libertad, y que pueda cumplir la misma finalidad, en atención las condiciones del adolescente".

Actividad Probatoria

5. Se desarrolló la siguiente actividad probatoria:

En sede policial y fiscal:

- Acta de Intervención Policial³
- Acta de Registro Personal y comiso de droga del intervenido MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ⁴.
- Acta de Prueba de Sarro Ungueal por TIDal adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ⁵
- Declaración del padre del menor JOSE HILARIO ORTIZ GONZALES⁶
- Declaración del adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ por presunta Infracción Penal⁷
- Certificado Médico Legal N° 008873-OL-R de JOSE HILARIO ORTIZ GONZALES⁸
- Acta de Prueba de Campo, Orientación, Descarte, Pesaje y Lacrado de Droga⁹.

A nivel judicial:

- Declaración de del adolescente JOSE HILARIO ORTIZ GONZALES¹⁰.
- Informe Multidisciplinario¹¹.
- Resultado Preliminar de Análisis de Droga¹²
- Registro de Medidas Socioeducativas¹³
- Informe Psicológico del adolescente JOSE HILARIO ORTIZ GONZALES¹⁴.

II.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Delimitación Típica:

6. Se investiga al adolescente JOSE HILARIO ORTIZ GONZALES por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de Microcomercialización, previsto en el

³ Página 03 y 04.

⁴ Página 05.

⁵ Página 08.

⁶ Página 09 y 10.

⁷ Página 11 y 12.

⁸ Página 15.

⁹ Página 13 y 14


¹⁰ Página 40 a 42


¹¹ Páginas 64 a 72.

¹² Página 76.

¹³ Páginas 87 y 89

¹⁴ Páginas 104 a 106


Johana Siomara Saavedra Mondragon
Secretaría Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura


Ruth Lucía Ortiz Olivo
Jueza Superior de Familia de Piura
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

artículo 298° del Código Penal, el cual señala: "*La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa cuando:*

1. *La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados o dos gramos de éxtasis, conteniendo Metilendioxiánfetamina - MDA, Metilendioxi metanfetamina - MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas.*

2. *Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas señaladas en el inciso anterior.*

3. *Se comercialice o distribuya pegamentos sintéticos que expelen gases con propiedades psicoactivas, acondicionados para ser destinados al consumo humano por inhalación.*

La pena será privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y de trescientos sesenta a setecientos días-multa cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 o 6 del artículo 297 del Código Penal."

7. El tipo penal exige, además, un elemento subjetivo especial, en específico una especial intención, cual es, poseer la droga con el fin de comercializarla. Nos encontramos con un delito de tendencia interna trascendente. Se trata pues de un supuesto de peligro abstracto y que se consuma con el mero acto de la posesión de droga en relación con una tendencia interna trascendente de comercialización¹⁵.

Fundamentos Legales y Valoración de la Prueba

8. La doctrina señala que la actividad probatoria se desenvuelve mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos probatorios incorporados en autos, con el objeto de obtener la más acertada elaboración de la idea de cómo se desarrollaron los hechos sobre los cuales versa el proceso.
9. Así, de la evaluación razonada y lógica de los medios probatorios actuados e incorporados al proceso, se va determinar: si el menor acusado, tiene responsabilidad

¹⁵Prado Saldarriaga, Víctor Roberto; Comentarios al Código Penal de 1991, p. 145.

o no en los hechos de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de microcomercialización que se le imputa.

10. El adolescente procesado José Hilario Ortiz González, señala en sede policial, entre otros, "... ayer me encontraba en la esquina de mi casa con cuatro amigos escuchando música de un celular y eran las ocho y cuarto de la noche, de pronto me llama por teléfono mi amigo Deyner no se sus apellidos y me dice que le saque tres ketes y cuando venía desde la esquina de mi casa viene la policía y me interviene, pero no me encuentran nada porque yo ya le había entregado a Deyner", cuando se pregunta de donde los había obtenido, dijo: "ayer como a las dos de la tarde un pata que le dicen "BEBE" me dijo que ya tenía los ketes y me dijo que los recoja por el A.H San Sebastián, el me los dio porque yo le ayudaba a vender y me dio las bolsas con doscientos ketes, que debía venderlos a un sol", también indica: "... el Bebe me propuso que yo le ayude a vender y yo le acepté y desde ese día me ha estado dando para vender he estado llevando a vender por el parque de la ciudad del Sol"; y a nivel judicial¹⁶ dijo: "que siente que ha hecho mal las cosas que se le presentaron llamado BEBE a quien lo conoce de vista desde hace una semana, que se lo presentó un amigo suyo cuando estaban tomando por el Sétimo un modulo de San Sebastián y días van y días viene el BEBE le llama para utilizarlo para vender droga y su persona inocentemente cayó, que luego quedan en encontrarse en el sétimo en una esquina que allí le iba a dar la droga que fue a verlo como a las dos y media de la tarde y lo encontró en el sétimo, que le dio la droga en una bolsa negra que le dio doscientos ketes 60 para su persona y 140 para el bebe esto es que su ganancia iba a ser los sesenta ketes, que cuando terminará de vender lo llamara, que le dijo que tenía que vender los ketes a un solo cada uno, que le dio la bolsa con un papel adentro diciendo 200, que no conto los ketes que abrió que olía bien feo y vio unos sobres pequeños con papel cuadriculados chiquitos, que luego se lo da, que tomo una combi y se va a su casa, que en eso lo guarda en su ropero donde guarda todas sus cosas, y luego lo llaman un amigo llamado Deyner no sabe su apellido, que él dijo que le venda tres envoltorios, que sale afuera de su casa y estaba conversando con celular esperando que venga Deyner y allí llega la policía y lo interviene, que eran del grupo terna, le dicen que tenía y le dijo que nada y le dijeron para ir a su casa, que cuando estuvo afuera de su casa solo tenía tres ketes y al ver eso la policía le dicen para ir a su casa, que les dijo que fueran y la policía les dijo que donde estaba la droga y les

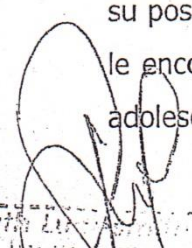
Juan Lucemán Díaz Oliva
Jefe de Suplente de
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

Johana Solorzano Guevara
Secretaría Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

entrego la bolsa que estaba en su ropero y luego quedo detenido; que al momento de la intervención estaba su papa en su casa".

11. Así, estando a lo citado por la doctrina en la presente resolución, que el hecho investigado se encuentra en un supuesto de peligro abstracto y que se consuma con el mero acto de la posesión de droga en relación con una tendencia interna trascendente de comercialización. En el caso de autos, con lo manifestado por el adolescente a nivel policial y judicial, respecto a los hechos que se le imputan, que está aceptando su responsabilidad, y que se corroborado por el Acta de Registro Personal y comiso de droga del adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ¹⁷, en el rubro: **Para Drogas e Insumos Químicos: POSITIVO.** " Se le encontró en el interior de su bolsillo delantero lado derecho de su casaca, marca Puma, color blanco y en el interior de la misma la cantidad de doscientos (200) envoltorios de papel cuaderno cuadriculado tipo "kete" y en el interior de cada uno de ellos una sustancia tipo pulverulenta color parduzca con olor y características al parecer (PBC); Acta de Prueba de Sarro Ungueal por TID al adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ¹⁸, en el cual se obtiene POSITIVO para Alcaloide de Cocaína; Acta de Prueba de Campo, Orientación, Descarte, Pesaje y Lacrado de Droga¹⁹, a través de la cual se ha determinado como peso bruto: 53 gr., y que conforme al Resultado²⁰ Preliminar de Análisis Químico de Drogas, se ha determinado el **peso neto: 0.037Kg**, correspondiente a Pasta Básica de Cocaína con Carbonatos; está acreditado que en poder del adolescente procesado, se le encontró 200 envoltorios tipo "kete".

12. En efecto, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 298, inciso 1)²¹ del Código Penal, el cual requiere para su configuración el hecho que se le haya encontrado en su posesión drogas toxicas en cantidad²² mayor al permitido por ley, en este caso se le encontró al adolescente procesado 0,037 Kg, se determina la responsabilidad del adolescente MARCOS JOEL ORTIZ RODRIGUEZ, en los hechos investigados.-


Ruth Llanos
Jueza Suplenumeraria
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

¹⁷ Página 05.

¹⁸ Página 08.


¹⁹ Página 13 y 14

²⁰ Página 76

²¹ 1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos....

²² Artículo 299 Código Penal.- Posesión no punible

No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de **cinco gramos de pasta básica de cocaína**,(...)."


Johana Sionani
Secretaria Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

Determinación Judicial de la Pena:

13. Se tiene en consideración que las sanciones ²³ y los criterios para aplicarlos deben constituirse en una condición que garantice el acceso a los adolescentes a las oportunidades de superación de su condición de exclusión, para cuyo efecto se tiene presente Las Reglas de Beijing, específicamente los principios contenidos en el disposición 17.1, esto es: a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible; c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en

Código de los Niños y Adolescentes: Artículo 231.- Sanciones

El adolescente que cometiere un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo a la legislación penal, solo puede ser sometido a las siguientes sanciones:

a) Socioeducativas:

1. Amonestación;
2. Libertad asistida;
3. Prestación de servicios a la comunidad;
4. Reparación directa a la víctima;

b) Mandatos y Prohibiciones

1. Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual;
2. No frecuentar determinadas personas;
3. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u otros lugares señalados por el Juez;
4. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa;
5. Matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, de acuerdo a las condiciones y requisitos que se establezcan en el Reglamento, en congruencia con lo establecido en la Ley General de Educación;
6. Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea posible su ejecución y se encuentre dentro de las marcos legales;
7. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas;
8. Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento desadictivo;

c) Privativas de libertad:

1. Internación domiciliaria;
2. Libertad restringida;
3. Internación.

Johana Steward Sotelo Mandragon
Secretaría del Jefe del
Primer Juzgado de Familia de Piura



el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada; d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor.

14. Asimismo, conforme al artículo 230° del Código de los Niños y Adolescentes, el juez al momento de imponer una sanción, deberá tener en cuenta: a) La edad del (la) adolescente, sus circunstancias personales, así como su situación psicológica, educativa, familiar y sociocultural, según el informe del equipo multidisciplinario; b) La magnitud del daño causado; c) El nivel de intervención en los hechos; d) La capacidad para cumplir la sanción; e) Las circunstancias agravantes o atenuantes reguladas en el Código Penal o Leyes Especiales, en lo que corresponda; f) La proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción; y g) Los esfuerzos del (la) adolescente por reparar, directa o indirectamente, los daños.

15. En efecto, se tiene el Informe Multidisciplinario Inicial²⁴, efectuado por el Equipo Técnico del Centro Juvenil "Miguel Grau", se concluye, entre otros, *"Al relatar los motivos de su detención, confabula información para su propio beneficio, utilizando la evasión para tratar de ocultar información. Sin embargo se logró recopilar la información que lo sindicaba como autor de la infracción por la cual está interno de forma preventiva; presenta los siguientes rasgos de personalidad que podrían influir en su vida adulta: tendencia a la manipulación, se muestra seductor, está en constante búsqueda de aceptación de sus pares, realizando actividades que impliquen riesgos mientras experimenta excitación (euforia) para su integridad, con la finalidad de ser aceptado y reforzado por el grupo social a quien frecuenta. Se observa en el adolescente falsa seguridad, persona tendiente al egoísmo, suele jactarse de habilidades que el resto de sus congéneres no tiene, se evalúa su nivel de autoconfianza y autovaloración teniendo como resultado el exceso de estos constructos, lo que explica su arrogancia, falso optimismo y escasa participación en la reciprocidad del intercambio social; además de ello adolescente presenta una excesiva inclinación por el consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo a la recopilación de los datos la evaluación de los factores de riesgo de tipo individual; otro de los factores de riesgo de tipo social, se logra identificar que el adolescente desde los 15 años frecuenta amigos con conductas disociales y consumidores psicoactivos; el adolescente proviene de una familia mono parental vive con su padre y dos hermanos. Adolescente refiere que recientemente hubo una separación parental, debido a verse presentado problemas familiares (infidelidad por parte de la*

Ruth Lucía Smith Díaz Oliva
Jueza Superior Unipersonal
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

²⁴Página 64 a 72

madre), en consecuencia la madre del adolescente sale del hogar llevándose consigo a sus hijas. Por lo cual podemos decir que sus factores protectores familiares no se han encontrado bien establecidos lo que podría haber conllevado, entre otras cosas, el tema de su consumo de drogas; en nivel de estudios a culminado el 2° de secundaria, sin embargo perdió interés por los estudios, debido a que fue cambiado del colegio por presentar problemas de conducta".

16. De igual forma, se tiene el Informe N° 20-2017-CMAC-EMF/PJ, efectuado por el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Piura al Adolescente procesado, en el que concluye, en cuanto su conducta: "presenta un comportamiento disocial Moderado (expulsión del colegio por mala conducta, venta de drogas, consumo de alcohol), de inicio tipo infantil tendiendo a desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la época adulta". Recomendándose: "que sea internado en el Centro de Rehabilitación Miguel Grau, porque en el examinado existen diversos factores de riesgo como pertenencia a grupo disociales, venta de drogas, inadecuado ambiente familiar, abandono escolar por lo que es necesario medidas socioeducativas que van a permitir una participación constante y activa con la finalidad de modificar su conducta y adquisición de hábitos adecuados".

17. En tal sentido, estando a las evidencias estimadas, en que el adolescente proviene de una familia disfuncional – inadecuado ambiente familiar-, con amistades con conductas disociales y consumidores psicoactivos, con una excesiva inclinación por el consumo de sustancias psicoactivas, ha sido expulsado del colegio, está inmerso en la venta de drogas, consumo de alcohol, que encuadra un comportamiento disocial "Moderado", tendiéndose a desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la época adulta, y, que si bien, conforme se advierte del Informe²⁵ de Registro de infractores que no registran medida socioeducativa, no obstante, por su nivel de comprensión cultural, sus estudios y su ocupación, que lo relacionan con la sociedad, tienen un nivel de entendimiento de lo que es un hecho lícito e ilícito, por lo que, estando a las necesidades de la sociedad, dado que el acusado es sujeto de derecho con obligaciones hacia la comunidad, se le debe aplicar medida de internamiento por el tiempo²⁶ mínimo necesario, a fin de que internalice las consecuencias negativas de su conducta y con la orientación que reciban, se rehabilite y sea persona de bien para sí mismo, su familia y la sociedad, corresponde adoptar la sanción privativa de Internación.

²⁵ Página 87 y 89

²⁶ Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 236.- **Duración de la internación**

"La sanción de internación durará un período mínimo de uno y máximo de seis años (...)"

Johana Stomata Sarmiento Mondragon
Secretaría Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura

Ruth Lucasmán Díaz Oliva
Jueza Suplenmteraria
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

Reparación Civil:


18. Debe tenerse presente los artículos 92° y 93° del Código Penal, por lo que debe repararse los daños ocasionados desde la perspectiva de la reparación civil extracontractual, ello de conformidad con el artículo 1969 del Código Civil, toda vez que el acusado por su conducta dolosa causa el daño.
19. El daño puede ser naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, conforme se concluye de lo delineado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de reparaciones sobre el caso Loayza Tamayo así como del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema 6-2006/CJ-116, del trece de octubre del dos mil seis; instituto el cual se encuentra regulado por los artículos 1984 y 1985 del Código Civil.
20. Al ser un delito de mera actividad, la sola posesión de la droga en la cantidad no permitida por la ley, resulta de por sí peligroso para la sociedad, situación que merece ser reparado, dada las circunstancias de los hechos y las condiciones del adolescente acusado, considerando además, las carencias sociales y económicas.

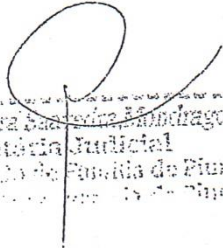
III. DECISIÓN

Por las consideraciones y normas o dispositivos señalados en los fundamentos de la presente resolución, concordante con lo dispuesto en los artículos 138° y 143° de la Constitución Política del Estado, Administrando Justicia a Nombre de la Nación,

FALLO:

1. **CONDENANDO** al adolescente **MARCO JOEL ORTIZ RODRIGUEZ (17)** por la infracción a la Ley Penal contra la Salud Pública-**Tráfico Ilícito de Drogas**, en la modalidad de **Micro comercialización- artículo 298° del Código Penal**, en agravio de la **SOCIEDAD-ESTADO**, **Imponiendo** la Sanción de **INTERNAMIENTO** por el período de **UN AÑO**.
2. **ORDENO** el internamiento de los sentenciado, en el Centro Juvenil de Varones "Miguel Grau" de Piura, debiendo descontarse el internamiento preventivo, consecuentemente, el internamiento del sentenciado continuará hasta el 27 de junio del 2018, siendo que dicha entidad sin más mandato deberá disponer su externamiento y libertad conforme a ley, siempre y cuando no haya mandato de detención por autoridad competente, bajo responsabilidad.-


Jefe de Sala
Jueza Suplenumeraria
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura


Johana Siomara Bustos Rodríguez
Secretaría Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura




PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Piura
Primer Juzgado de Familia de Piura - Sede Arequipa N° 943-Piura.


3. FIJO: en la suma de **UN MIL Y 00/100 SOLES**, por concepto de **REPARACIÓN CIVIL** que deberán cumplir con abonar los padres del adolescente declarado responsable, a favor del agraviado.

4. Ordeno que una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente se remita copia certificada de la sentencia y de la resolución que la declara firme, para la correspondiente inscripción en el Libro de Registro Especial de Adolescentes Infractores.-

NOTIFIQUESE, y consentida que sea la presente **ARCHIVASE**.-



Ruth Lucasmith Díaz Oliva
Jueza Supernumeraria
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura



Johana Stuardi Santedra Mondragon
Fiscalista Judicial
Primer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

147
cuenta
cuarenta
y siete

Sentencias 111

RAZÓN:

Señora Juez; doy cuenta a Ud. que, mediante MEMORÁNDUM N° 390-GAD-CSJPI/PJ, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Gerencia de Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia dispuso que el suscrito asuma funciones como Secretario Judicial en este juzgado a partir del diez de noviembre del año en curso. Asimismo, con fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, los auxiliares jurisdiccionales Socorro Milagros Quintana Miranda y Marco Jesús Fernández Sandoval, dan cuenta al suscrito de la existencia del presente expediente que se encuentra en trámite, asignado originalmente al especialista judicial Karl Alex Bohorquez Zelada. Es cuanto informo a su despacho para los fines pertinentes.

Piura, Trece de Diciembre de Dos mil diecisiete.-

3º JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 01333-2015-0-2001-JR-FP-02
MATERIA : INFRACCION CONTRA EL PATRIMONIO
JUEZ : TORRES VILLALBA VERONICA PATRICIA
ESPECIALISTA : CHECA SERNAQUE VICTOR MANUEL
INFRACITOR : CARRASCO LAMADRID, MAXIMO PEDRO
VILLEGAS MURILLO, CRISTHIAN JOEL
AGRAVIADO : NEYRA ANTON, HECTOR ALEXANDER
DENUNCIANTE : MINISTERIO PUBLICO,

Resolución Número: OCHO (08)

Piura, Trece de Diciembre de Dos mil diecisiete.-

I.- AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los Escritos N° 494-2017, y N° 502-2017; y,
II.-CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Primera Fiscalía Provincial de Familia de Piura, promovió investigación penal a favor de los adolescentes **MAXIMO PEDRO CARRASCO LAMADRID** y **CRISTHIAN JOEL VILLEGAS MURILLO**, por la Infracción a la Ley Penal por el **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO** en la modalidad **ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA**, en agravio de **HECTOR ALEXANDER NEYRA ANTON**.

SEGUNDO: Mediante Escrito N° 494-2017, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Ministerio Público solicita la prescripción de la acción penal, por cuanto los hechos que dieron lugar a la presente acción penal ocurrieron el uno de mayo de dos mil quince., y a la fecha han transcurridos más de dos años.

TERCERO: La prescripción es una institución jurídica que extingue la acción penal y la pena por el transcurso del tiempo, es decir extingue la facultad que tiene el estado de perseguir el hecho punible (*ius imperium*).

CUARTO: En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 013-2015-CE-PJ, de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, se precisa, utilizando una línea de tiempo, las causas de dilación del presente proceso:

- Con fecha **22 de julio de 2015**, la fiscal **Silvia Victoria Herrera Pedreros**, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Piura, formalizó denuncia

Verónica Patricia Torres Villalba
Fiscal Titular
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

Viceministro General
Secretario Judicial
Tercer Juzgado de Familia
Corte Superior de Justicia de Piura

Cuenta con
y cdo

contra los adolescentes **MAXIMO PEDRO CARRASCO LAMADRID** y **CRISTHIAN JOEL VILLEGAS MURILLO**, por la Infracción a la Ley Penal por el **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO** en la modalidad **ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA**, en agravio de **HECTOR ALEXANDER NEYRA ANTON**. Esta denuncia fue ingresada ante el Segundo de Familia de Piura, con el juez Cristhian Landivar Castillo y la especialista legal Ericka Janet Sanchez Valdivieso. (Folios 01-70)

- Con fecha 23 de julio de 2015 (colgada al SIJ el 24 de julio de 2015), se emitió la Resolución N° 01, que dispuso: "1. Declarar promovida la acción penal a favor de los adolescentes Máximo Pedro Carrasco Lamadrid (17), y Cristhian Joel Villegas Murillo (17), como presuntos autores de la infracción a la ley penal contra el patrimonio, modalidad robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Héctor Alexander Neyra Anton (19).- 2. Recíbese la declaración de los adolescentes Máximo Pedro Carrasco Lamadrid (17), y Cristhian Joel Villegas Murillo (17) para el día Miércoles 09 de Septiembre de 2015 a horas 02:00 p.m y 02:30 pm respectivamente, debiendo concurrir puntualmente y en compañía de sus padres o responsables; así como de su abogado defensor, notificándosele en su domicilio real y procesal la misma que se actuará en presencia del representante del Ministerio Público.- 3. RESERVESE fecha para la Audiencia única de esclarecimiento de los hechos hasta que se haya tomado la declaración del presunto infractor.- 4. Recábense las medidas socioeducativas inscritas que pudieran registrar los adolescentes, verificándose el libro correspondiente del juzgado.- 5. Practíquense evaluación psicológica e informe social a los presuntos infractores por parte del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Piura; debiendo coordinarse las mismas en forma oportuna, bajo apercibimiento de tener en cuenta su conducta procesal.- OFICIESE con tal fin". Siendo que con fecha 05 de agosto de 2015, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 71-72)
- Con fecha 05 de agosto de 2015, la Defensoría Pública se apersona en representación del adolescente **MAXIMO PEDRO CARRASCO LAMADRID**. (Folios 82-83)
- Con fecha 10 de agosto de 2015 (colgada al SIJ el 11 de agosto de 2015), se emitió la Resolución N° 02, que dispuso: "**DADO CUENTA con el escrito N° 691-2015 de fecha 05 de agosto de 2015; Agréguese a los autos y estando con lo expuesto por Santos Aule Carrillo Burgos TENGASE por apersonado al proceso en su calidad de Defensor Público del presunto infractor Máximo Pedro Carrasco Lamadrid y POR SEÑALADO el domicilio procesal que se indica sito en: Av. Sánchez Cerro N° 1226 – Segundo Piso- Piura, lugar donde en adelante se le harán llegar todas las resoluciones que emita el Juzgado**". Siendo que con fecha 26 de agosto de 2015, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 84)
- Con fecha 09 de septiembre de 2015, se emite la constancia de asistencia a audiencia especial, en donde se señala lo siguiente: "Mediante resolución N° 01, de fecha 23 de julio del 2015, se programó la diligencia de declaración a llevarse a cabo en el local del juzgado para el día 09 de septiembre del 2015 a las 02:30 de la tarde, por lo que se deja constancia de la asistencia del adolescente Máximo Pedro Carrasco Lamadrid con DNI 74697969, acompañado de su madre Martha Esperanza Lamadrid Cruz con DNI 02606722, el adolescente Cristhian Joel Villegas Murillo con DNI 75099279 acompañado de su madre Isabel Murillo Gomez con DNI 02862463, asesorados ambos adolescentes por el defensor público Santos Aule Carrillo Burgos con Reg. ICAP. 2140, en la fecha y hora programadas para la misma, sin embargo, la misma se

Verónica Patricia Torres Villalba
JUEZ TITULAR
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

[Firma]
Santos Aule Carrillo Burgos
Defensor Público
Reg. ICAP. 2140

147
ciento
cuarenta y
nueve

reprogramó debido a que el magistrado se encontraba en capacitación oficializada respecto a las casillas electrónicas". (Folios 87)

- Con fecha 10 de septiembre de 2015 (colgada al SIJ el 11 de septiembre de 2015), se emitió la Resolución N° 03, que dispuso: "*DADO CUENTA con la constancia de Asistencia a Audiencia Especial que antecede dada por la cursora; REPROGRAMESE fecha para la declaración de los adolescentes Máximo Pedro Carrasco Lamadrid (17), y Cristhian Joel Villegas Murillo (17) para el día Jueves 01 de Octubre de 2015 a horas 03:00 p.m y 03:30 pm respectivamente, debiendo concurrir puntualmente y en compañía de sus padres o responsables; así como de su abogado defensor, notificándosele en su domicilio real y procesal la misma que se actuará en presencia del representante del Ministerio Público*". Siendo que con fecha 11 de septiembre de 2015, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 88)
- Con fecha 01 de octubre de 2015, se realiza la diligencia de declaración en donde se toma la declaración de los adolescentes investigados, y se programa fecha para la diligencia de esclarecimiento de los hechos para el día 06 de noviembre de 2015, a las 02:30 pm. (Folios 96-99).
- Con fecha 06 de noviembre de 2015, se realizó la audiencia única de esclarecimiento de los hechos, en donde se admitieron los medios probatorios, se realizó la autodefensa de los adolescentes investigados, y se dispuso: "*En este acto se dispone Reiterar Oficio al Área de Asistencia Social del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Piura, para que cumpla con realizar una vista social en el domicilio de los presuntos infractores, asimismo Reiterar Oficio al Área de Psicología del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Piura para que realice una evaluación psicológica a los presuntos infractores, sin perjuicio de que los responsables de los presuntos infractores puedan coordinar la realización de los mismos. Y luego de ser recibido lo solicitado, envíense los actuados para dictamen fiscal*". (Folios 102-103).
- Con fecha 14 de enero de 2016, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Piura, remite el informe de asistencia a terapia psicológica del adolescente Máximo Pedro Carrasco Lamadrid. (Folios 106-109).
- Con fecha 27 de enero de 2016 (colgada al SIJ el 28 de enero de 2016), se emitió la Resolución N° 04, que dispuso: "*DADO CUENTA con el escrito N° 16-2016 de fecha 14 de enero de 2016; Agréguese a los autos y TENGASE por recibido el Informe de Asistencia a Terapia Psicológica del infractor Máximo Pedro Carrasco Lamadrid y Téngase presente en su oportunidad en lo que fuere de Ley*". Siendo que con fecha 09 de marzo de 2016, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 110).
- Con fecha 10 de febrero de 2016, la Trabajadora Social del Equipo Multidisciplinario de Familia de Piura, remite el Informe Social N° 40, perteneciente a Cristhian Joel Villegas Murillo. (Folios 112-114).
- Con fecha 16 de marzo de 2016 (colgada al SIJ el 18 de marzo de 2016), se emitió la Resolución N° 05, que dispuso: "*DADO CUENTA con el escrito N° 91-2016 de fecha 10 de febrero de 2016; Agréguese a los autos y TENGASE por recibido el Informe Social N° 040 realizado en el domicilio del infractor Cristian Villñegas Murillo y Téngase presente lo informado*". Siendo que con fecha 29 de marzo de 2016, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 115).
- Con fecha 09 de agosto de 2016, el presente expediente fue distribuido al Tercer Juzgado de Familia de Piura, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N°

Vendelín Párraga Torres Villalón
JUEZ TITULAR
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Tribunal Superior de Justicia de Piura

[Firma]
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Tribunal Superior de Justicia de Piura

Cuenta
cincoenta

441-2017-P-CSJPI/PJ. Avocándose al conocimiento de la presente causa la magistrada **Ana Luisa Yaipen Rodriguez** y el especialista legal **Karl Alex Bohorquez Zelada**.

- Con fecha 24 de octubre de 2016, el abogado defensor de los adolescentes investigados, solicita se expida sentencia. (Folios 120-123)
- Con fecha 16 de enero de 2017 (colgada al SIJ el 16 de enero de 2017), se emitió la Resolución N° 06, que dispuso: "*DADO CUENTA, con la razón y expediente redistribuido por el Segundo Juzgado de Familia TENGASE por recibido el mismo en el estado en el que se encuentra, AVOQUESE al conocimiento de la presente causa la señora Magistrada que suscribe la presente por disposición superior, proveyendo los escritos N° 732-2016 y N° 733-2016; TENGASE presente en su oportunidad y AGRÉGUESE a los autos; REQUIERASE al psicólogo del Equipo Multidisciplinario de esta Corte Superior de Justicia para que en el plazo de DOS DÍAS, cumplan con remitir la evaluación psicológica de los menores infractores Cristian Joel Villegas Murillo Y Máximo Pedro Carrasco Lamadrid, ó en su defecto informe lo conveniente, de conformidad con el requerimiento efectuado en audiencia única. Interviniendo el secretario que da cuenta por disposición superior*". Siendo que con fecha 23 de enero de 2017, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 124).
- Con fecha 27 de marzo de 2017, se produjo el desborde del Río Piura, como consecuencia del fenómeno climático denominado "el niño costero", afectando el local del juzgado.
- Con fecha 10 de julio de 2017, el Especialista Legal Karl Alex Bohorquez Zelada, procede a dar la siguiente razón: "Señora juez, doy cuenta a usted, que al haberse inundado el local de este Juzgado por el desborde del Río Piura como consecuencia del Fenómeno Natural del Niño Costero; se encontró el presente expediente en estado deteriorado (húmedo) por lo que se procedió a fotocopiar el expediente siniestrado, lo que hago de su conocimiento para los fines que estime conveniente".
- Con fecha 10 de julio de 2017 (colgada al SIJ el 11 de julio de 2017), se emitió la Resolución N° 07, que dispuso: "*1. TENER POR RECOMPUESTO el Expediente 01333-2015-0-2001-JR-FP-02, en la investigación seguida a favor de los adolescentes MÁXIMO PEDRO CARRASCO LAMADRID y CRISTHIAN JOEL VILLEGAS MURILLO, por la presunta infracción contra EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO EN GRADO TENTATIVA en calidad de co-autores, en agravio de HECTOR ALEXANDER NEYRA ANTON, formulada por la Primera Fiscalía de Familia. 2. En consecuencia siendo el estado del presente proceso, REQUIÉRASE al psicólogo del Equipo Multidisciplinario de esta Corte Superior de Justicia para que en el plazo de DOS DÍAS, cumpla con remitir la evaluación psicológica de los menores presuntos infractores Cristian Joel Villegas Murillo y Máximo Pedro Carrasco Lamadrid, ó en su defecto informe lo conveniente, de conformidad con el requerimiento efectuado en audiencia única*". Siendo que con fecha 11 de julio de 2017, se procedió a generar las cédulas de notificación de la misma. (Folios 130-131).
- No existiendo más trámite en el presente expediente.
- Con fecha 25 de julio de 2017, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Piura, solicita la prescripción del presente proceso. (sin proveer)
- Con fecha 26 de julio de 2017, la Psicóloga del Equipo Multidisciplinario de Familia de Piura, informa de la incomparecencia de los adolescentes investigados para coordinar su cita para la evaluación psicológica ordenada en autos. (Sin proveer)

Verónica Patricia Torres Villalba
JUEZ TITULAR
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

[Firma]
Especialista Legal
Karl Alex Bohorquez Zelada
Corte Superior de Justicia de Piura

Ciento
Cincuenta y
uno

QUINTO: Al respecto se debe tener en cuenta la siguiente normatividad aplicable al caso concreto:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ:

- **Artículo 103:** Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho.
- **Artículo 109:** La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 222.- La acción judicial prescribe a los dos años de cometido el acto infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal prescribe a los seis meses. El plazo de prescripción de la medida socio-educativa es de dos años, contados desde el día en que la sentencia quedó firme. El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas contenidas en el ordenamiento procesal penal¹.

SEXTO: Por mandato constitucional la ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación y se aplica a las situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorece al reo.

SÉPTIMO: En el caso de autos se advierte que el texto derogado del primer párrafo del artículo 222° del Código de los Niños y Adolescentes al momento de ocurridos los hechos que han dado lugar al presente proceso establecía "La acción judicial prescribe a los dos años de cometido el acto infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal prescribe a los seis meses"; por lo que, dicho plazo resulta aplicable al presente proceso.

¹ Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1204, publicado el 23 septiembre 2015, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 222.- Prescripción.-

La acción penal prescribe:

a) A los cinco años para los delitos tipificados en los artículos 106 al 108-D, 121 al 121-B, 152 al 153-A, 170 al 177, 188, 189, 200, 296 al 298, 319, 320, 321 del Código Penal y los tipificados en el Decreto Ley 25475.

b) A los tres años en los demás delitos.

c) A los diez meses cuando se trate de faltas.

La ejecución de las sanciones se extingue por la muerte del (la) adolescente, por prescripción, cumplimiento de la sanción o decisión judicial debidamente motivada de conformidad con lo previsto en este Código.

Para la prescripción de las sanciones se aplican los mismos plazos fijados previstos para la prescripción de la acción penal, los que se cuentan desde el día en que la sentencia quedó firme.

El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas previstas en el ordenamiento procesal penal."

Verónica Patricia Torres Villalba

ABEZ TITULAR
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

Verónica Patricia Torres Villalba
Secretaría Judicial
Tercer Juzgado de Familia
Corte Superior de Justicia de Piura

ciento
cincuenta y
dos

OCTAVO: Si bien el artículo 222° del Código de los Niño y Adolescentes ha sido modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1204 publicado el 23 septiembre 2015, ampliando los plazos de prescripción; sin embargo, la modificatoria no se aplica al presente proceso dado que se debe aplicar la norma que estuvo vigente al momento de ocurrido los hechos, conforme a lo previsto en el artículo 103° de la Constitución Política del Estado. Más aún si no favorece al menor investigado.

NOVENO: De lo expuesto en los fundamentos que preceden se advierte que los hechos que dieron lugar a promover la presente acción penal ocurrieron el uno de mayo de dos mil quince, conforme se advierte del Acta de Denuncia (Folios 04), Acta de Arresto Ciudadano (Folios 06-07), declaración voluntaria del agraviado (folios 12-13), y declaraciones de los adolescentes investigados (Folios 18-25); habiendo transcurrido a la fecha más de 2 años sin que se halla emitido sentencia, por lo que, corresponde declarar la prescripción de la presente acción judicial.

DECIMO: Siendo esto así la prescripción opera de pleno derecho con el sólo transcurso del tiempo, limitando el *ius puniendi* del Estado, y en el caso de autos al haber transcurrido en exceso el término ordinario de prescripción, la acción judicial por delito se encuentra prescrita.

III.- DECISION:

Por estas consideraciones, la Juez del Tercer Juzgado de Familia de Piura, RESUELVE:

- 1) **DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCION PENAL** promovida a favor de los adolescentes **MAXIMO PEDRO CARRASCO LAMADRID** y **CRISTHIAN JOEL VILLEGAS MURILLO**, por la Infracción a la Ley Penal por el **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO** en la modalidad **ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA**, en agravio de **HECTOR ALEXANDER NEYRA ANTON**.
- 2) Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución **ARCHIVASE DEFINITIVAMENTE** el presente proceso en el modo y forma de ley. Asimismo, **INFÓRMESE** a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Piura, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 013-2015-CE-PJ.
- 3) Por otro lado, teniendo a la vista el presente expediente que no ha sido debidamente certificado por el especialista judicial Karl Alex Bohorquez Zelada: **HABILÍTESE** al actual Secretario de la Causa a fin de realizar la certificación de las piezas procesales que corresponda, al tratarse de un expediente reconstituido.
- 4) **A los Escritos N° 502-2017, TÉNGASE** a lo dispuesto en la presente resolución y agréguese a los autos.
- 5) **AVOQUESE** al conocimiento de la presente causa, la Señora Juez que suscribe por su nombramiento como magistrada titular de este juzgado.
- 6) **INTERVIENE** el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
- 7) **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.-

Verónica Patricia Torres Villalba
JUEZ TITULAR
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

[Firma]
Verónica Patricia Torres Villalba
JUEZ TITULAR
Tercer Juzgado de Familia de Piura
Corte Superior de Justicia de Piura

ANEXOS

1) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
AÑO	2018								
ACTIVIDADES	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
ETAPA DE ANÁLISIS – METODOLÓGICA									
Análisis Previo	X	X	x						
Planteamiento del Problema	X	X	x						
Recopilación y ordenamiento de datos	X	X	x						
Clasificación de datos			X						
Análisis Crítico e Interpretativo			X						
ETAPA ELABORATIVA									
Análisis metódico			X	X	X	x	X	X	
Redacción Inicial				X					
Interpretación de la Información				X	X	x	X		

Segunda Redacción							X		
Preparación bibliográfica, citas, anexos y cuadros estadísticos								X	
Corrección e Impresión de la Tesis									X
Sustentación									X

2) PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

RUBRO	CONCEPTO	COSTO
BIENES	USB	S/. 30.00
	HOJAS EPSON	S/. 300.00
	LIBROS	S/. 200.00
	CARTUCHO TINTAS Y	S/. 250.00
SERVICIOS Y TASAS	MOVILIDAD (Marzo-Noviembre)	S/. 500.00
	SOLICITUDES OTROS Y	S/. 200.00
	COPIAS	S/. 100.00
	IMPRESIONES	S/. 200.00
	SERVICIO EMPASTADO DE	S/. 250.00
REMUNERACIONES	ASESOR	S/. 2,000.00
	TOTAL	S/. 4, 030. 00

2) PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

“ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE INTERNAMIENTO COMO MEDIDA DE ULTIMA RATIO EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE PIURA DURANTE EL AÑO 2016-2017”						
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES	INDICADORES	FUENTES
¿El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017, implica la trasgresión del principio de excepcionalidad, principio que regula la medida como de última ratio?	General: Determinar si el internamiento aplicado como medida socio educativa o medida coercitiva personal por los Jueces de Familia del Distrito Judicial de Piura durante el periodo del año 2016 y 2017 fue aplicado como medida de última ratio, atendiendo su carácter excepcional y subsidiario. Específicos: Determinar cuáles son los principales argumentos facticos y elementos de prueba	“El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida Socio Educativa o Medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y el 2017, implica la trasgresión del Principio de Excepcionalidad, principio que regula la medida como de ultima ratio”	V1: Implica la trasgresión del “Principio de Excepcionalidad”, principio que regula la aplicación de dicha medida como una de ultima.	I ¹ : PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD	I ₁ : La regla general I ₂ : respeto irrestricto I ₃ : Derecho a la Libertad Ambulatoria	- Doctrina. - Tratados Internacionales.
				I ² : MEDIDA DE ULTIMA RATIO	I ⁴ : casos excepcionales I ¹ : último recurso I ² : medidas alternativas a la privación de libertad	Tratados Internacionales

	utilizados por los Jueces de Familia de Piura para sustentar el internamiento como medida excepcional		V2: El internamiento ordenado por los Jueces de Familia de Piura como medida socio educativa o medida coercitiva personal durante el periodo del año 2016 y 2017.	I¹: EL INTERNAMIENTO	I¹: Medida socioeducativa privativa de libertad	- Código de los Niños y Adolescentes
	Determinar si la medida que implica la privación de libertad de los adolescentes, dada como medida socio educativa o medida coercitiva personal por la infracción de una ley penal, es aplicada únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible, en respeto de los derechos al debido proceso y las garantías judiciales de los adolescentes.			I²: JUECES DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA	I¹: Director I²: proceso I³: conducción I⁴: organización I⁵: desarrollo del debido proceso	-Código de los Niños y Adolescentes. -Doctrina.
	Comprobar si las sentencias proyectadas en los Juzgados de Familia durante el periodo del año 2016 y 2017 han sido emitidas vulnerando los principios que rigen la aplicación de las			I³: MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	I¹: acciones legales dispuestas por la autoridad judicial competente, I²: responsabilidad del adolescente I³: infracción penal	Doctrina
				I⁴: MEDIDA COERCITIVA PERSONAL	I¹: Detención de un individuo I²: afectación a la libertad personal	Doctrina

	<p>sanciones privativas de la libertad a los adolescentes en conflicto con la ley penal.</p> <p>Comprobar si existe deficiencias normativas en la dación de sentencias judiciales que imponen la sanción de internamiento en los Juzgados de Familia durante el año 2016 y 2017, lo que ha conllevado a la vulneración de los principios y estándares que establecen las normas que integran el corpus iuris internacional en materia de adolescentes infractores con la ley penal</p>				<p>I³: impidiendo su capacidad de locomoción</p> <p>I⁴:desplazamiento de un lugar a otro</p>	
--	--	--	--	--	--	--

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

SEÑOR:

DIANA BATISTA

ADMINISTRADORA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE
LA CSJ DE PIURA

PRESENTE:

2018
09.02.18
PIURA

DANIELA ESTEFANI VEGAS HERRERA, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, identificada con DNI N° 47258964, ante Usted me presento y expongo:

Que, en calidad de Bachiller y en culminación de proyecto de tesis para optar por el título de abogado, solicito a su despacho, ordene a quien corresponda me atienda con lo siguiente:

- Se me facilite los legajos de autos de los periodos 2016 y 2017 de los Juzgados de Familia (1º, 2º, 3º y 4º) que tiene a su cargo; ello con la finalidad de hacer un conteo de cuantos mandatos de internamiento se dictaron como medida coercitiva ~~penal~~ para menores infractores, y de esta manera sumar a la investigación que vengo realizando con asesoría de la **Dra. Jacqueline Sarmiento Rojas**.

Espero que anteceda a mi petición por ser de justicia.

Piura, 18 de abril del 2018



DANIELA ESTEFANI VEGAS HERRERA
DNI 47258964

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

INGRESOS Y PRODUCCIÓN POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA 2017

1° JUZGADO DE FAMILIA	CARGA AL 1° DE ENERO	INGRESOS 2017	
FAMILIA CIVIL	902	1204	2,106
FAMILIA TUTELAR	28	2	30
FAMILIA INFRACCIÓN	(43)	17	60
TOTAL	973	1223	

2° JUZGADO DE FAMILIA	CARGA AL 1° DE ENERO	INGRESOS 2017	
FAMILIA CIVIL	622	1459	2,081
FAMILIA TUTELAR	21	2	23
FAMILIA INFRACCIÓN	(36)	21	57
TOTAL	679	1482	

3° JUZGADO DE FAMILIA	CARGA AL 1° DE ENERO	INGRESOS 2017	
FAMILIA CIVIL	978	1391	2,369
FAMILIA TUTELAR	37	0	37
FAMILIA INFRACCIÓN	(8)	17	25
TOTAL	1023	1408	

4° JUZGADO DE FAMILIA	CARGA AL 1° DE ENERO	INGRESOS 2017	
FAMILIA CIVIL	909	1376	2,285
FAMILIA TUTELAR	47	0	47
FAMILIA INFRACCIÓN	(20)	21	49
TOTAL	976	1397	

mir a estadístico 23 Rno.

151
Rno - 12

20

P. 10

5

151
2017

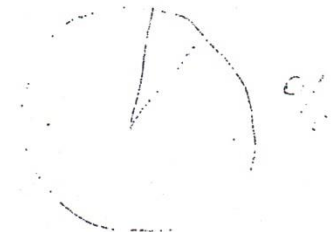
6 auto - 25

151

151

151

3-22-57
-15



2017

St.
aut.

1057
21
27-

S1B - EXPEDIENTES PRINCIPALES RESUELTOS EN TRAMITE, EJECUCION Y OTROS EGRESOS
Período: Enero - Diciembre 2017

3,5 millones = 100%
600.000 = 100% X?
600 x 100
3,5 m

DISTRITO JUDICIAL: PIURA

F.Centr. Hitos: 15/03/18 F.Import. Hitos: 16/03/18
F.Centr. Invent.: 27/09/17 F.Import. Invent.: 28/09/17

DEPENDENCIA/ INSTANCIA/ FUNCION/ ESPECIALIDAD	PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS								PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS	EXPEDIENTES CON RESOLUCION EJECUTADA	OTROS EGRESOS									TOTAL DE OTROS EGRESOS
	SENTEN CIAS	AUTO FINAL	CONCILIA DOS	INFORME FINAL	AUTO DE DEMANDA IMPROCE DENTE	APELACIONES					EXPEDIENTES						OTROS			
						CONFIRMA	REVOCA	ANULA			A OTRA DEPENDENCIA		ARCHIVO SIN EJECUCION	ARCHIVO PROVISIONAL		A FISCALIA POR RESERVA	CUAD ERNOS	EXHORTOS		
											EN TRAMITE	EJECUCION		EN TRAMITE	EJECUCION					
	A	B	D	E	U	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	
1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	272	79	3	0	12	3	0	1	370	35	5	5	36	0	0	0	2	0	2	SIJ
1º Juzgado Laboral DESCARGA Piura	272	79	3	0	12	3	0	1	370	35	5	5	36	0	0	0	2	0	2	SIJ
FUNCION ESTANDAR	272	79	3		12	3		1	370	35	5	5	36				2		2	
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO					3				3		1	3					2		2	
LABORAL - LABORAL	272	79	3		9	3		1	367	35	4	2	36							
2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	228	30	1	0	71	4	0	3	337	11	8	2	4	0	2	0	0	0	0	SIJ
2º Juzgado Laboral DESCARGA Piura	228	30	1	0	71	4	0	3	337	11	8	2	4	0	2	0	0	0	0	SIJ
FUNCION ESTANDAR	228	30	1		71	4		3	337	11	8	2	4		2					
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	7				20				27		4				2					
LABORAL - LABORAL	221	30	1		51	4		3	310	11	4	2	4							
3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	867	11	0	0	18	0	0	0	896	25	534	13	83	1	1	1	0	0	8	SIJ
3º Juzgado Laboral de Descarga Transitorio de Piura	867	11	0	0	18	0	0	0	896	25	534	13	83	1	1	1	0	0	8	SIJ
FUNCION ESTANDAR	867	11			18				896	25	534	13	83	1	1	1	0		8	
CIVIL - CIVIL					1				1											
LABORAL - CONSTITUCIONAL	1								1											
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	886	11			16				893	23	516	12	83	1	1	1	5		5	
LABORAL - LABORAL					1				1	2	18	1					3		3	
4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	436	48	0	0	13	0	0	1	498	5	318	71	5	0	0	0	2	0	2	SIJ
4º Juzgado de Trabajo Transitorio - SEDE APURIMAC	436	48	0	0	13	0	0	1	498	5	318	71	5	0	0	0	2	0	2	SIJ
FUNCION ESTANDAR	436	48			13			1	498	5	318	71	5				2		2	
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	363	29			7				399		65	7	1				1		1	
LABORAL - LABORAL	73	19			6			1	99	5	253	64	4				1		1	
1º JUZGADO DE FAMILIA	131	1,098	12	0	7	65	3	9	1,325	6	0	0	215	1	0	6	29	0	29	SIJ
1º Juzgado de Familia	131	1,098	12	0	7	65	3	9	1,325	6	0	0	215	1	0	6	29	0	29	SIJ
FUNCION ESTANDAR	131	1,098	12		7	65	3	9	1,325	6			215	1		6	29		29	
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	120	1,089	12		7	65	3	9	1,314	6			215			6	29		29	
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	2								9					1						
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR									2											
2º JUZGADO DE FAMILIA	168	1,157	22	0	4	75	7	3	1,436	13	1	10	246	2	1	0	34	0	34	SIJ
2º Juzgado de Familia	168	1,157	22	0	4	75	7	3	1,436	13	1	10	246	2	1	0	34	0	34	SIJ
FUNCION ESTANDAR	168	1,157	22		4	75	7	3	1,436	13	1	10	246	2	1		34		34	
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	156	1,151	22		4	75	7	3	1,418	13	1	10	246	2	1		34		34	

S1B - EXPEDIENTES PRINCIPALES RESUELTOS EN TRAMITE, EJECUCION Y OTROS EGRESOS
Período: Enero - Diciembre 2017

DISTRITO JUDICIAL: PIURA

F.Centr. Hitos: 15/03/18 F.Import. Hitos: 16/03/18
F.Centr. Invent.: 27/09/17 F.Import. Invent.: 28/09/17

DEPENDENCIA/ INSTANCIA/ FUNCION/ ESPECIALIDAD	PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS								PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS	EXPEDIENTES CON RESOLUCION EJECUTADA	OTROS EGRESOS									TOTAL DE OTROS EGRESOS
	SENTEN CIAS	AUTO FINAL	CONCILIA DOS	INFORME FINAL	AUTO DE DEMANDA IMPROCE DENTE	APELACIONES					EXPEDIENTES					OTROS				
						CONFIRMA	REVOCA	ANULA			A OTRA DEPENDENCIA		ARCHIVO SIN EJECUCION	ARCHIVO PROVISIONAL	A FISCALIA POR RESERVA	CUAD ERNOS	EXHORTOS			
											EN TRAMITE	EJECUCION						EN TRAMITE	EJECUCION	
	A	B	D	E	U	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	9	6							15											
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	3								3											
3° JUZGADO DE FAMILIA	37	1,082	0	0	5	22	3	3	1,152	0	2	0	452	0	0	0	19	0	19	
3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	37	1,082	0	0	5	22	3	3	1,152	0	2	0	452	0	0	0	19	0	19	
FUNCION ESTANDAR	37	1,082			5	22	3	3	1,152		2		452				19		19	
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	37	1,081			5	22	3	3	1,151		2		452				19		19	
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION		1							1								19		19	
4° JUZGADO DE FAMILIA	153	1,181	14	0	7	65	0	4	1,424	0	2	0	612	0	1	0	20	0	20	
4° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	153	1,181	14	0	7	65	0	4	1,424	0	2	0	612	0	1	0	20	0	20	
FUNCION ESTANDAR	153	1,181	14		7	65		4	1,424		2		612		1		20		20	
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	146	1,174	14		7	65		4	1,410		2		612				20		20	
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	4	6							10										20	
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	3	1							4						1					
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA	344	295	122	0	36	0	0	0	797	31	198	0	9	1	0	0	1	0	1	
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede	344	295	122	0	36	0	0	0	797	31	198	0	9	1	0	0	1	0	1	
Calle TACNA																				
FUNCION ESTANDAR	344	295	122		36				797	31	198		9	1			1		1	
CIVIL - CIVIL					1				1											
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	344	295	122		35				796	31	198		9	1			1		1	
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL	54	870	0	0	27	0	0	0	951	37	239	2	0	10	5	0	8	0	8	
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Grau	54	870	0	0	27	0	0	0	951	37	239	2	0	10	5	0	8	0	8	
FUNCION ESTANDAR	54	870			27				951	37	239	2		10	5		8		8	
CIVIL - CIVIL	52	859			27				938	37	237	2		10	5		8		8	
CIVIL - COMERCIAL	1	1							1		1									
CIVIL - CONSTITUCIONAL	1								1											
CIVIL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	1	10							11		1									
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA	414	381	142	0	12	10	0	0	959	5	244	3	0	0	423	0	0	0	0	
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede	414	381	142	0	12	10	0	0	959	5	244	3	0	0	423	0	0	0	0	
Calle TACNA																				
FUNCION ESTANDAR	414	381	142		12	10			959	5	244	3			423					
CIVIL - CIVIL															204					

PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS POR MESES

DISTRITO JUDICIAL: PIURA

PERIODO: 2017

TIPO EXPEDIENTE: TRAMITE

F.Centr. Hitos: 15/03/18

F.Importación:

F.Importación:		16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	16/03/18	TOTAL
DEP./INST./FUNC./ESPECIALIDAD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESUELTOS
DIS.	PIURA	2,626	1,786	928	1,107	1,854	2,392	2,505	2,727	2,556	2,200	2,829	3,073	26,583
	CIVIL - CIVIL	1												1
	LABORAL - LABORAL												1	1
	LABORAL - CONSTITUCIONAL										1			1
	LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	80	82	7	82	80	82	81	88	85	56	99	71	893
	4° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	33	31	22	16	9	25	50	82	63	25	79	63	498 SIJ
	4° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO - SEDE APURIMAC	33	31	22	16	9	25	50	82	63	25	79	63	498 SIJ
	FUNCION ESTANDAR	33	31	22	16	9	25	50	82	63	25	79	63	498
	LABORAL - LABORAL	31	31	22	14							1		99
	LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	2			2	9	25	50	82	63	25	78	63	399
	1° JUZGADO DE FAMILIA	91	118	16	0	40	102	119	114	209	75	235	206	1,325 SIJ
	1° JUZGADO DE FAMILIA	91	118	16	0	40	102	119	114	209	75	235	206	1,325 SIJ
	FUNCION ESTANDAR	91	118	16		40	102	119	114	209	75	235	206	1,325
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	91	115	16		40	102	119	114	209	74	233	201	1,314
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR		2											2
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION		1								1	2	5	9
	2° JUZGADO DE FAMILIA	234	130	34	4	207	98	90	123	97	129	168	122	1,436 SIJ
	2° JUZGADO DE FAMILIA	234	130	34	4	207	98	90	123	97	129	168	122	1,436 SIJ
	FUNCION ESTANDAR	234	130	34	4	207	98	90	123	97	129	168	122	1,436
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	230	128	33	4	206	95	90	123	97	126	167	119	1,418
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR										3			3
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	4	2	1		1	3					1	3	15
	3° JUZGADO DE FAMILIA	143	135	35	0	71	125	96	108	98	98	73	170	1,152 SIJ
	3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	143	135	35	0	71	125	96	108	98	98	73	170	1,152 SIJ
	FUNCION ESTANDAR	143	135	35		71	125	96	108	98	98	73	170	1,152
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	143	135	35		71	125	96	108	98	98	73	169	1,151
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION												1	1
	4° JUZGADO DE FAMILIA	235	131	63	93	109	120	111	115	128	78	127	114	1,424 SIJ
	4° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	235	131	63	93	109	120	111	115	128	78	127	114	1,424 SIJ
	FUNCION ESTANDAR	235	131	63	93	109	120	111	115	128	78	127	114	1,424
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	230	130	63	93	109	120	109	115	124	77	126	114	1,410
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	1								3				4
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	4	1				2			1	1	1		10
	1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA	70	70	14	60	70	71	80	87	85	73	70	47	797 SIJ
	1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Calle TACNA	70	70	14	60	70	71	80	87	85	73	70	47	797 SIJ
	FUNCION ESTANDAR	70	70	14	60	70	71	80	87	85	73	70	47	797

S1B - EXPEDIENTES PRINCIPALES RESUELTOS EN TRAMITE, EJECUCION Y OTROS EGRESOS
Período: Enero - Diciembre 2016

DISTRITO JUDICIAL: PIURA

F.Centr. Hitos: 15/06/17 F.Import. Hitos: 08/09/17
F.Centr. Invent.: 07/03/16 F.Import. Invent.: 12/04/16

DEPENDENCIA/ INSTANCIA/ FUNCION/ ESPECIALIDAD	PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS								PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS	EXPEDIENTES CON RESOLUCION EJECUTADA	OTROS EGRESOS								TOTAL DE OTROS EGRESOS
	SENTEN CIAS	AUTO FINAL	CONCILIA DOS	INFORME FINAL	AUTO DE DEMANDA IMPROCE DENTE	APELACIONES					EXPEDIENTES				OTROS				
						CONFIRMA	REVOCA	ANULA			A OTRA DEPENDENCIA	ARCHIVO SIN EJECUCION	ARCHIVO PROVISIONAL		A FISCALIA POR RESERVA	CUAD ERNOS	EXHORTOS		
													EN TRAMITE	EJECUCION				EN TRAMITE	
	A	B	D	E	U	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
LABORAL - LABORAL	6				8				14	6	32	2	7				8		8
1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	486	43	4	0	20	7	1	3	564	47	182	0	7	0	0	0	1	0	1 SIJ
1º Juzgado Laboral DESCARGA Piura	486	43	4	0	20	7	1	3	564	47	182	0	7	0	0	0	1	0	1 SIJ
FUNCION ESTANDAR	486	43	4		20	7	1	3	564	47	182		7				1		1
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	9				1				10	1	9								
LABORAL - LABORAL	477	43	4		19	7	1	3	554	46	173		7				1		1
2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	424	47	3	0	84	0	2	7	567	7	45	2	4	1	6	0	9	0	9 SIJ
2º Juzgado Laboral DESCARGA Piura	424	47	3	0	84	0	2	7	567	7	45	2	4	1	6	0	9	0	9 SIJ
FUNCION ESTANDAR	424	47	3		84		2	7	567	7	45	2	4	1	6		9		9
LABORAL - CONSTITUCIONAL					2				2										
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3				11				14		4	2							
LABORAL - LABORAL	421	47	3		71		2	7	551	7	41		4	1	6		9		9
3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	596	25	0	0	140	0	0	0	761	50	135	38	19	1	2	14	7	0	7 SIJ
3º Juzgado Laboral de Descarga Transitorio de Piura	596	25	0	0	140	0	0	0	761	50	135	38	19	1	2	14	7	0	7 SIJ
FUNCION ESTANDAR	596	25			140				761	50	135	38	19	1	2	14	7		7
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	592	25			139				756	47	96	33	18	1	2	14	5		5
LABORAL - LABORAL	4				1				5	3	39	5	1				2		2
4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO	277	64	4	0	22	2	0	2	371	1	2	2	0	0	0	0	4	0	4 SIJ
4º Juzgado de Trabajo Transitorio - SEDE APURIMAC	277	64	4	0	22	2	0	2	371	1	2	2	0	0	0	0	4	0	4 SIJ
FUNCION ESTANDAR	277	64	4		22	2		2	371	1	2	2					4		4
LABORAL - CONSTITUCIONAL		1							1										
LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	2								2										
LABORAL - LABORAL	275	63	4		22	2		2	368	1	2	2					4		4
1º JUZGADO DE FAMILIA	150	1,364	18	0	10	48	4	5	1,599	29	285	9	13	1	0	960	29	4	33 SIJ
1º JUZGADO DE FAMILIA	150	1,364	18	0	10	48	4	5	1,599	29	285	9	13	1	0	960	29	4	33 SIJ
FUNCION ESTANDAR	150	1,364	18		10	48	4	5	1,599	29	285	9	13	1		960	29	4	33
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	138	1,359	18		9	48	4	5	1,581	26	271	8	10			958	29	2	31
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	10	3							13	1	6		2			2		2	2
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	2	2			1				5	2	8	1	1	1					
2º JUZGADO DE FAMILIA	174	1,640	17	0	12	145	12	17	2,017	8	463	26	44	1	3	1,057	35	0	35 SIJ
2º JUZGADO DE FAMILIA	174	1,640	17	0	12	145	12	17	2,017	8	463	26	44	1	3	1,057	35	0	35 SIJ
FUNCION ESTANDAR	174	1,640	17		12	145	12	17	2,017	8	463	26	44	1	3	1,057	35		35
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	167	1,620	17		12	145	12	17	1,990	8	426	26	44	1	3	1,056	35		35
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	5	16							21		20								
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	2	4							6		17					1			

S1B - EXPEDIENTES PRINCIPALES RESUELTOS EN TRAMITE, EJECUCION Y OTROS EGRESOS
Período: Enero - Diciembre 2016

DISTRITO JUDICIAL: PIURA

F.Centr. Hitos: 15/06/17 F.Import. Hitos: 08/09/17
F.Centr. Invent.: 07/03/16 F.Import. Invent.: 12/04/16

DEPENDENCIA/ INSTANCIA/ FUNCION/ ESPECIALIDAD	PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS								PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS	EXPEDIENTES CON RESOLUCION EJECUTADA	OTROS EGRESOS									TOTAL DE OTROS EGRESOS
	SENTEN CIAS	AUTO FINAL	CONCILIA DOS	INFORME FINAL	AUTO DE DEMANDA IMPROCE DENTE	APELACIONES					EXPEDIENTES					OTROS				
						CONFIRMA	REVOCA	ANULA			A OTRA DEPENDENCIA	ARCHIVO SIN EJECUCION	ARCHIVO PROVISIONAL	A FISCALIA POR RESERVA	CUAD ERNOS	EXHORTOS				
																	EN TRAMITE	EJECUCION	EN TRAMITE	
	A	B	D	E	U	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	
3° JUZGADO DE FAMILIA	5	323	0	0	4	0	0	0	332	0	22	2	0	0	0	0	1	0	1	SU
3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	5	323	0	0	4	0	0	0	332	0	22	2	0	0	0	0	1	0	1	SU
FUNCION ESTANDAR	5	323			4				332		22	2					1		1	
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	5	321			4				330		20	2					1		1	
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION		2							2											
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR											2									
4° JUZGADO DE FAMILIA	39	391	2	0	2	3	1	0	438	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	SU
4° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	39	391	2	0	2	3	1	0	438	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	SU
FUNCION ESTANDAR	39	391	2		2	3	1		438		29									
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	36	390	2		2	3	1		434		29									
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	2	1							3											
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	1								1											
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO	434	55	1	0	9	57	2	6	564	1	1,165	234	0	0	1	0	4	0	4	SU
JUZGADO DE FAMILIA DE	434	55	1	0	9	57	2	6	564	1	1,165	234	0	0	1	0	4	0	4	SU
DESCARGA-PIURA																				
FUNCION ESTANDAR	434	55	1		9	57	2	6	564	1	1,165	234			1		4		4	
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	428	49	1		9	57	2	6	552	1	1,134	230			1		4		4	
FAMILIA - FAMILIA INFRACCION		1							1			1								
FAMILIA - FAMILIA TUTELAR	6	5							11		31	3								
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA	309	310	127	0	34	0	0	0	780	32	63	1,662	3	0	3	0	0	0	0	SU
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede	309	310	127	0	34	0	0	0	780	32	63	1,662	3	0	3	0	0	0	0	SU
Calle TACNA																				
FUNCION ESTANDAR	309	310	127		34				780	32	63	1,662	3		3					
CIVIL - CIVIL												1								
FAMILIA - FAMILIA CIVIL	309	310	127		34				780	32	63	1,661	3		3					
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL	87	738	1	0	40	0	0	0	856	106	266	11	0	2	6	0	47	0	47	SU
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Grau	87	738	1	0	40	0	0	0	856	106	266	11	0	2	6	0	47	0	47	SU
FUNCION ESTANDAR	87	738	1		40				836	106	266	11		2	6		47		47	
CIVIL - CIVIL	86	734	1		40				861	104	264	11		2	6		46		46	
CIVIL - COMERCIAL		2							2		2									
CIVIL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	1	2							3	2							1		1	

PROCESOS PRINCIPALES RESUELTOS POR MESES

DISTRITO JUDICIAL: PIURA

PERIODO: 2016

TIPO EXPEDIENTE: TRAMITE

F.Centr. Hitos: 15/06/17

F.Importación:

F.Importación:		08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	08/09/17	TOTAL
DEP/INST/FUNC/ESPECIALIDAD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESUELTOS	
DIS.	PIURA	2,516	843	2,740	2,895	3,037	2,869	2,521	2,679	2,694	2,435	1,930	544	27,703	
	1° JUZGADO DE FAMILIA	173	185	217	214	224	164	108	108	85	66	55	0	1,599	SIJ
	FUNCION ESTANDAR	173	185	217	214	224	164	108	108	85	66	55		1,599	
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	171	185	213	213	221	162	107	107	84	64	54		1,581	
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR			2		2		1						5	
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	2		2	1	1	2	1	1	1	2	1		13	
	2° JUZGADO DE FAMILIA	246	194	192	272	241	208	184	120	133	135	91	1	2,017	SIJ
	2° JUZGADO DE FAMILIA	246	194	192	272	241	208	184	120	133	135	91	1	2,017	SIJ
	FUNCION ESTANDAR	246	194	192	272	241	208	184	120	133	135	91	1	2,017	
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	241	194	188	267	240	205	183	115	130	135	91	1	1,990	
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR			1	2	1			2					6	
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION	5		3	3		3	1	3	3				21	
	3° JUZGADO DE FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	77	104	54	92	5	332	SIJ
	3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	77	104	54	92	5	332	SIJ
	FUNCION ESTANDAR								77	104	54	92	5	332	
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL								77	104	54	90	5	330	
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION											2		2	
	4° JUZGADO DE FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	73	130	97	120	18	438	SIJ
	4° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	73	130	97	120	18	438	SIJ
	FUNCION ESTANDAR								73	130	97	120	18	438	
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL								73	130	97	116	18	434	
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR											1		1	
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION											3		3	
	JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO	73	0	68	54	74	74	71	76	74	0	0	0	564	SIJ
	JUZGADO DE FAMILIA DE DESCARGA-Piura	73	0	68	54	74	74	71	76	74	0	0	0	564	SIJ
	FUNCION ESTANDAR	73		68	54	74	74	71	76	74				564	
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	73		67	52	73	72	70	74	71				552	
	FAMILIA - FAMILIA TUTELAR			1	2	1	2	1	1	3				11	
	FAMILIA - FAMILIA INFRACCION								1					1	
	1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA	70	6	71	79	85	90	79	71	79	76	54	20	780	SIJ
	1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Calle TACNA	70	6	71	79	85	90	79	71	79	76	54	20	780	SIJ
	FUNCION ESTANDAR	70	6	71	79	85	90	79	71	79	76	54	20	780	
	FAMILIA - FAMILIA CIVIL	70	6	71	79	85	90	79	71	79	76	54	20	780	
	2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL	98	0	101	99	100	100	70	70	71	71	72	14	866	SIJ
	2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Grau	98	0	101	99	100	100	70	70	71	71	72	14	866	SIJ
	FUNCION ESTANDAR	98		101	99	100	100	70	70	71	71	72	14	866	
	CIVIL - CIVIL	97		100	99	99	100	69	70	71	71	71	14	861	